

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Facultad de Jurisprudencia

Tesina previa a la obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas

**“¿Es legal la obligación impuesta por las casas comerciales automotrices de realizar todo tipo de mantenimiento únicamente en sus talleres sopena de perder la garantía de fábrica que tienen los vehículos cero kilómetros?”**

David Rafael Maya Almeida

Director de tesis: Doctor Ernesto Guarderas Izquierdo

Quito, Septiembre 2011

***DEDICATORIA:***

*A mis padres Fabián y Mónica,  
a quienes Dios les pudo haber dado un mejor hijo,  
pero a mi jamás unos mejores padres.*

***AGRADECIMIENTOS:***

*A Dios ante todo y por todo,  
a mi familia por su amor y apoyo incondicional,  
a la Facultad de Jurisprudencia de la PUCE,  
a todos mis maestros, en especial  
al Doctor Ernesto Guarderas Izquierdo.*

Desde la caída del sucre a finales del año 1999 y con ello la dolarización del Estado Ecuatoriano en el 2000 la comercialización de vehículos aumento notablemente en el país, en un principio el mercado de vehículos de segunda mano fue un muy atractivo negocio, luego fueron los coches nuevos de paquete y cero kilómetros los que eran demandados por la ciudadanía en general, de manera que las casas comerciales automotrices aumentaron las importaciones de estos, pero no solo incremento la importación de vehículos nuevos sino también la de partes y repuestos incluso en proporción mayor a la de los coches, todo esto debido a la rentabilidad que demostró el servicio postventa que brindan los concesionarios.

Es así, que las casas comerciales automotrices encontraron la forma de vincular a los compradores de sus vehículos directamente al servicio postventa que ofrecen sus talleres, siendo la garantía de fábrica la solución, pues su existencia y reconocimiento la condicionaron a un tiempo de vigencia o kilometraje recorrido que le dan a sus vehículos vendidos, por citar un ejemplo, el muy conocido “5 años o 100mil kilómetros”.

Por lo mencionado, el presente trabajo analiza a lo largo de sus capítulos la naturaleza jurídica de los vehículos como bienes, su clasificación, el contrato de compraventa, los derechos y obligaciones que se desprenden de la celebración del mencionado instrumento, estudia también al contrato de adhesión, ciertas prácticas prohibidas descritas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, pero también y especialmente describe, desarrolla y analiza el tema de las garantías de fábrica, los derechos y obligaciones que de estas garantías nacen,

revisamos además como se vinculan estas con los vicios redhibitorios de acuerdo al código civil ecuatoriano.

Finalmente determinamos algunos problemas frecuentes que se presentan en el uso y ejecución de las garantías de fábrica por lo que a la mano de estos inconvenientes señalamos distintas acciones y mecanismos a través de los cuales, los compradores, usuarios y clientes en general pueden ejercer su derecho de acción encaminado a exigir la protección y reconocimiento de sus derechos.

## **TABLA DE CONTENIDOS**

### **CAPITULO I**

|   |         |
|---|---------|
| Introducción  | Pág. 1  |
| Antecedentes de la comercialización de automóviles nuevos en el Ecuador     | Pág. 2  |
| Conceptos básicos de carácter comercial relativos a la industria automotriz | Pág. 9  |
| Fabricación y ensamblaje de estos en el país                                | Pág. 14 |
| Comercialización  | Pág. 15 |
| Conclusiones y recomendaciones  | Pág. 16 |

### **CAPITULO II**

|   |         |
|---|---------|
| Naturaleza jurídica de los vehículos automotores                    | Pág. 19 |
| Clasificación de los vehículos como bienes                          | Pág. 19 |
| Contrato de compraventa de un vehículo automotor                    | Pág. 26 |
| El consentimiento como elemento más importante del negocio jurídico | Pág. 33 |
| De los contratos  | Pág. 47 |
| El contrato de compraventa  | Pág. 51 |
| El contrato por adhesión  | Pág. 53 |
| Prácticas prohibidas a los contratos o vendedores                   | Pág. 60 |
| Conclusiones  | Pág. 65 |

### **CAPITULO III**

|   |         |
|---|---------|
| Derechos y obligaciones que nacen de una relación jurídica en la que esta inmersa una garantía de fábrica | Pág. 69 |
| Derechos  | Pág. 69 |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Obligaciones que adquieren las partes | Pág. 74 |
| Vicios redhibitorios                  | Pág. 77 |
| Conclusiones y recomendaciones        | Pág. 82 |

#### **CAPITULO IV**

|  |         |
|--|---------|
| Naturaleza jurídica de la garantía               | Pág. 85 |
| Análisis jurídico sobre las garantías de fábrica | Pág. 88 |
| Garantía de la Garantía                          | Pág. 96 |
| Conclusiones y recomendaciones                   | Pág. 97 |

#### **CAPITULO V**

|  |          |
|--|----------|
| Problemas frecuentes que se presentan en el uso y ejecución de la garantía | Pág. 100 |
| Alternativas del comprador – proceso y procedimientos a seguir             | Pág. 103 |
| Acciones de Garantías Constitucionales                                     | Pág. 104 |
| Acciones al amparo de la ley orgánica de defensa del consumidor            | Pág. 121 |
| Procedimiento a través del defensor del pueblo                             | Pág. 122 |
| Procedimiento a través de las asociaciones de consumidores                 | Pág. 127 |
| Procedimiento ante el juez de contravenciones                              | Pág. 129 |
| Acciones civiles   | Pág. 137 |
| Conclusiones y recomendaciones   | Pág. 143 |

#### **BIBLIOGRAFIA**

|          |
|----------|
| Pág. 148 |
|----------|

## **CAPITULO 1**

### **1.1 Introducción**

Éste primer capítulo cumple con un objetivo introductorio, al desarrollar, aunque de manera general pero bastante útil, temas que si bien los escuchamos de manera frecuente, no siempre los logramos contextualizar en el nivel jurídico, económico y social que merecen.

Del estudio realizado se desprende que los ciudadanos en general deberíamos cuestionarnos y poner énfasis en investigar y demandar información por parte de las autoridades y órganos de control, sobre si existen instrumentos normativos establecidos encaminados a controlar la calidad de los vehículos y demás bienes que ingresan al país, tanto en la parte técnica, como en la seguridad que estos deben ofrecer, o si tan solo el fin de los controles previos y posteriores a la importación de productos se limita a una verificación del número y precio de las unidades automotores que ingresan al territorio ecuatoriano para que los importadores declaren sus obligaciones tributarias y arancelarias, pero sin tomar en cuenta ni pensar todo aquello que involucra y se desenvuelve una vez que los vehículos empiezan a ser comercializados internamente a los consumidores finales.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Por ejemplo la emisión de los certificados de inspección está sujeta al control previo en base a la verificación del cumplimiento de lo pactado en los términos sobre lo que se ha declarado que se está importando, más no a que lo importado realmente cumpla con una calidad mínima.

Resulta necesario además definir si las políticas públicas adelantadas por el gobierno respecto a la importación de vehículos automotores de acuerdo a los resultados obtenidos han sido las correctas o no, si ellas han logrado garantizar y proteger los derechos que los ecuatorianos tenemos, o si tan solo el Estado regula y controla que la importación de coches cumpla con todos los requisitos formales y de papeleo en lugar de asegurar a los ciudadanos el ingreso de productos de calidad.

Es importante investigar qué hace y ha hecho el estado ecuatoriano en la implementación de políticas públicas respecto a la existencia de vehículos automotores en el país, para asegurar y defender tanto la fabricación e importación de productos de calidad a favor de nosotros los consumidores finales, como los derechos de los profesionales y trabajadores cuya actividad y medio de subsistencia se vincula directamente con la industria automotriz, pues es obligación de todos los ciudadanos del Ecuador exigir, de acuerdo a lo establecido por nuestra Constitución, una gestión dirigida a equilibrar las posibilidades de todos a participar en cualquier actividad productiva, estableciendo pues políticas públicas que permitan la libre competencia, el fácil acceso, y sobre todo el control de la existencia de prácticas monopólicas.

## **1.2 Antecedentes de la comercialización de automóviles nuevos en el Ecuador**

La industria automotriz incluye áreas y etapas muy variadas, simples y complejas que van desde que un ingeniero realiza el primer trazado del diseño aerodinámico del vehículo sobre un papel en blanco, o el cálculo matemático dentro del proceso de fabricación para aproximar el precio al cual saldrá a la venta al público cada unidad completamente acabada o por partes, hasta la fusión de dos o más empresas automotrices gigantes ya sea con el



objetivo de mejorar sus productos, abaratar costos, eliminar la competencia, reducir personal, o simplemente por hacer el intento de no desaparecer.

Para el desarrollo de este trabajo es conveniente conocer las generalidades de la industria automotriz y entender el por qué de la necesidad de investigar y analizar si es legal la obligación que imponen los concesionarios automotrices a los propietarios de vehículos nuevos de realizar todos los chequeos y mantenimientos específicamente en sus talleres so pena de perder la garantía de fábrica.

En este primer capítulo analizaremos ciertos antecedentes fundamentales para conocer de forma macro y general a los agentes y elementos que intervienen en este tema.

En el Ecuador el principal órgano del Estado del cual emanan las regulaciones más determinantes en este tema es el Ministerio de Industrias y Productividad del Ecuador (MIPRO) que tiene como misión única:

“Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal, a través de la formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos especializados, que incentiven la inversión e innovación tecnológica para promover la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el medio ambiente, que genere empleo digno y permita su inserción en el mercado interno y externo.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> [http://www.micip.gov.ec/index.php?option=com\\_content&view=article&id=446&Itemid=5](http://www.micip.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=5)

### **1.3 Pasemos a analizar los elementos que forman parte de esta misión:**

- a) ***Impulsar el desarrollo del sector productivo industrial y artesanal.-*** La palabra desarrollo implica un crecimiento, una expansión, pero no apresurado ni improvisado sino al contrario debe ser firme, producto de principios y la voluntad de alcanzar objetivos claros, que provoque estabilidad no solo para quienes estén directamente relacionados, sino incluso para terceras personas que aunque sin tener vínculo alguno conocen y confían en determinada industria por el desarrollo alcanzado.

Para que se pueda hablar de desarrollo del sector productivo debemos entender hasta aquí, que la gestión del Ministerio de Industrias y Productividad deberá estar siempre dirigida a equilibrar las posibilidades de todos los ciudadanos a participar en cualquier actividad productiva, estableciendo pues políticas públicas que permitan la libre competencia, el fácil acceso, y sobre todo el control de la existencia de prácticas monopólicas.

- b) ***Formulación y ejecución de políticas públicas, planes, programas y proyectos especializados.-*** Las políticas públicas se elaboran generalmente a partir de un diagnóstico crítico que se hace a un determinado sector, en el que se identifica los aspectos más relevantes en los que el Estado deberá intervenir para lograr alcanzar los objetivos y metas deseadas, tomando en cuenta cada uno de los elementos inmersos en determinado ámbito, procurando el cuidado del ambiente y el uso racional de los recursos.

Cabe señalar que desde los años ochenta en el Ecuador se han ido implementando programas de reajuste estructural y liberación o apertura comercial que tenían como objetivos prioritarios la reactivación económica, el ajuste y la estabilización, provocando una disminución significativa de la participación del Estado como ente planificador y regulador de las actividades económicas y productivas. Lo que ocasionó que el sector privado prácticamente se regule por sí solo y lo que es peor sin que exista el menor control, antecedentes suficientes para que muchas medianas y pequeñas empresas hayan tenido que desaparecer, para que muchas personas hayan perdido su trabajo, para que las grandes empresas hayan podido lograr ser ahora aún más grandes, y como consecuencia de todo esto los consumidores de bienes y productos queden totalmente a merced de las condiciones e imposiciones de estas.

La Constitución de la República en el artículo 85 respecto de las políticas públicas manifiesta: “La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones:

- a. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir<sup>3</sup> y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.

---

<sup>3</sup> **PLAN NACIONAL PARA EL BUEN VIVIR 2009-2013.-** Este plan integra 12 objetivos a los cuales deberían encaminarse todos los esfuerzos del gobierno. Para el tema que nos compete son los objetivos 1 y 6 los de mayor influencia.

**Objetivo 1:** Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial en la diversidad.- Democratizar los medios de producción para generar condiciones y oportunidades equitativas. Fomentar acciones afirmativas que beneficien el acceso y la generación de infraestructuras de apoyo para la producción y comercialización, ciencia y tecnología, información, conocimientos ancestrales, capacitación, asistencia técnica y financiamiento a los grupos humanos históricamente excluidos social, económica y territorialmente.

- b. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán alternativas que concilien los derechos en conflicto.
- c. El estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.”<sup>4</sup>

Al referirnos a la industria automotriz en el Ecuador difícilmente podremos encontrar claros ejemplos que demuestren la eficacia de las políticas públicas hasta ahora implantadas ya que muy contrarias a las intenciones que hayan tenido los últimos gobiernos del Ecuador, la situación actual demuestra que la producción nacional no ha crecido, la fabricación interna de productos automotrices no se ha desarrollado, y en general el Ecuador se mantiene produciendo los mismos productos con la misma tecnología y con los mismos materiales de hace 10 años atrás, es decir no ha expandido su industria interna, no ha logrado desarrollar la obtención nacional de nuevos productos o nuevas materias, siendo la exportación

---

**Objetivo 6:** Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de formas impulsar actividades económicas que conserven empleos y fomenten la generación de nuevas plazas, así como la disminución progresiva del subempleo y desempleo

<sup>4</sup> Constitución de la República del Ecuador, 2008

de materia prima (misma que tarde o temprano regresa industrializada y con precios elevados), la que ha incrementado.

El gobierno de la revolución ciudadana<sup>5</sup> ha elaborado una política industrial que establece principios, estrategias, objetivos, planes de acción, programas y proyectos; y contempla una importante participación y articulación de los sectores público y privado, además de la academia, lo que permitirá iniciar una nueva etapa de industrialización, acorde a los cambios de orden social, económicos y políticos que se viven en el país.<sup>6</sup> El objetivo general de la política industrial es lograr cambiar el patrón productivo del país, dejando de lado el modelo primario – extractivo – exportador - al cual se ha sujetado el Ecuador, por otro nuevo que permita la creación de empleo de calidad, así como elevar los niveles de productividad, dirigiendo el ahorro hacia la inversión productiva.<sup>7</sup>

c) ***Incentivar la inversión e innovación tecnológica.***-<sup>8</sup> Tradicionalmente, se ha creído en el Ecuador que el incentivo a la inversión extranjera proviene de dos fuentes: la legal y la macro. Al menos, cuando se ha hablado de este tema o realizado alguna acción política al respecto, estas dos dimensiones han sido, sino las únicas, las más importantes en la lógica de la atracción a la inversión extranjera directa.

---

<sup>5</sup> “Gobierno de la Revolución Ciudadana”.- Nombre con el que se identifica al gobierno presidido por el Econ. Rafael Correa Delgado, elegido constitucionalmente y en el poder desde enero del 2006 hasta la presente fecha

<sup>6</sup> Política Industrial del Ecuador 2008-2012.

<sup>7</sup>[http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news\\_user\\_view/ministro\\_xavier\\_abad\\_politica\\_industrial\\_cambiara\\_el\\_patron\\_productivo\\_del\\_ecuador\\_audio--97042](http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ministro_xavier_abad_politica_industrial_cambiara_el_patron_productivo_del_ecuador_audio--97042)

<sup>8</sup> <http://www.coinvertir.org.ec>

En el campo del entorno legislativo, se han emitido leyes con el membrete de “regulaciones para atraer la inversión extranjera directa”, o “atracción a la inversión extranjera directa”, etc. La mayoría de estas leyes han enfrentado serias contradicciones no sólo en el pronunciamiento teórico. Mucho más se ha alcanzado en el entorno macro<sup>9</sup>, sin embargo, el avance es todavía muy deficiente. Las políticas de estabilización económica<sup>10</sup> han sido tibiamente ejecutadas por los últimos gobiernos, a tal punto que la inflación, a pesar de haber sido dolarizados desde hace 10 años, ha permanecido incrementándose y subsistiendo aun problemas serios de déficit fiscal. Frente a este panorama de inestabilidad y desconcierto, existe cierto reconocimiento público, político y empresarial de que se deben corregir estas deficiencias de orden fiscal y estructural para dar paso a la tan esperada modernización<sup>11</sup>. Se ha avanzado algo en las políticas de ajuste estructural, especialmente en el orden del marco regulatorio.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Para que el sistema financiero pueda operar eficientemente, captando y canalizando los recursos hacia aquellas actividades económicas en las cuales existan ventajas comparativas y se logre alcanzar mayores niveles de desarrollo,

<sup>10</sup> La estabilidad económica es condición indispensable para generar confianza y fomentar la inversión productiva nacional y extranjera, lo cual, a su vez, genera crecimiento económico sostenible y permite disminuir estructuralmente la pobreza.

<sup>11</sup> La modernización consiste en la prestación de servicios públicos y las actividades económicas por parte de la iniciativa privada mediante la desmonopolización, la libre competencia y la delegación de los servicios o actividades.

<sup>12</sup> Leyes de desregulación del comercio y comercialización interna, del mercado de valores, del sistema financiero, de aguas y riego, de tenencia de la tierra, etc.

#### **1.4 Analicemos ahora brevemente ciertos conceptos básicos de carácter comercial relativos a la industria automotriz.-**

Es importante al menos mencionar el tema de las importaciones con la finalidad de analizar si el estado ecuatoriano prevé dentro de sus regulaciones, parámetros encaminados a asegurar a los compradores de vehículos nuevos importados, el ingreso al país de productos al menos con una calidad mínima, los cuales luego de ser vendidos puedan por alguna razón estar sujetos a condicionamientos de uso y mantenimiento impuestos por las casas comerciales que los venden. Por lo tanto es imprescindible desarrollar algunas definiciones, así:

**1.4.1 Importación.-** es un proceso del comercio internacional a través del cual se trae mercaderías (bienes corporales muebles) del exterior, ya sea como bienes de capital, o bienes destinados al uso o consumo. Este proceso implica una secuencia de pasos a ejecutar<sup>13</sup>, culminando con la nacionalización<sup>14</sup> de los productos importados.

**1.4.2 ¿Qué se puede importar?** Se puede importar cualquier mercadería<sup>15</sup> que esté comprendida en el universo arancelario<sup>16</sup>, excepto aquellas de prohibida importación<sup>17</sup>, y aquellas mercaderías que deben cumplir con varios tipos de controles previos.<sup>18</sup>

---

<sup>13</sup> En el Registro Oficial No. 196 de 23 de octubre de 2007, se ha promulgado la Ley Reformativa de la Ley Orgánica de Aduanas (**Ley derogada mediante transitoria del nuevo Código de Productividad 2011**), con la que entre otros aspectos, se modifica el artículo 44 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado y se elimina el visto bueno para importar y exportar que concedía el Banco Central del Ecuador.

<sup>14</sup> **Nacionalización de mercancías:** Instante en que ocurre el pago de los derechos de internación y de los impuestos internos aplicables, tales como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre otros, que habilitan al importador para ingresar bienes al país.

<sup>15</sup> Los productos que requieren autorizaciones previas para la importación se encuentran en el Acuerdo 02 428 (R.O.707,19-XI-2002).

<sup>16</sup> [http://www.acuerdoscomerciales.cl/normas\\_arancelarias.htm](http://www.acuerdoscomerciales.cl/normas_arancelarias.htm)

<sup>17</sup> Nómina de mercadería de prohibida importación, Resolución COMEXI 182 Anexo I.; Resolución 182 de COMEXI (RO57,8-IV-2003) nomina de mercaderías de prohibida importación.

**1.4.3 Mecanismos para-arancelarios.-** Se llaman así porque van casi en forma conjunta con las tarifas arancelarias que se fijan a los productos de importación.

Hay tres clases de mecanismos:

- a) **Cualitativos:** Están determinados por normas y procedimientos de carácter administrativo necesarios para poder importar. Estos mecanismos consisten en certificados, autorizaciones y licencias.

Existen algunos tipos de certificados de importación, de los cuales vamos a analizar únicamente aquellos cuya utilidad e información se apegan al motivo de esta investigación, así:

- **Certificado de inspección.-** Es emitido por un organismo privado internacional que nos indica que el producto cumple en calidad, cantidad y valor con los términos contractuales establecidos. Se solicita a pedido del importador para verificar si su mercadería corresponde o no a las cláusulas del contrato, previo el embarque.
- **Certificado de valor.-** Está destinado a la importación de automóviles, pues existe la obligación de respetar una lista de precios emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (únicamente para automóviles nuevos y fabricados en el año en que se realiza la importación o en el inmediato anterior)

---

<sup>18</sup> Resolución 364 del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (R.O.416-S,13-XII-2006)



- **Certificado de calidad.**- la obtención de este certificado se hace necesaria para determinados productos que están sujetos al cumplimiento obligatorio de normas y/o reglamentos técnicos vigentes. Esto para determinar que han sido elaborados con las normas internacionales de fabricación las cuales son las normas ISO 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 o ISO 9000/200, ISO 14000
- b) **Cuantitativos.**- Son los tributos internos<sup>19</sup> y los denominados impuestos al Comercio Exterior.
- c) **Monetarios:** Está dado por la forma de pago: giro a la vista, a crédito, trueque, compensación, convenio; y, la cotización monetaria.

Los mecanismos que acabamos de revisar nos dan una idea de las herramientas con las que contamos como país y por lo tanto como ciudadanos para controlar y filtrar el ingreso de productos óptimos y de calidad, y es importante insistir en esto, ya que la salida a los problemas que se van presentando en nuestro país, no responde a una falta de normas o regulaciones, sino a la inaplicabilidad de estas.

**1.4.4 ¿Qué es el arancel?** Básicamente el arancel es una tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos<sup>20</sup>, y que resulta en una lista de mercaderías de todo tipo, susceptibles de ser comercializadas internacionalmente. Su finalidad primaria es determinar el tratamiento tributario al que está sujeta su importación al país, es decir los

---

<sup>19</sup> El porcentaje de tributos que se van a pagar para importar una mercadería se denomina incidencia tributaria

<sup>20</sup> Océano Uno, Diccionario Enciclopédico, edición 2004, España.

impuestos que se deben pagar al momento en que estos bienes entran al país. Para este objeto las mercaderías se encuentran en el Arancel numeradas, clasificadas y ordenadas sistemáticamente.

Pero, además de sus efectos tributarios, también el Arancel es un instrumento de política económica, que puede ser utilizado por el gobierno para estimular determinadas actividades productivas, para implementar objetivos vinculados con el comercio exterior u otras finalidades de carácter económico – social.

**1.4.5 Derechos compensatorios y antidumping.-** El Texto Unificado de Legislación del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, trata acerca de las normas y procedimientos para prevenir y contrarrestar los efectos negativos ocasionados por prácticas desleales en el comercio o por el crecimiento excesivo de importaciones que amenacen o puedan causar daño a la producción nacional.

El texto establece un procedimiento objetivo por medio del cual se puede determinar si las importaciones que ingresan al país bajo prácticas desleales o subvenciones, afectan directamente a la producción nacional, luego de lo cual, si el resultado es apreciable, se proceden a tomar medidas correctivas, tales como la fijación de derechos compensatorios, generalmente a través de tasas ad - valorem o de forma específica, en unidades de medida, volúmenes de importación o unidades monetarias.

Un derecho antidumping o compensatorio<sup>21</sup>, queda eliminado automáticamente cuando han transcurrido 5 años desde la fecha de su imposición, a menos que persistan las causas que le dieron origen, lo cual será determinado por análisis periódicos.

De todas maneras, cada año y a petición de parte, se realiza la revisión de las medidas impuestas, comprobando si han cambiado las condiciones bajo las cuales fueron implementadas.

**1.4.6 Procedimiento de importación.-** El procedimiento ordinario de una importación se lleva a cabo en el régimen de importación a consumo, que es aquel por el cual las mercancías extranjeras son nacionalizadas y puestas a libre disposición para su uso o consumo definitivo.

**1.4.7 Mercadería de consumo.-** es aquella que puede ser libremente usada o comercializada en el país y cualquier persona puede realizar una importación de consumo si es que lo hace ocasionalmente y como persona natural. Debe adjuntar la copia de su cédula de identidad a la declaración aduanera del bien que importa. Si va a ser importador frecuente, debe ser calificado como tal por el Banco Central del Ecuador o sus corresponsales, tener RUC y constituirse en comerciante formal.

Los pasos básicos que se deben dar para la importación son:

- Negociación entre importador y exportador
- Participación de intermediarios (portadores, cargueros, etc.)

---

<sup>21</sup> Mediante acuerdo, el Ministerio de Economía y Finanzas, puede aplicar derechos compensatorios.

- Ubicación de la mercadería en el arancel de importaciones, clasificación y tratamiento arancelario.
- Tramitación
- Pago de tributos
- Formalidades aduaneras y pago de tasas por servicios

### **1.5 Fabricación y ensamblaje de vehículos en el país:**

En el Ecuador existen ensambladoras de vehículos, tales como Omnibus BB, Maresa, Aymesa y Coenansa, cuya calidad es muy buena y son productos que incluso se comercializan en otros países, ensambladoras que han tenido una historia llena de contratiempos y tragos amargos.<sup>22</sup> Sin embargo, el volumen de producción de la actividad económica referente a “Venta, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas; venta al por menor de combustible para automotores”, alcanza las cifras de \$396.456.580 millones de dólares en el año 2005 y \$448.760.733 millones de dólares en el 2006, produciéndose una variación anual de 13.9%.<sup>23</sup>

**1.5.1 Rama de la producción nacional.-** Se entiende al conjunto de los productores de productos similares o directamente competidores que operan en el país, o aquellos cuya producción conjunta de productos similares o directamente competidores constituyan una proporción importante de la producción total de ellos en el país.

---

<sup>22</sup> <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ensambladora-42-carros-al-dia-4707-4707.html>. Publicado el 04/Agosto/1996 | 00:00; <http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/ensambladoras-a-punto-de-quebrar-10257-10257.html>. Publicado el 08/Noviembre/1999 | 00:00

<sup>23</sup> INEC. “El sector automotor en la economía nacional” Breve Estudio del Comercio de Automotores, partes y combustible, años 2005 y 2006. Quito, junio 2008

**1.5.2 Régimen de maquila.**- La maquila es el régimen suspensivo del pago de impuestos, que permite el ingreso de mercancías por un plazo determinado para luego de un proceso de transformación ser reexportadas.

## **1.6. Comercialización de vehículos:**

La importancia que tiene un sector dentro de la economía, o el peso de una actividad económica respecto de la totalidad<sup>24</sup> de estas, está condicionada a variables adicionales determinadas por el efecto de interrelación entre los sectores económicos. Así mismo, la importancia es relativa en función del tiempo, por las variaciones entre distintas épocas, más aun en un país como el Ecuador donde las fluctuaciones económicas son abruptas y condicionadas a un entorno político, social e internacional convulsionado.

Una forma de dimensionar la importancia de un sector productivo, es mediante la estimación de generación de empleo directo e indirecto que puede tener el sector. No obstante, dada la enorme interrelación de los sectores productivos en una economía, esta forma puede sobredimensionar o subdimensionar el tamaño de un sector conforme se considere su influencia mayor o menor sobre sectores conexos<sup>25</sup>

Al medir cuán importante es un sector se debe considerar también su capacidad de generación de recursos para el Estado, es decir el monto de impuestos generados para el fisco, a fin de evaluar la importancia que tiene un sector para el financiamiento del gasto

---

<sup>24</sup> <http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/transporte.html#app=15bc&fc07-selectedIndex=1>

<sup>25</sup> INEC. “El sector automotor en la economía nacional” Breve Estudio del Comercio de Automotores, partes y combustible, años 2005 y 2006. Quito, junio 2008

público. Dentro de este punto no se debe considerar tan solo la aportación directa que un sector genera, sino también su capacidad como agente de retención.<sup>26</sup>

## **1.7. Conclusiones y recomendaciones**

El contexto del primer capítulo enmarca aunque a manera de resumen los ámbitos, requisitos y formalidades que todos los bienes y servicios que ingresan al país para ser comercializados o utilizados de alguna manera deben cumplir, lo que nos lleva a cuestionar el control que se realiza especialmente en lo que a la industria automotriz respecta ya que por ejemplo en temas de seguridad debe haber un mínimo indispensable que todo vehículo en el Ecuador debe respetar y este deben ser acorde a los avances tecnológicos pertinentes y razonables.

La importancia de este primer capítulo toma forma al permitirnos dimensionar que para poder entender ampliamente el tema motivo de este trabajo resulta imperativo conceptualizarlo, tomando en cuenta los antecedentes, actores, instituciones, así como todos los actos, hechos y partes involucradas, de manera que el lector tenga a su mano distintos elementos que le permitan ratificar, complementar o debatir el presente estudio.

Más adelante analizaremos si la obligación impuesta por las casas comerciales automotrices de realizar todo tipo de mantenimiento únicamente en sus talleres sopena de perder la garantía de fábrica que tienen los vehículos cero kilómetrosesta, está incluso prohibida.

---

<sup>26</sup> [www.expreso.ec/autos/ventas.asp](http://www.expreso.ec/autos/ventas.asp)

Cabe analizar este tema además desde el ámbito del principio del interés económico y social del consumidor, desde el principio de la libre competencia como medio para otorgar mejores servicios a las personas consumidoras y desde el ámbito del sistema económico previsto en la Constitución de la República.

Pues desde el primer punto de vista, el principio del interés económico y social del consumidor se ve seriamente afectado con este tipo de prácticas ya que en primer lugar, desde el punto de vista social implica una limitación a la libertad de poder escoger dónde realizar el mantenimiento, ya sea por precios más convenientes, o confianza en el taller o sencillamente por la autonomía de su voluntad, que en sí permite ejercer el derecho a la libertad en su máxima expresión, siempre de acuerdo con lo permitido en el ordenamiento jurídico. El interés económico, en cambio, reviste en la importancia que tiene para la distribución del ingreso y para el real acceso a los bienes y servicios, este tipo de prácticas, generan la creación de monopolios que tienden naturalmente a imponer condiciones injustas en que se dan los intercambios comerciales, por lo que las principales personas perjudicadas son los usuarios, que a más de tener servicios de mala calidad, deben pagar mucho por ellos.

En otra visión debemos analizar esta cuestión desde un ámbito sistémico, y al referirnos al mismo tenemos que enmarcarnos en el ámbito de que esta práctica constituye una forma de competencia desleal, que en palabras del Dr. Víctor Cevallos, viene a ser dada por la *“Subordinación de la conclusión de un contrato a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guardan relación con él”*<sup>27</sup>. Se genera como práctica de

---

<sup>27</sup> Op. Cit. Pág. 56

competencia desleal, ya que el destinatario “*de la oferta puede caer en error o engaño sobre el precio real de otros bienes y servicios del mismo local comercial, mediante las denominadas ventas gemelas o ligadas (...)*”<sup>28</sup>, a más de que da lugar a la generación de monopolios u oligopolios que fulminan de manera determinante a todo intento de competencia que pueda aparecer. Este tipo de prácticas se van en contra de los objetivos del sistema económico que se encuentra previsto en el Art. 284 de nuestra Constitución que tienen que ver con la “*Adecuada distribución del ingreso y riqueza nacional*” y sobre todo “*el incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas*” sin dejar de contar que como principio fundamental de la economía encontramos el justo intercambio y el desarrollo limpio y transparente en las relaciones de mercado. Al obligarse al comprador del vehículo a realizar un servicio que no tiene que ver con la esencia de la finalidad del contrato se perjudica en primer lugar a la libertad del comprador de elegir dónde realizar éste y los objetivos del sistema económico de generar libre competencia, desarrollo y equidad para el país, al ser actividades productivas que generan empleos y recursos para nuestra riqueza.

Finalmente, siendo objetivos y prácticos debemos tener claro que la planificación en todos sus ámbitos por más perfecta y bien intencionada que esta fuere, dará siempre como resultado pérdida de tiempo si nunca se ejecuta o inicia con los proyectos planteados, pues así los objetivos pretendidos nunca se alcanzarán.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ídem.

<sup>29</sup> “Saber no es suficiente; tenemos que aplicarlo. Tener voluntad no es suficiente: tenemos que instrumentarla. *Goethe*”



## **CAPITULO 2**

### **2.1. Naturaleza jurídica de los vehículos automotores:**

La comercialización de los vehículos nuevos encierra algunos elementos de análisis, los cuales nos permitirán determinar qué trato jurídico, y como consecuencia de este, qué trato comercial se les da o debería dar a aquellas, principalmente para efectos de su transferencia de dominio<sup>30</sup>. Por esto resulta de primordial importancia definir en qué clasificación de las cosas están los vehículos.

Así, en este trabajo vamos a analizar cómo en el caso de la compra de los vehículos nuevos se desenvuelven las relaciones jurídicas, tomando en cuenta desde aquel momento en que el comprador convencido de lo que el vendedor le ha ofrecido motiva su compra, hasta cómo los eventuales vicios que puedan afectar a la cosa por ser redhibitorios, o los que puede afectar el consentimiento del comprador desde un principio, y por lo tanto restar validez o eficacia al contrato celebrado.

### **2.2. Clasificación de los vehículos como bienes:**

Las cosas y los bienes tienen diferente significación jurídica, aunque el texto de la ley emplea con frecuencia, indistintamente, ambos términos. Cosa es, de modo general, todo lo que existe sin tener la calidad de persona, como el sol, el aire, el mar<sup>31</sup>. Las cosas no interesan al jurista sino en cuanto puedan dar al hombre alguna utilidad y sean aptas para

---

<sup>30</sup> Art. 603 C.C.- los modos de adquirir el dominio son la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión por causa de muerte y la prescripción.

<sup>31</sup> Según el Capítulo Séptimo de la Constitución de la República del Ecuador referente a los derechos de la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, esta es desde el año 2008 sujeto de Derechos.

integrar el acervo patrimonial de una persona. Ahora bien, cuando las cosas se encuentran en estas circunstancias, se denominan bienes. Las cosas componen el género; los bienes, la especie.

La voluntad del hombre interviene en mayor o menor medida al momento de inclinarse por alguna clasificación, y no podría ser de otra manera, ya que las cosas jurídicamente consideradas tienen valor en cuanto sirven al hombre.

Cuando hablamos de bienes nos referimos a cosas que pueden ser objeto de relaciones jurídicas o realmente lo son, es decir los bienes, son cosas protegidas por el derecho.<sup>32</sup> Es necesario por lo tanto revisar sus clasificaciones:

**2.2.1 Bienes corporales.-** Los vehículos automotrices son primeramente bienes corporales por la materia corpórea que los integra y su característica que es la de ocupar un espacio físico, por tener cierto tamaño, y la posibilidad de ser percibido por cualquiera de los sentidos.

**2.2.2 Bienes muebles.-** Los vehículos al encuadrarse como bienes corporales, tal como lo manifiestan los artículos 584 y 585 del Código Civil son además bienes muebles, ya pueden transportarse de un lugar a otro, ya sea conducidos por una persona, ya porque se muevan por una fuerza externa como un trailer o una wincha, o de cualquier otra forma.

---

<sup>32</sup> Juan Larrea Holguín. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, séptima edición actualizada, 2005. 3 volumen 2, página 1.

**2.2.3 Bienes consumibles y no consumibles.-** El uso que puede hacerse de las cosas muebles, por los peculiares caracteres de éstas, les afecta de diverso modo.

Se dice que las cosas son consumibles cuando se destruyen, natural o civilmente, por el primer uso que se hace de ellas. Se destruyen naturalmente cuando físicamente desaparecen, como los alimentos, y se destruyen civilmente cuando se enajenan, como las monedas.

Cosas no consumibles son aquellas que resisten usos más o menos prolongados y repetidos sin perder su propia individualidad como las máquinas, equipos y herramientas. En este sentido podemos concluir que los coches por su naturaleza y uso son bienes no consumibles.

**2.2.4 Bienes muebles no fungibles.-** Esta clasificación es exclusiva de los bienes muebles, y aunque la calidad de fungible o no fungible no depende tanto de la naturaleza de las cosas, sino de su peculiar tratamiento en las relaciones jurídicas de que son objeto, se pueden diferenciar los unos de los otros por su permanecía o existencia al darles el respectivo uso. Así por ejemplo, las especies monetarias, en cuanto perecen para el que las emplea como tales son fungibles, es decir, no puede hacerse el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruyan.

La fungibilidad, más que una cualidad propia de las cosas, viene a ser una relación de equivalencia en virtud de la cual una cosa cumple la misma función liberatoria que otra, porque es igual pagar una obligación con cualquiera de ellas.

Por consiguiente al hablar de vehículos como género estaríamos haciendo referencia a bienes corporales muebles fungibles; pero si tomamos en cuenta al vehículo comercialmente, cada uno está dotado con un número de serie tanto de chasis como de motor con los cuales se procede a registrarlos y legalizarlos para su libre circulación, apareciendo con su venta un propietario por cada uno de los vehículos, ya que no existen coches en circulación que no tengan dueño; argumentos suficientes para asegurar que los automóviles una vez que son vendidos pasan a ser bienes muebles no fungibles.

Ejemplifiquemos: para una casa comercializadora de vehículos nuevos, estos son bienes fungibles, ya que representan dentro de su marca y modelo un género. Así todas las camionetas Toyota Hilux, rojas, cabina simple, 4x4, full equipo, son la misma camioneta y tienen el mismo poder liberatorio, por ello para el vendedor resulta irrelevante vender cualquiera de ellas, mientras que del lado del comprador una vez que él adquiere y la registra a su nombre pasa a ser una especie y por lo tanto un bien mueble no fungible.

**2.2.5 Bienes divisibles e indivisibles.-** Según el art. 1540 del Código Civil, las cosas son susceptibles de división física, intelectual, o de cuota. En estricto sentido podríamos decir que todas las cosas admiten división física porque pueden ser fragmentadas. Sin embargo, la divisibilidad física a que se refiere el Código Civil consiste en que las cosas puedan ser fraccionadas en partes homogéneas sin perder su esencia y utilidad; es decir, en partes aptas para recomponer el cuerpo primitivo, conservando cada una de ellas un valor económico proporcional al todo.

Por lo que en estricto sentido jurídico es físicamente divisible una suma de dinero, un litro de vino, un quintal de azúcar, y en cambio no lo es una mesa, un cuadro, una jarra, y en el caso que nos interesa tampoco lo sería un carro porque su fraccionamiento destruye su sustancia, esencia y el valor de sus partes, separadamente consideradas, no es proporcional al del compuesto. Por lo tanto, jurídicamente hablando es físicamente indivisible una cosa que no admita cómoda división, o de cuya separación resulte perjuicio.

Por otra parte podemos afirmar que el vehículo puede ser intelectualmente divisible, de hecho esta divisibilidad puramente de razón, abstracta, tiene enorme interés jurídico y sobretodo comercial, ya que las cuotas de esta división intelectual permite vender y comprar solamente derechos y acciones del vehículo, como cuando existen varios dueños (copropietarios).

Existen además de las clasificaciones mencionadas en los párrafos anteriores, otras que son muy interesantes que las repasaremos de manera rápida y referencial con el afán de que se complemente este trabajo, así por ejemplo:

Debemos distinguir entre los bienes que son simples o compuestos, clasificación que se basa en la naturaleza física de las cosas. Así, mientras para algunas personas un vehículo puede llegar a ser un bien compuesto debido al conjunto de cosas singulares que lo integran, yo personalmente aseguraría que en los vehículos mientras prevalezca el concepto de unidad se puede decir que la cosa es simple; pero si se desmonta con la intención de vender sus piezas como repuestos o como chatarra, entonces viene a ser una cosa compuesta de dichas partes, destinadas a ser totalmente separadas e incluso a usos

diferentes. Por lo tanto los vehículos al ser considerados como una cosa simple, estos serían indivisibles, por el contrario estos son cosas compuestas al considerarlos como repuestos o chatarra y serían entonces divisibles.

Claro que en este último caso su composición cambiaría y por lo tanto los vehículos estarían incompletos y no podrían ser considerados como un todo, es decir no podrían ser considerados como vehículos automotrices en estricto sentido.

**2.2.6 Cosas principales y accesorias.-** El punto de partida de esta clasificación es la conexión de dos cosas: la que tiene una existencia jurídica autónoma es principal. La que le está subordinada, es accesorio. Por consiguiente, son cosas principales aquellas que constituyen el objeto principal del derecho, y accesorias, aquellas que participan del régimen jurídico de la principal en razón de cierta adherencia o conexión con ella, de modo que indirectamente, y como por extensión, se les aplica las mismas reglas de la principal. En dichos casos lo accesorio adquiere la naturaleza jurídica de lo principal y se somete, por regla general, al orden jurídico que rige la cosa principal, es decir que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.<sup>33</sup>

Sin perjuicio de lo mencionado podemos analizar también qué es principal en un vehículo y qué es lo accesorio a éste. Dentro de un criterio técnico al analizar un vehículo “per se” son objetos principales el motor y su chasis o compacto, y accesorios todos los demás ya

---

<sup>33</sup> Juan Larrea Holguín, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, séptima edición actualizada, 2005. 3 volumen 2, página 22.

que su forma, diseño, y en general especificaciones se sujetan a la fuerza, peso, velocidad, caballaje, torque y demás bondades y servicios que el motor establezca.

**2.2.7 Cosas presentes y futuras.-** Aunque el Código Civil no hace mención directamente de las cosas presentes y de las futuras, sí se toma en cuenta esta distinción para varias disposiciones tanto en materia contractual como en sucesoria. La mayor parte de los contratos pueden recaer sobre cosas que aún no existen pero que pueden llegar a existir, también se pueden donar, legar o dejar en herencia bienes que aún no se producen o que aún no pertenecen a quien dispone de ellos, y para quien son subjetivamente cosas futuras, así el artículo 1141 indica expresamente que el legado de una cosa futura es válido, con tal de que la cosa llegue a existir. No se puede considerar como cosa futura, la que no es capaz de ser apropiada, o pertenece definitivamente al Estado, los Municipios, etc.<sup>34</sup>

Por consiguiente, en todo caso, para considerar una cosa como futura, tiene que ser posible. A veces el grado de probabilidad de que exista o llegue a existir puede ser totalmente incierto, y *entonces la cosa futura bien puede ser objeto de un contrato de índole aleatorio*, pero si hay imposibilidad de existir o de apropiarse de la cosa, entonces no entra en esta categoría que se aplica solamente a seres reales o posibles.

Más adelante en el capítulo siguiente desarrollaremos un poco más este tema y su relación con las garantías de los vehículos contra fallas de fábrica.

---

<sup>34</sup> Art.1133 Código Civil del Ecuador.

**2.2.8 Cosas comerciales o no comerciales.-** Las cosas que pueden ser objeto de relaciones jurídicas privadas se dicen comerciables, sobre ellas se pueden establecer derechos reales<sup>35</sup>, y pueden ser objeto de obligaciones. En cambio, si queda excluida toda la posibilidad de establecer derechos reales o de hacerlas objeto de alguna obligación, entonces se dice que están fuera del comercio o son inkomerciables.

Nuestro Código Civil hace referencia a esta clasificación pero tomando como criterio divisor la capacidad pasiva de apropiación, es decir, en último término, tomando en cuenta si las cosas pueden o no ser objeto de la propiedad o dominio privado. Así el artículo 602 del Código Civil dice que “Las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como la alta mar, no son susceptibles de dominio, y ninguna nación, corporación o individuo tiene derecho a apropiárselas. Su uso y goce se determinan, entre individuos de una nación, por las leyes de ésta; y entre distintas naciones, por el Derecho Internacional”.

Los vehículos en general son creados definitivamente con la finalidad de comercializarlos, ahora el trato específico que se les da en tal calidad, dependerá del régimen legal de cada país.

### **2.3 Naturaleza del contrato de compraventa de un vehículo automotor:**

Dado que este trabajo tiene como objetivo llegar al lector propietario de un vehículo sea nuevo o usado, es decir, a más de 905,651<sup>36</sup> personas en todo el país (sin

---

<sup>35</sup> Art. 595 Código Civil del Ecuador.- Derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, herencia, usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. De estos derechos nacen las **acciones reales**.

<sup>36</sup> NÚMERO DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS MATRICULADOS, POR USO, SEGÚN PROVINCIAS. La Fuente es el Anuario de Transporte del 2009 del INEC.



mencionar a escala mundial), y entre ellos arquitectos, doctores en medicina, comerciantes, amas de casa, jóvenes, estudiantes, deportistas, madres y padres de familia, profesionales o no, gente en general sin ninguna desagregación por estrato, género, raza, o condición social, es de suma importancia tomarnos el tiempo de revisar ciertos términos e instituciones jurídicas que a simple vista podríamos pensar que son entendidas por todos, especialmente por los conocedores del derecho, pero que paradójicamente incluso los propios abogados desconocen, e integran el conjunto de personas afectadas por la imposición de las casas comerciales de llevar a nuestros vehículos a realizar los chequeos y mantenimientos solamente a ellas con la amenaza de perder un derecho inherente al negocio realizado que es la garantía de fábrica, por lo que dedicaremos este capítulo a recordar aquellos conceptos teóricos y doctrinarios que intervienen en el desarrollo del negocio jurídico<sup>37</sup>, que involucrara la compra venta de un vehículo.

**2.3.1 Hecho jurídico.-** Técnicamente en nuestra ciencia llamamos “hechos” a aquellos acontecimientos, que son perceptibles por medio de los sentidos. Es un concepto sustancialmente parecido al que en filosofía lleva el nombre griego de fenómeno, pues todo lo no fenoménico es, en sí, jurídicamente irrelevante como acontecimiento.

Determinados hechos poseen la característica de generar siempre e invariablemente efectos jurídicos de alguna índole porque justamente esa es su finalidad, para eso están, o bien porque el ordenamiento les asigna tal consecuencia. Por ejemplo, la firma

---

<sup>37</sup> Antes de realizar el estudio sobre la naturaleza del negocio jurídico, primeramente debemos definir en qué consiste un hecho jurídico para entender cómo y cuándo se produce un negocio jurídico.

de un cheque, la emisión del consentimiento conyugal, la redacción de un testamento, el nacimiento o la muerte.

Otros, en cambio, pueden ocasionar efectos jurídicos o no, según sus circunstancias de tiempo, lugar y personas. Por ejemplo, levantar la mano en la soledad del propio cuarto no acarrea efecto jurídico alguno, pero hacerlo en medio de la puja de un remate implica formular una propuesta de compra, así el mismo hecho tendrá o no efectos jurídicos siempre y cuando las circunstancias en que sucedan interesen o no al derecho.

Finalmente, existen hechos que, en principio y salvo extremadamente raras y artificiosas excepciones, no podrían ser generadores de efectos jurídicos. Como respirar, morderse la lengua, una brisa suave, el vuelo de un ave, etc. Es cierto que si respiro y al hacerlo inhalo un gas venenoso que mi vecino dejó escapar, nacerá mi derecho a ser indemnizado, pero la enorme mayoría de las inspiraciones no traen ese tipo de secuelas.

Los dos primeros grupos de hechos son los que conocemos como “hechos jurídicos”, en tanto que a los del tercer tipo les reservamos el nombre de “simples hechos”, y no nos interesan en nuestra ciencia.

**2.3.2 Acto jurídico.-** Hemos definido ya al hecho jurídico como todo acontecimiento al que el ordenamiento positivo reconoce efectos jurídicos. Pues el hecho generador de consecuencias jurídicas puede ser el producto de la acción de las fuerzas de la naturaleza (nacimiento, muerte, incendio, aluvión) o ser el resultado del obrar humano.

Ahora bien según que el hecho provenga de la naturaleza o del hombre, se le clasifica en hecho jurídico natural y hecho jurídico voluntario, siendo este último al que conocemos como acto jurídico. Esta conducta que nace de la voluntad del hombre produce efectos jurídicos porque el derecho los atribuye por su mera realización, independientemente que el agente los quiera o no. De esta suerte cuando una persona causa un daño a otro por negligencia o impericia, queda esta constreñida a la indemnización de tal daño. En otros términos, el acto jurídico produce los efectos asignados por la ley, siendo suficiente que dicho sea voluntario, para nada entra aquí la consideración valorativa de la intención, que es característica del negocio jurídico y que queda plasmada en la consciente persecución de ciertos y determinados efectos por parte del agente; esos efectos se producen ya no ex lege<sup>38</sup> sino ex voluntate<sup>39</sup>.

#### **2.3.2.1 Condiciones de existencia y validez de un acto jurídico:**

Es importante mencionar cada una de las condiciones de existencia y validez producto de las cuales determinado acto puede ser considerado como válido o existente jurídicamente.

Las condiciones de existencia del acto jurídico son aquellas sin las cuales no puede formarse, no puede nacer a la vida del derecho, y son condiciones de validez aquellas que, si bien pueden faltar en el acto, su concurrencia le da una existencia sana. En este sentido cabe mencionar que la falta de alguna condición de validez no impide la existencia del acto, pero lo vicia y permite posteriormente anularlo; la ausencia de alguna condición de existencia en el acto imposibilita dar vida al acto.

---

<sup>38</sup> Según ley; por disposición de la misma.

<sup>39</sup> Sujeto a la voluntad de la persona.

El Art.1461 del Código Civil, prescribe que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario:

- a. Que sea legalmente capaz;
- b. Que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio;
- c. Que recaiga sobre un objeto lícito; y,
- d. Que tenga causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por si misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.

Las condiciones de existencia de los actos son:

1. Voluntad;
2. Objeto;
3. Causa; y,
4. Solemnidades, siempre que la ley las exija.

Las condiciones de validez de los actos son:

1. voluntad no viciada;
2. capacidad de las partes;
3. objeto lícito; y,
4. causa lícita.

“Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes.

La nulidad puede ser absoluta o relativa.”<sup>40</sup>

**2.3.3 El negocio jurídico.-** Es el acto cuya voluntad se encamina directa y reflexivamente a la producción de ciertos efectos jurídicos, como la celebración de un contrato. Acto jurídico, es el acto voluntario del cual derivan también efectos jurídicos, pero independientemente del querer del agente, o mejor dicho, por el solo ministerio de las normas jurídicas, como sucede con la comisión de un delito.

Desde el punto de vista de nuestro derecho civil, es indispensable tomar la clasificación tradicional francesa, que reduce los elementos que intervienen en la formación de las situaciones jurídicas a solo dos especies: el acto jurídico, que comprende toda manifestación de voluntad directamente encaminada a la producción de efectos jurídicos; y el hecho jurídico, que cobija tanto los hechos puramente físicos o materiales jurídicamente relevantes como también los actos voluntarios cuyos efectos, atribuidos por la ley, se producen independientemente del querer del agente, como si fueran simples hechos físicos.

Por último hay que tener en cuenta que muchas veces las situaciones jurídicas no se forman de un solo acto o hecho jurídico, sino de varios, o de combinaciones de unos y otros, o sea que tales situaciones son complejas.

---

<sup>40</sup> Art. 1697 C.C. del Ecuador.

Sabido es que toda norma jurídica regular se compone de un supuesto de hecho, un supuesto de derecho y un efecto jurídico que se produce cuando, al realizarse determinado acontecer este es susceptible de ubicarse dentro de la previsión normativa, poniendo en movimiento cierto resultado jurídico, esto produce una mutación del mundo exterior que es tomada en cuenta por el derecho para hacerle generar determinadas consecuencias dentro del marco de una legalidad establecida.

El derecho, compuesto por una serie de normas de carácter general y abstracto no es capaz por sí solo de dar vida a ninguna relación jurídica mientras no se verifiquen determinados supuestos de hecho que se contemplan en las diversas disposiciones normativas.

El negocio jurídico representa un estado de máxima valoración de la autonomía de la voluntad privada por parte del ordenamiento jurídico. Al celebrarse un negocio cualquiera, por ejemplo, un contrato de compraventa, el ordenamiento jurídico tiene en cuenta no solo su fenomenología<sup>41</sup> sino que mira también como *relevante la intención o propósito del actor o actores*. Esquemáticamente el negocio se presenta como un reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace de cierto acontecimiento, en cuanto ha sido voluntariamente ejecutado y en cuanto produce un resultado querido por el agente y reconocido y tutelado por ese ordenamiento.

---

<sup>41</sup> La **fenomenología** (del griego: φαινόμενον: "apariciencia", λογος: "estudio, tratado") es una parte o ciencia de la filosofía que estudia y analiza los fenómenos lanzados a la conciencia. Dicho de otro modo, la fenomenología es la ciencia que estudia la relación que hay entre los hechos (fenómenos) y el ámbito en que se hace presente esta realidad (psiquismo, la conciencia).

El negocio jurídico por lo tanto es el medio más preciso dado por el ordenamiento jurídico a los particulares, para que regulen sus intereses particulares mediante el otorgamiento de validas manifestaciones de voluntad que el ordenamiento positivo recoge y tutela ampliamente.

La existencia del negocio jurídico como forma de autorregulación de intereses privados está íntimamente relacionada con el reconocimiento de la autonomía de la voluntad privada, mediante la cual los individuos, por decisión del Estado arreglan sus relaciones patrimoniales bajo el amparo y tutela del ordenamiento jurídico.

**2.4 Analicemos “el Consentimiento” como elemento más importante del negocio jurídico.-** Todo acto necesita para que sea considerado plenamente por el derecho su completa existencia y validez, es decir, las partes involucradas deben estar totalmente claras sobre el objeto que persiguen, los derechos que nacen al suscribirlo, las obligaciones que de tal acto se derivan y por las cuales se hacen responsables, la o las causas que motivan la celebración del mismo, las formalidades y requisitos que deben existir, y la capacidad de ellas para actuar, de manera que conozcan que la omisión de cualquiera de estas, produciría, invalidez o hasta inexistencia del acto.

El significado de “consentimiento” se toma en el sentido de aquiescencia, condescendencia o aceptación. Así el número 2 del artículo 1461 del Código Civil establece que para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de vicio.

**2.4.1 La autonomía de la voluntad.-** La manifestación de la voluntad así entendida, esto es, como signo de un querer y su consiguiente exteriorización, es el signo visible que tiene el derecho para entrar a valorar el negocio y darle finalmente, si lo merece, su apoyo normativo, permitiéndole la obtención del efecto pretendido. Por otro lado la voluntad del agente debe presentarse ante el ordenamiento positivo, no como el simple deseo de que ocurra algo, sino como intención real y definida de conseguir un efecto jurídico, como ocurre cuando categóricamente se afirma: vendo, pagaré, acepto, niego, etc. Pero es obvio que debe distinguirse de manera clara entre la manifestación en el negocio unilateral y aquella que debe preceder el perfeccionamiento del bilateral y aun del complejo. En el primero, el perfeccionamiento se sujeta a la adecuada manifestación de la voluntad de quien se obliga como sucede en el otorgamiento de un testamento. En cambio el negocio bilateral requiere, para ser perfecto, el concurso de dos manifestaciones como en la compraventa donde debe existir necesariamente la manifestación de la voluntad en el sentido de entregar la cosa a cambio de un precio, acompañada de otra similar del comprador por la cual acepta el pago y recibe el bien vendido; es decir que mientras las dos voluntades no concurren, no habrá consentimiento y, por tanto, el negocio no será perfecto, pues cuando falta el consentimiento o acuerdo de voluntades, el negocio se reputa inexistente, o mejor, no celebrado aun.



**2.4.2 La Voluntad<sup>42</sup>.**- Es la actitud libre que tenemos las personas para hacer o querer algo, así, si se trata de un acto unilateral adopta el nombre de voluntad sin más, pero en el caso de actos bilaterales ésta toma el nombre de consentimiento, que es el acuerdo de dos o más voluntades encaminado a alcanzar un resultado jurídico; finalmente para que la voluntad sea considerada por el derecho esta debe ser seria y además exteriorizarse.

**Es seria** cuando se emite por una persona capaz y con el propósito de crear un vínculo jurídico. No reúne esta condición, por ejemplo, la determinación que toma un niño o la que se hace en broma o sin ánimo de obligarse, como cuando dos personas a manera de conversación planean un viaje.

**2.4.2.1 Exteriorización de la voluntad.**- La voluntad, el querer del individuo, mientras permanece en su fuero interno es indiferente al derecho, pero para que éste lo considere, es preciso que se ponga de manifiesto, es decir que la ponga en conocimiento de los demás, es decir, que la declare.

La voluntad puede manifestarse de diferentes formas, así:

- **Expresa:** cuando el contenido de nuestro propósito es revelado explícita y directamente sin la ayuda de circunstancias concurrentes, es decir, se manifiesta sin lugar a segundas interpretaciones o alternativas.
- **Tácita:** cuando el contenido de nuestro propósito no es revelado explícita y directamente, pero se deduce de ciertas circunstancias concurrentes, de la conducta

---

<sup>42</sup> Art. 1476 C.C. - Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración.

y comportamiento de una persona siempre que estas sean concluyentes, es decir, no debe haber la mínima posibilidad de duda.

Debemos tener muy claro que en el tema concreto de la compra venta de un vehículo nuevo, si la intención última que motiva al vendedor a realizar el negocio es que el comprador del vehículo se ligue de manera posterior a su taller para que él en este realice todo tipo de trabajos de mantenimiento y reparación automotriz mientras la voluntad última del comprador es la de simplemente adquirir el dominio del vehículo, podríamos concluir que no estaríamos hablando de un acuerdo de voluntades o consentimiento y por lo tanto este negocio jurídico estaría viciado. Afirmación que la analizaremos de manera detallada más adelante.

*El consentimiento* se define como el acuerdo de dos o más voluntades sobre un mismo objeto jurídico, integrado por dos actos sucesivos y siempre copulativos: la oferta y la aceptación.

**La Oferta**<sup>43</sup>.- Es un acto jurídico por el cual una persona propone a otra la celebración de un contrato en términos tales, que para que éste quede perfecto basta con que el destinatario de la oferta simplemente la acepte.

La oferta puede ser verbal o escrita, expresa o tácita. La oferta<sup>44</sup> puede hacerse a persona determinada o indeterminada. Se hace a persona determinada cuando se dirige a un sujeto individualizado sea o no conocido del oferente. Y se hace a persona indeterminada cuando

---

<sup>43</sup> La persona que hace la oferta, propuesta o peticion recibe el nombre de oferente, proponente o solicitante.

<sup>44</sup> La oferta de la cual tratamos no debe confundirse con la promesa de celebrar un contrato.

va dirigida al público en general, y en términos reales tales que cualquiera pueda aceptarla, y el que la acepte tendrá derecho a exigir el cumplimiento del contrato. Son ejemplos de ofertas indeterminadas prácticamente todos los establecimientos que ofrecen sus mercancías o servicios mediante un precio señalado de antemano, abiertos al público en general, y cualquiera que acepte tiene derecho a exigir el cumplimiento del contrato generado mediante la oferta y la aceptación.

**La aceptación.-** Es el acto por el cual la persona a quien va dirigida la oferta manifiesta su conformidad con ella y se la denomina aceptante, y al igual que la oferta, la aceptación puede darse de forma expresa o tácita produciendo los mismos efectos

Finalmente para que la aceptación ante una oferta dada pase a tener el carácter de consentimiento esta deberá darse mientras la oferta esté vigente, deberá ser oportuna y además debe ser pura y simple.

**2.4.3 Vicios del consentimiento.-** El artículo 1467 del Código Civil, manifiesta que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Pasemos a revisarlos brevemente:

1. **El error.-** Es la disconformidad de nuestras ideas con la realidad de las cosas, o sea, el concepto inexacto que tenemos, de una persona o de una cosa. Consiste en creer que es verdadero algo que es falso o creer falso lo que es verdadero. El error no es lo mismo que la ignorancia la cual consiste en no saber una cosa, tener total desconocimiento de un tema, arte o profesión en particular. Sin embargo,

algunas veces se confunden estos conceptos, pues la ignorancia de una cosa o de un hecho puede dar lugar a suponer la existencia de otra cosa e inducir al error.

El error puede ser de hecho o de derecho. Error de hecho es el que versa sobre una persona o sobre una cosa cualquiera, la creencia falsa de que algo ha sucedido o no ha sucedido. Error de derecho es el concepto equivocado de la ley.

**Error de hecho.-** El error de hecho por regla general debe repararse, atendida la mayor o menor gravedad del error, podemos clasificarlo en tres categorías distintas, de acuerdo a nuestro Código Civil, así:

**1.1 Error que destruye el consentimiento y que se llama error esencial.-** Este error, que es el más grave, es el que aparece contemplado en el Art.1469. ***Error de hecho sobre la especie del acto ó la identidad de la cosa.-*** Este error de hecho vicia el consentimiento y recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito, y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si, en el contrato de venta, el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra.

**1.2 Error que vicia el consentimiento, o sea, error sustancial.-** Es ***el Error de hecho sobre la calidad de la cosa.*** Este error de hecho vicia asimismo el consentimiento y se liga a la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, cuando ella es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes

se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante.

No obstante, el error acerca de cualquier calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, si esa calidad no fue el principal motivo de una de ellas para contratar, y ello era conocido de la otra parte.

**1.3 Error que no alcanza a viciar el consentimiento y que se llama accidental.** Es el *Error de hecho sobre la persona.*- El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato.

Pero, en este caso, la persona con quien erradamente se ha contratado, tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios que, de buena fe, haya padecido por la nulidad del contrato.

Como se ve, son dos los casos de error esencial: error sobre la especie del acto y error sobre la identidad de la cosa. El error sobre la especie del negocio que se celebra de manera que una de las partes entienda celebrar un contrato y la otra entienda celebrar otro diverso es de tal gravedad, que importa la ausencia completa de consentimiento. No hay concurso de voluntades, es decir, no hay acuerdo, porque las partes han querido cosas fundamentalmente diversas. Es cierto que no hay error sobre la cosa que es de objeto del negocio; pero hay error sobre las obligaciones o derechos que con respecto a ella piensan

adquirir las partes; y esas obligaciones o derechos que con respecto a ella piensan adquirir las partes constituyen lo esencial del acto jurídico.

Igualmente grave es el error sobre la identidad de la cosa, esto es, sobre el objeto del contrato. Este error destruye el consentimiento, porque el concurso de voluntades debe recaer sobre una misma cosa. En el caso del contrato de venta, no importa que el vendedor compruebe que la cosa que él ha creído vender vale más que la cosa que el comprador ha creído comprar, porque el comprador puede no haber buscado el valor vanal de la cosa, sino un valor de afección o de estimación especial que no se encuentra en otro cuerpo, aunque sea del mismo género.

2. **Fuerza.-** Es también un vicio del consentimiento que trae como consecuencia la rescisión<sup>45</sup> del acto o contrato, pues es causal de nulidad relativa. Se llama fuerza o violencia el medio que se usa sin derecho contra una persona para obligarla a consentir contra su voluntad en un acto jurídico, no es indispensable que la violencia sea material o de hecho, pues basta que cause miedo o intimidación.

El *Art. 1472* del Código Civil manifiesta que la fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición.

---

<sup>45</sup> Rescisión: Anulación, invalidación. Privar de su eficacia ulterior o con efectos retroactivos una obligación o contrato.

Se mira como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona justo temor de verse expuesta ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o descendientes, a un mal irreparable y grave. El fundamento de esta disposición está en que una persona no sólo teme a los daños que ella pueda recibir, sino también los que puedan recibir sus seres queridos.

El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento,

El *Art. 1473*, manifiesta que para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza el que es beneficiado por ella, basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona, con el fin de obtener el consentimiento.

La fuerza es un vicio del consentimiento que no importa una supresión total de la voluntad. A pesar de la violencia, existe voluntad, pues el que se ve forzado, prefiere una cosa a otra. El problema se da porque le toca escoger entre dos cosas contrarias a su voluntad, esto es ejecutar el acto o contrato, o ser acreedor del acto de fuerza, razón por la que el consentimiento no es libre, sino viciado e incapaz por lo tanto de producir obligación válida.

En vista de que no toda violencia vicia el consentimiento. La ley ha creído necesario fijar los caracteres que debe tener la violencia que anulan el consentimiento, a fin de evitar que con fútiles pretextos se destruya cualquier contrato.

Los caracteres jurídicos que debe revestir la fuerza para que vicie el consentimiento son los siguientes:

- debe ser grave.- es decir que sea capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio
- debe ser irreparable y puede estar dirigida contra la misma parte, o contra su consorte, o algún descendiente o ascendiente.
- Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella, basta que se haya empleado la fuerza por cualquier persona con el objeto de obtener el consentimiento. (Art.1473 C.C.) Esta regla viene del Derecho Romano y Ulpiano<sup>46</sup> la justificaba diciendo que no se puede exigir a la víctima de la violencia, que ella designe el autor, porque a menudo lo ignora. Pues comúnmente el que quiere beneficiarse del uso de la violencia no lo hace por si mismo.
- Al tratar de violencia nos referimos a la violencia injusta, contraria a derecho, y no a la justa presión que una persona puede hacer en defensa de sus derechos. Así, el deudor que apremiado por su acreedor le da una garantía para librarse de la ejecución no puede excusarse con la violencia para anular el contrato de garantía.
- Finalmente, dada su naturaleza de vicio del consentimiento es menester que ella sea ejercida con el objeto de arrancar el consentimiento, de manera que entre la fuerza y el consentimiento haya relación de causa a efecto.

---

<sup>46</sup> **Domicio Ulpiano** (en latín, *Domitius Ulpianus*) fue un jurista romano de origen fenicio, *magister libellorum* y prefecto del pretorio del emperador Alejandro Severo. Definió la justicia como la voluntad de tratar a cada cual como se merece.



No basta el temor de cualquier mal, pues debe ser un mal irreparable, grave y presente ya que la idea de un temor futuro no es causa de violencia. La fuerza es un vicio que produce nulidad relativa. El perjudicado puede pedir la rescisión del contrato y esta acción dura cuatro años, contados desde el día en que la violencia hubiere cesado.

**3. El Dolo.-** Es todo engaño, fraude o maquinación insidiosa de uno de los contratantes, que induce al otro a prestar su consentimiento para celebrar un contrato, de manera que sin él no se hubiera realizado.

El dolo que vamos a estudiar es aquel vicio del consentimiento que da causa al contrato, esto es, anterior o coetáneo<sup>47</sup> a la celebración del contrato, y que influye para que la otra parte preste su consentimiento; y no el dolo o fraude que incide en el cumplimiento de las obligaciones ya contraídas.

“El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y cuando, además, aparece claramente que sin él no hubieran contratado.

En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él; contra las primeras por el valor total de los perjuicios, y contra las segundas, hasta el valor del provecho que ha reportado del dolo.”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Aplicase a las personas y a algunas cosas que viven o coinciden en una misma edad o tiempo.

<sup>48</sup> Art. 1474 Código Civil del Ecuador.

Antiguamente al dolo se lo conocía como dolo malo, porque va contra el justo derecho de un tercero para distinguirlo del dolo bueno, que es la precaución sagaz con que cada uno debe defender sus intereses. Este último no puede llamarse propiamente dolo, porque en él no hay engaño. Así, la ley impone al vendedor que conoce los vicios ocultos de la cosa vendida la obligación de declararlos; y si no lo hace puede el comprador pedir la rescisión de la venta. Comete dolo el que hace una apuesta a sabiendas que se ha verificado el hecho de que se trata, y oculta esa circunstancia a la otra parte.

El dolo puede existir en todo contrato, de modo que no puede hacerse una convención en contrario, y es nula la condonación de dolo futuro, pues sería motivo para delinquir.

El dolo ya cometido puede ser condonado; pero el pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente.

Según el Art. 1475 del Código Civil el dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás casos debe probarse.

El dolo debe ser castigado severamente por la ley y jamás debe ser útil al que lo comente en perjuicio de otro.

Analicemos ahora, la capacidad de las partes para la formación del negocio jurídico:

Así como personalidad es la condición o cualidad de persona. Capacidad es la condición o cualidad de capaz. Jurídicamente es persona todo ser humano a quien el Derecho reconoce como miembro de la comunidad. Tal reconocimiento lleva consigo la atribución de la

aptitud para ser titular de relaciones jurídicas, o, con otra expresión, de derechos y obligaciones (capacidad). Y puesto que es a la persona (toda persona y solamente ella) a quien el Derecho concede capacidad, también la persona puede ser definida como ser capaz de derechos y obligaciones.

La capacidad a la que venimos refiriéndonos, es decir la aptitud que el Derecho confiere para ser titular de relaciones jurídicas, es capacidad jurídica. De ella se diferencia la capacidad de obrar o aptitud que el Derecho confiere para que la persona realice actos jurídicos. Por ejemplo, un niño o un loco pueden ser dueños (titulares del derecho de propiedad) o acreedores o deudores (titulares activos o pasivos de un derecho de crédito); pero no pueden celebrar contratos para adquirir la propiedad o el derecho de crédito.

Existen además de las personas naturales, las personas jurídicas o denominadas también morales, que de acuerdo a lo que manifiesta nuestro Código Civil en el Art. 564 es una persona ficticia<sup>49</sup>, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. “La persona jurídica es un ente ficticio cuya calidad nace por la creación legal o el reconocimiento administrativo, según sea la naturaleza de la asociación o entidad de que se trate.”<sup>50</sup>

Pues resulta importante diferenciar entre la existencia de una persona jurídica y otra natural ya que las dos pueden ser capaces o incapaces dependiendo de circunstancias

---

<sup>49</sup> Persona que sin serlo de manera humana, el derecho a través del ordenamiento jurídico las crea y da vida legal encaminada a alcanzar objetivos específicos y así relacionarse con la sociedad.

<sup>50</sup> Marco G. Monroy Cabra, Introducción al Derecho, Bogotá - Colombia. Editorial Temis S.A., duodécima edición, 2001. Págs. 277, 278.

determinadas por la ley. Por lo mencionado y con el fin de no afectar el correcto desarrollo de esta tesis, debemos entender que en todos los casos, las personas a las que nos referimos sean estas naturales o jurídicas, son legal y totalmente capaces<sup>51</sup> para obligarse, ya que de lo contrario la investigación se desvirtuaría, extendiendo y confundiendo al lector.

**Objeto.-** Tal como lo manifiesta el Art. 1476 del C.C. toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se tratan de dar, hacer o no hacer. Es decir no se podría bajo ninguna circunstancia celebrar algún tipo de contrato que no conlleve a la obtención de un objetivo en concreto, el mismo que debe ser detallado como su objeto, de igual manera para que este objeto sea lícito debe sujetarse a la ley, las buenas costumbres y el orden público.

El Art. 1478. C.C. dice que existe objeto ilícito en todo lo que contraviene al Derecho Público ecuatoriano. En este sentido, tal como lo hemos mencionado anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico, establece claramente qué cosas son y pueden ser consideradas como comerciales, es decir, susceptibles de ejercer sobre ellas derechos reales y por lo tanto asimilarlas como objetos lícitos<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Art. 1462 C.C.- Toda persona es legalmente capaz, excepto las que la ley declara incapaces

Art. 6 C.Co.- Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil, tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el comercio.

Art. 8 C.Co.- Las personas que por las leyes comunes no tiene capacidad para contratar, tampoco la tienen para ejecutar actos de comercio, salvo las modificaciones que establecen los artículos de esta misma ley.

<sup>52</sup> Art. 1480 C.C. Hay objeto ilícito en la enajenación a) de las cosas que no están en el comercio; b) de los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona; y, c) de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice, o el acreedor consienta en ellos.

Art. 1482 C.C. Existe asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar, en la venta de libros cuya circulación está prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas, estatuas, telecomunicaciones, audiovisuales

**Causa.-** “No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce el acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un delito o de un hecho inmoral tiene una causa ilícita.”<sup>53</sup>

Debemos entender por causa lícita a la autentica motivación que tiene una persona para consentir en la celebración de un contrato determinado. Así pues, la inexistencia de la causa provoca la nulidad de un acto o contrato ya que estaríamos hablando de un contrato viciado por no cumplir con una de las condiciones de existencia establecidas por la ley, y si por el contrario la celebración de un contrato contiene una causa ilícita sin la cual no se llevaría a cabo el negocio jurídico, estaríamos hablando de que este contrato no surte ningún efecto legal ya que debe ser declarado inválido.<sup>54</sup>

## **2.4 Los Contratos<sup>55</sup>.-**

Los contratos en cualquiera de sus modalidades y formas constituyen en el planeta Tierra, la herramienta más utilizada por las personas, empresas, estados, y naciones para alcanzar

---

obscenos, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de opinión y expresión; y generalmente, en todo contrato prohibido por las leyes.

<sup>53</sup> Art. 1483 Código Civil.

<sup>54</sup> Es importante diferenciar entre objeto y causa del contrato ya que de manera general se los suele confundir. Ej. *Art. 1484 C.C.-* No podrá repetirse lo que se ha dado o pagado por un objeto o causa ilícita, a sabiendas.

<sup>55</sup> **INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS** Art. 1562 C.C.- Los contrato deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que, por la ley o la costumbre, pertenecen a ella.

distintos objetivos, pues se ve en ellos el inicio de muchas relaciones de distintos tipos. Los contratos permiten establecer parámetros tan rígidos o flexibles como los contratantes lo decidan, encaminados a regular una infinita clase de actividades.

Existen en el idioma español algunas palabras que las personas usamos para referirnos al vínculo por el cual una persona y otra se encuentran relacionados jurídicamente, en este sentido es bastante común escuchar especialmente palabras como, pacto, convención, convenio o contrato, entre otras.

La convención, es el acuerdo entre dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico; y el contrato constituye una especie particular de convención, cuyo carácter propio consiste en ser productor de derechos y obligaciones. Así, El Art. 1454 del Código Civil ecuatoriano trata por igual al contrato y a la convención y establece que son un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Aclarando que cada parte puede estar integrada por una o varias personas, por lo tanto las personas pueden ser tanto naturales como jurídicas.

Para Savigny<sup>56</sup>, el contrato es el concierto de dos o más voluntades sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus relaciones jurídicas. El Código Civil español expresa que el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra, u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.

---

<sup>56</sup> **Friedrich Karl von Savigny** fue un jurista alemán, nacido en Fráncfort del Meno el 21 de febrero de 1779 y fallecido en Berlín el 25 de octubre de 1861, fundador de la escuela histórica del derecho alemana. Fue profesor en las universidades de Marburgo (1803-1808) y de Landshut (1808-1810) y el primer catedrático de Derecho romano en la Universidad de Berlín, donde enseñó hasta 1842. Ocupó también varios cargos públicos en el Estado prusiano, del que fue ministro para la reforma legislativa (1842-1848). A partir de 1848 se dedicó exclusivamente a realizar trabajos científicos

Existen diversas maneras de clasificar los contratos, según se enuncie uno del otro de sus caracteres, así por ejemplo nuestro Código Civil, al principio de su libro IV que trata de las obligaciones en general y de los contratos enuncia aunque no de manera taxativa algunos de los distintos tipos de contratos como los unilaterales, bilaterales, gratuitos, onerosos, conmutativos, aleatorios, principales, accesorios, reales, solemnes, consensuales, etc. Cabe destacar que en otros códigos de la legislación ecuatoriana se desarrollan muchos otros tipos de contratos, como en el caso del Código de Comercio, la Ley de Compañías, la Ley de Instituciones del Sistema Financiero.

Después de haber analizado cada uno de los elementos que construyen la existencia de un contrato, tenemos argumentos suficientes para elaborar un concepto propio de contrato:

El contrato, una vez que cumple con todos los requisitos de existencia y validez, es el vínculo jurídico perfecto que se da por el concurso real de voluntades de dos o más personas y que genera derechos y obligaciones.

“Las obligaciones nacen, ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones; ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos; ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y cuasidelitos; ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia.”<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Art. 1453 Código Civil de Ecuador.

Con los antecedentes señalados anteriormente, y de acuerdo a la doctrina mundial existente, es muy claro para todos la existencia de una clasificación muy extensa de contratos, de los cuales para no distraer la atención de este trabajo de investigación, revisaremos brevemente aquellos mencionados en el Libro IV de nuestro Código Civil.

2.4.1 ***Contratos unilaterales y bilaterales.***- Esta clasificación hace referencia a la reciprocidad o falta de reciprocidad de las obligaciones contraídas que se desprenden del contrato, así, si las obligaciones son recíprocas hablamos de contratos bilaterales, y si por el contrario es una sola parte la que se obliga frente a la otra, este es un contrato unilateral (Art. 1455 C.C.). De paso sea mencionado el Art. 1505 C.C. por la importancia que tiene en materia contractual, el que manifiesta que en los contratos bilaterales va envuelta la *condición resolutoria* de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero, en tal caso, podrá el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios. Al estar inmersa en todo contrato bilateral como el de compraventa, sea o no estipulada de manera expresa, se la conoce como *condición resolutoria tácita*.

2.4.2 ***Contratos gratuitos y onerosos.***- El Art. 1456 C.C. prescribe que el contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.



2.4.3 ***Contratos conmutativos y aleatorios.***- Solo los contratos onerosos caen en esta clasificación, y luego, tal como lo establece el Art. 1457 C.C. el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.

2.4.4 ***Contratos principales y accesorios.***- Como todo en el derecho, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y en general lo accesorio persigue el claro objetivo de garantizar el cumplimiento de la obligación principal. En este sentido el Art. 1458 C.C. establece que el contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención; y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella.

2.4.5 ***Contratos reales, solemnes y consensuales.***- Según el Art. 1459 C.C., el contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere; es solemne cuando está sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no surte ningún efecto civil; y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento.

## **2.5 El Contrato de Compraventa.-**

Este tipo de contrato seguramente es el más conocido y de más uso en el mundo, basta con pensar o escuchar sobre algún negocio cualquiera para que la idea de una compraventa

venga a nuestras mentes, entendiéndola brevemente como el acto por el cual una parte entrega definitivamente a otra el dominio, uso, goce y disposición de un bien a cambio de una prestación pecuniaria, es decir la propiedad sobre un objeto determinado pasa a nuevas manos por un valor que el vendedor lo ha fijado.

Nuestro Código Civil en su Art. 1732, nos enseña que la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa, y la otra a pagarla en dinero. El que contrae la obligación de dar la cosa se llama vendedor, y el que contrae la de pagar el dinero, se llama comprador. El dinero que el comprador se obliga a dar por la cosa vendida se llama precio.

Se pueden establecer diversas clases de compraventa, ateniéndose a los sujetos que intervienen, a los objetos y a ciertas modalidades, pero no hay justificación suficiente para tales clasificaciones; así, nos hallamos ante una verdadera compraventa sea que intervengan personas plenamente capaces o menores, interdictos u otros sujetos por medio de sus representantes legales; hay igualmente compraventa cuando se quiere transmitir el dominio de las cosas singulares o universales, de muebles o inmuebles y cuando se hace el contrato por espontánea determinación de las partes, lo mismo que cuando debe intervenir una autoridad. Tampoco sería razón suficiente para crear figuras jurídicas especiales de compraventa, la existencia o no de cláusulas que modifican en alguna medida las obligaciones de vendedor o comprador, como las que confieren plazos están sujetas a condición, o bien aumentan o disminuyen la responsabilidad de uno u otro.

Del análisis realizado ya en este capítulo respecto de la clasificación de los contratos, podemos determinar que el contrato de compraventa tiene de manera general las siguientes características: es un contrato bilateral, oneroso, conmutativo, consensual, excepcionalmente solemne.

## **2.6 El contrato por adhesión.-**

El contrato por adhesión se halla estrechamente vinculado con la denominada sociedad de consumo, y ésta se relaciona a su vez, con la gran empresa y la acentuada tendencia a la producción en serie de bienes y servicios. El tráfico comercial de masa se ve estimulado por la ampliación del número de consumidores, y éstos a su vez por la publicidad, la cual, desenvuelta por los medios de comunicación social, es dada por el empresario mediante mensajes, predominantes, algunos de dudosa verdad.

Adviene el “tiempo de la empresa” que con la racionalización, por criterios fundados en una tecnología de avanzada y en la organización, genera respuesta adecuada a un proceso de transformación que requiere óptimas condiciones de funcionamiento en la etapa de comercialización.

El contrato por adhesión ha sido definido por Messineo como aquel en que las cláusulas son dispuestas por uno de los futuros contratantes de manera que el otro no puede modificarlas ni puede hacer otra cosa que aceptarlas o rechazarlas, de tal suerte que este último no presta colaboración alguna a la formación del contenido contractual, quedando

así sustituida la ordinaria determinación bilateral del contenido del vínculo por un simple acto de aceptación o adhesión al esquema predeterminado unilateralmente.<sup>58</sup>

***La Libertad Contractual.-*** Es la condición general de la contratación que se supone existe para que toda aquella persona interesada en celebrar un contrato, pueda incluir y/o eliminar cláusulas según sus intereses pero cuidando siempre la existencia del acuerdo de voluntades y por lo tanto se de el consentimiento claro de las partes en lo que están aceptando. Pero estas condición se ve afectada cuando dadas las circunstancias, las condiciones que envuelven <sup>59</sup>al bien o servicio que se quiere contratar son directamente impuestas por quien ofrece el mismo, dejando totalmente de lado la construcción de un instrumento concensuado y participativo.

“La libertad contractual requiere de un ordenamiento jurídico que considere como vinculante aquellos contratos libremente concluidos por las partes equiparadas jurídicamente. De esta forma cada individuo tiene la posibilidad de adoptar una actividad creadora de derecho en el campo jurídico privado, mediante la configuración coincidente de las relaciones recíprocas.

La evolución económica y social de los últimos tiempos, merced a la dinámica interna del capitalismo económico, ha conducido al fenómeno de la gran empresa y, al mismo tiempo y casi por la misma razón, a una ampliación en el mundo de los consumidores, es decir, a una ampliación de personas que aspiran a adquirir o disfrutar los bienes o servicios que

---

<sup>58</sup> Rubén S. Stiglitz y Gabriel A. Stiglitz, CONTRATOS POR ADHESIÓN, clausulas abusivas y protección al consumidor. Buenos Aires, Argentina. S-a

<sup>63</sup> Rubén S. Stiglitz y Gabriel A. Stiglitz, CONTRATOS POR ADHESIÓN, clausulas abusivas y protección al consumidor. Buenos Aires, Argentina. S-a

para el consumo proporcionan las empresas. De aquí que el tráfico económico, cada vez más acelerado, se haya ido convirtiendo en un tráfico de masa. No es posible que la gran empresa económica establezca contratos singulares con cada uno de sus clientes. Las grandes empresas mercantiles e industriales, que celebran contratos en masa, imponen a sus clientes un contrato “tipo” previamente redactado. El esquema tradicional del contrato hace tránsito, de esta manera, a los llamados contratos por adhesión, contratos reformulados o contratos con condiciones generales.”<sup>60</sup>

Cuando hablamos de Contratos por Adhesión nos encontramos frente a un supuesto donde no es posible contratar “como uno quiera”, en que la voluntad no es libre, y donde frente a una falta de regulación del tema, esta categoría contractual se ha transformado, atento a la inexistencia de controles preventivos, en un instrumento de dominación signado por la desigualdad, más que económica, jurídica.

En la situación cotidiana del negocio jurídico de compra y venta de vehículos nuevos nos hemos dado cuenta de que el paso de los tiempos ha impersonalizado la estructuración de los instrumentos mediante los cuales se da forma jurídica al acto que nos atañe; todo esto de acuerdo a cómo se van configurando las relaciones socio-económicas en este mundo del siglo XXI que se encuentra cada vez más globalizado, y así es que llegamos a que las concesionarias tienen realizados formatos del contrato de compraventa del vehículo, el cual es presentado al comprador para que éste sencillamente se limite a leer el contenido del documento y proceda a firmarlo, sin tener la potestad de negociar las cláusulas contractuales y los demás términos del negocio, quedando a salvo la única facultad de

---

<sup>60</sup> Rubén S. Stiglitz y Gabriel A. Stiglitz, CONTRATOS POR ADHESIÓN, cláusulas abusivas y protección al consumidor. Buenos Aires, Argentina. S-a

decidir si procede a celebrar el contrato o abstenerse del mismo y privarse del objeto que desea comprar.

Este contrato se define en la doctrina y en nuestra Ley Orgánica de Defensa del Consumidor como “*Contrato de Adhesión*” que es aquel que “(...) *cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, haya discutido su contenido*”<sup>61</sup>.

Esta definición es insuficiente ya que no pone énfasis en la imposición del contenido del contrato por parte de una parte sobre la otra.

**2.6.1 Cláusulas prohibidas para los Contratos de Adhesión:** La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, enuncia las cláusulas que se encuentran prohibidas para estos contratos, que como en el caso que nos atañe, se producen a diario en nuestra sociedad. La inclusión de cláusulas de esta naturaleza en los contratos amparados por el derecho de consumo implican la nulidad de pleno derecho de las mismas y la ineficacia jurídica de lo estipulado, análisis que será importante cuando nos refiramos a los vicios redhibitorios que generan estas prácticas dolosas y la consecuente argumentación para la acción de rescisión del contrato. Vamos a señalar en este momento las cláusulas que se encuentran presentes en el Art. 43 de La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, analizando las más relevantes para el contrato de compraventa de automóviles y que profundizaremos más adelante, para lo cual, en primer lugar, citaremos el art. de la mencionada ley:

*“(...)Son nulas de pleno derecho y no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones contractuales que:*

---

<sup>61</sup> Ley Orgánica de defensa del Consumidor. Art. 2 Definiciones.- Inciso Tercero. Edición de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Mayo. 2009.

- 1. Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados;*
- 2. Impliquen renuncia a los derechos que esta ley reconoce a los consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio;*
- 3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;*
- 4. Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo que el consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento;*
- 5. Permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de cualquier condición del contrato;*
- 6. Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver unilateralmente el contrato, suspender su ejecución o revocar cualquier derecho del consumidor nacido del contrato, excepto cuando tal resolución o modificación esté condicionada al incumplimiento imputable al consumidor;*
- 7. Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato, o sean ilegibles;*
- 8. Impliquen renuncia por parte del consumidor, de los derechos procesales consagrados en esta ley, sin perjuicio de los casos especiales previstos en el Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley de Arbitraje y Mediación y demás leyes conexas; y,*
- 9. Cualquier otra cláusula o estipulación que cause indefensión al consumidor o sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.<sup>62</sup>*

---

<sup>62</sup> Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Art. 43. Edición de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Mayo del 2009. Pág. 13

Del presente artículo nos atañen sobre todo las contenidas en los numerales 1, 2, 3, 6 y 9, que pasamos a analizarlas una por una.

i) *Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados:* cuando el Contrato de Compraventa de Automóviles, en el contenido de la garantía del vehículo, indica que la misma concluye al momento en que se realice el mantenimiento rutinario de él en un lugar distinto de la casa automotriz, se denota claramente que esta limita su responsabilidad de responder al consumidor por los defectos de fábrica o daños presentes en el vehículo al momento de la compra. Sin embargo, por esta condición contractual, los proveedores eluden su responsabilidad contenida en el Art. 11 de la misma ley, la cual es garantizar la calidad del bien adquirido.

ii) *Impliquen renuncia a los derechos que esta ley reconoce a los consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio:* Al establecerse que la garantía del vehículo se condiciona a que obligatoriamente deben realizarse los mantenimientos rutinarios del mismo en la casa automotriz, se está violentando los derechos de los consumidores a elegir libremente “*bienes y servicios competitivos, de óptima calidad*”<sup>63</sup>, así como su derecho a un “*trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios*”<sup>64</sup> y el derecho a la “*Protección contra métodos comerciales coercitivos o desleales*”<sup>65</sup>, ya que la sujeción obligatoria en la realización de estos chequeos impide este ejercicio autónomo y racional que faculta a la persona de

---

<sup>63</sup> Art. 4 Num. 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

<sup>64</sup> Art. 4 Num. 5 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

<sup>65</sup> Art. 4 Num. 6 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor



acuerdo a sus legítimos intereses. En esta situación y coincidiendo con el tratadista Víctor Cevallos Vásquez, se está faltando al principio fundamental de protección de los intereses económicos y sociales de los consumidores ya que éstos se ven impedidos de buscar una opción económicamente más conveniente para alcanzar el nivel de confort y satisfacción de sus necesidades, desde las más básicas hasta las más elaboradas. La protección de esta libertad de elección de los consumidores contribuye a la “(...) *formación de mercados más perfectos y competitivos*”<sup>66</sup>

iii) *Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del comprador.*- La condición de la garantía del vehículo terminará si no se realizan los mantenimientos rutinarios en la casa automotriz en la que se vendió éste, implica que si se diera la situación de que el vehículo comprado presenta defectos de fabricación y se daña, el cliente tendrá que realizar todas las diligencias necesarias para demostrar este hecho, cuando en materia de derecho de consumo, es a los proveedores a quienes corresponde probar los hechos.

iv) *Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver unilateralmente el contrato, suspender su ejecución o revocar cualquier derecho del consumidor nacido del contrato, excepto cuando tal resolución o modificación esté condicionada al incumplimiento imputable al consumidor.*- De la manera en que se encuentra planteado el condicionamiento a realizar los mantenimientos rutinarios de los vehículos, se da lugar a que el concesionario, de manera inopinada y arbitraria, impute sin mayor demostración al comprador el incumplimiento de las condiciones del contrato, lo cual parte de una noción falaz, como veremos adelante, ya que el contenido del derecho de consumo se guía por el

---

<sup>66</sup> SELDON, Arthur, Citado en CEVALLOS, Víctor. LIBRE COMPETENCIA, DERECHO DE CONSUMO Y CONTRATOS. Editorial Jurídica del Ecuador. Primera Edición. 2001. Quito. Pág. 116

principio de que se deben proteger los intereses económicos y libertades de las personas consumidoras.

*v) Cualquier otra cláusula o estipulación que cause indefensión al consumidor o sea contraria al orden público y a las buenas costumbres.-* Este caso pretende abarcar cualquier circunstancia que se enmarque dentro de “Cláusulas contrarias a las buenas costumbres”, la cual otorga cierto margen de interpretación al juzgador para definir qué se entiende por buenas costumbres. Para el caso que nos atañe, creemos que la eliminación de la garantía de fábrica del vehículo por no hacerse el mantenimiento mecánico en la casa automotriz que lo vendió genera indefensión a la parte consumidora desde el punto de vista que ésta no podría contar con los elementos probatorios suficientes para demostrar que la revisión rutinaria no efectuada en la casa automotriz no incidió en el desperfecto generado en el vehículo, lo cual a la vez genera la imposibilidad de reclamar a la concesionaria.

**2.6.2 Prácticas prohibidas a los proveedores o vendedores:** Las condiciones que en el literal anterior vimos se subsumen en los casos previstos en el Art. 43 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que se refieren a cláusulas nulas de pleno derecho contenidas en los contratos de Adhesión, y que por ende conllevarían a que carezcan de eficacia jurídica. El fundamento de que estas prácticas estén expresamente concebidas en la ley tiene relación directa con el hecho de que las mismas implican una renuncia a los derechos de las personas consumidoras, que se encuentran tutelados en la Constitución de la República y en la legislación secundaria de nuestro país causándoles serios perjuicios. Sin embargo, existen otro tipo de prácticas que si bien no generan per sé la nulidad de lo estipulado contractualmente, de igual manera constituyen una seria afectación a varios

principios presentes en el derecho de consumo y que en definitiva generan responsabilidades para los proveedores que se determinan en sanciones previstas en el cuerpo normativo pertinente, a más de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que hubiere lugar de ser el caso.

En nuestra Ley Orgánica de Defensa del Consumidor existe una enumeración de carácter ejemplificativo en el art. 55 sobre las prácticas que se encuentran “*absolutamente prohibidas*” a los distintos proveedores de bienes y servicios, de las cuales tomaremos tres por considerarlas relevantes al caso de la compraventa de vehículos y su garantía de fábrica para de esa manera contextualizarlas en el objeto de estudio de la presente investigación.

Previamente a ello, procedemos a citar el artículo mencionado:

*“Art. 55.- Prácticas Abusivas.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y están absolutamente prohibidas al proveedor, entre otras, las siguientes:*

***1. Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la contratación de un servicio, salvo que por disposición legal el consumidor deba cumplir con algún requisito;***

*2. Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo permita;*

*3. Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que éste lo haya solicitado. En tal hipótesis, se entenderá como muestras gratis los bienes y /o servicios enviados;*

***4. Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad del consumidor para venderle determinado bien o servicio;***

*5. Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de servicios que no cumplan con las normas técnicas y de calidad expedidas por los órganos competentes;*

6. *Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o contractuales;*
7. *Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, o dejarlo a su único criterio; y,*
8. *El redondeo de tiempos para efectivizar el cobro de intereses, multas u otras sanciones económicas en tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros similares.*<sup>67</sup>

i) *Venta condicionada.*- La venta condicionada es una de las prácticas abusivas que se presenta de manera más recurrente en los contratos de adhesión de venta de vehículos en los que media la obligación legal de otorgar garantía de fabricación ante la venta de un bien o servicio determinado. Y es que del texto legal se desprende que el proveedor no puede condicionar la venta del bien a la contratación de determinado servicio, por oponerse esto al principio de interés económico del comprador y además por el derecho a la competencia justa y a los mercados transparentes que se encuentran previstos en la Constitución. En cuanto al texto normativo, vale la pena indicar que la defensa de las casas automotrices se basa en la parte final del numeral 1 del Art. 55 de la ley al afirmar “*salvo que por disposición legal el consumidor deba cumplir determinado requisito*” y que en la perspectiva de la casa es la del art. 11 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ante esto, vale la pena analizar que el art. 11 establece un mecanismo de protección al comprador ante la adquisición de un bien que se encuentre con defectos y errores de fábrica, en base al derecho de las personas usuarias y consumidoras a recibir bienes y servicios de óptima calidad, por lo que la interpretación que suele ser dada por las concesionarias es antojadiza y alejada del fin que tiene la garantía. Es más, debemos señalar, que el mantenimiento

---

<sup>67</sup> Ley orgánica de Defensa del Consumidor. Art. 55. Edición de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito. 2009. Pág. 15

rutinario de un vehículo tal como el cambio de aceite, revisión de suspensión y demás comprenden al uso ordinario del bien en cuestión y no tiene relación alguna con el objetivo de la garantía de fábrica que tiene como fin el solventar problemas con respecto a la fabricación del vehículo. Sin embargo, las concesionarias ponen fin a la garantía de fábrica por haberse realizado un mantenimiento rutinario en un establecimiento diferente.

*ii) Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad del consumidor para vender el bien o servicio.-* Para el caso que atañe a la presente investigación, esta práctica se fundamenta en que como los usuarios de manera general no tienen los conocimientos específicos y técnicos de la industria automotriz, y en específico, desconocen que los mantenimientos rutinarios no tienen relación con las condiciones de fábrica con las que salen los vehículos, aceptan de manera general la información engañosa que se les provee en la concesionaria que afirma que cuando se hacen los primeros mantenimientos fuera de la casa automotriz se suelen generar daños en los sistemas de funcionamiento del vehículo y que por ende ya no corresponde a la casa garantizar los desperfectos del vehículo. Generalmente esta práctica está vinculada al derecho de información que deben tener los compradores para elegir los bienes y servicios que desean adquirir de manera conveniente tanto en calidad como en precio. En palabras de Cevallos, la importancia económica de este principio radica en que *“al hacer de los consumidores personas mejor informadas y más discriminantes al comprar y al aportar al interés de las marcas comerciales a las realizaciones de cada producto (...) entrega elementos de juicio para que éstos no sean inducidos por estímulos visuales, olfativos, y de otra índole para consumir bienes y servicios más allá de lo necesario(...)”*<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Op. Cit. Pág. 117

iii) *Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, o dejarlo a su único criterio.*- Este criterio se vincula a que de manera general la calificación para invalidar la garantía de fábrica de los vehículos la realiza el concesionario automotriz en cualquier momento y sin ninguna participación del usuario, quedando a discreción de la empresa el decidir hasta cuándo corre la garantía de fábrica.

Finalmente, es menester señalar que el efecto de la realización de las prácticas abusivas prohibidas por el art. 55 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor si bien civilmente no provocan nulidad de pleno derecho como en el caso del Art. 43, generarían situaciones de ocultamiento de defectos del vehículo al momento de su venta y que son aspectos que el comprador analizaría antes de firmar el contrato en condiciones normales, para no celebrarlo o pagar un precio inferior. Estos defectos ocultos se denominan como vicios redhibitorios que estudiaremos más a fondo más adelante, ya que dan lugar a una acción diferente con respecto a las del Art. 43 aunque igualmente generan daños y perjuicios que se deben indemnizar. En el ámbito del derecho de consumo, el cometimiento de estas prácticas constituyen infracciones que son sancionadas con la pena general establecida en el Art. 70 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que es *“multa de cien a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, y de ser el caso, comiso de bienes, suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la prestación del servicio de publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones pecuniarias a las que hubiere lugar”*<sup>69</sup> Además, el proveedor no se exime de otras sanciones pecuniarias e indemnizaciones a que hubiere lugar.

---

<sup>69</sup> Art. 70 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 20

## **2.7 Conclusiones:**

Dada la naturaleza jurídica que tiene un vehículo automotor como bien mueble y de acuerdo, en un principio, a la clasificación de los contratos que establece el Código Civil del Ecuador, llevando en mente el objetivo de encaminar esta investigación al tema de la eliminación indebida de la garantía de fábrica, se me viene la siguiente pregunta: ¿Es posible que un contrato oneroso que nace como, o debería en principio ser puramente conmutativo, pueda llegar a convertirse en cierto aspecto en un contrato aleatorio? Con el desarrollo de la misma podremos indagar mucho más profundamente el tema de la eliminación injustificada de la garantía de fábrica de los vehículos nuevos y la legalidad o ilegalidad con la que se están manejando las condiciones y parámetros impuestos por las casas comerciales. Pues debemos tomar en cuenta puntos clave que espero sean motivo de debate, crítica y más investigación, así:

Como lo hemos manifestado ya, el contrato oneroso es conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez. En este sentido la compra de un bien mueble como lo es un automotor se entiende totalmente perfecta cuando el comprador libremente ha consentido en adquirir determinada marca de automotor, modelo, color, y otras características propias por un precio previamente establecido, y el vendedor recibe el pago de este producto en la forma acordada. Una vez que todos estos elementos en conjunto han concurrido el contrato está terminado por el cumplimiento total de las obligaciones adquiridas por las partes, disolviéndose de manera definitiva el vínculo jurídico que las unía, respecto del contrato de compraventa.

No obstante, qué pasa cuando la prestación equivalente a la que se refiere la primera parte del artículo 1457 C.C. está vinculada a una contingencia<sup>70</sup> incierta de ganancia o pérdida, es decir el caso de los contratos aleatorios, es en este punto donde nace la controversia, así:

En el caso del contrato netamente conmutativo que acabamos de mencionar, las obligaciones se extinguen completamente una vez que cada parte obtiene lo acordado, es decir, el vendedor su dinero y el comprador su bien mueble (el vehículo). Teniendo claro, obviamente y desde una perspectiva de buena fe, que de existir algún inconveniente con fallas en el producto entregado, el vendedor responderá justamente por las mismas, mientras estas hayan sido producidas por una defectuosa fabricación, o una incorrecta manipulación del producto anterior a la entrega del bien al comprador, propietario o quien haga sus veces. De igual forma el comprador, si por algún motivo no se hubiese hecho efectivo el pago, deberá realizar las acciones necesarias encaminadas a solucionar su obligación pendiente, utilizando cualquiera de los instrumentos transaccionales que están permitidos y establecidos por la ley y previo al respectivo consentimiento del vendedor.

Pues, cuando adquirimos un vehículo nuevo no basta con pagar completamente el precio acordado sino que además al comprador se le impone la obligación de que, para poder ejercer la garantía de fábrica por alguna falla, valga la redundancia “de fábrica”, este haya realizado frecuente e interrumpidamente todos sus chequeos y mantenimientos en la casa comercial o talleres autorizados. Solamente luego de ello la concesionaria decidirá si el

---

<sup>70</sup> Contingencia: Posibilidad de que una cosa suceda o no. Cosa que puede suceder o no. Riesgo. Diccionario Enciclopédico OCEANO.



arreglo, compostura o reemplazo de piezas que amerite será sujeta o no a un reconocimiento de la garantía ofrecida.

En otras palabras, el comprador paga el precio del vehículo y asume que por el solo hecho del pago adquiere también la garantía de fábrica, no obstante en la práctica, la ejecución de esta garantía depende de la “contingencia” de que el comprador además lleve el vehículo a hacer los mantenimientos de rutina solamente en la casa automotriz donde lo adquirió, caso contrario la garantía se pierde; o la ejecución de esta garantía depende de la “contingencia” de que el concesionario “acepte” que tal desperfecto está dentro o cubierto por la garantía.

Anotemos además que dado el caso mencionado en el párrafo anterior, si al vehículo nuevo por la razón que fuere se le realizó un simple cambio de aceite del motor en algún lugar distinto al taller de la casa comercial, y luego el vehículo presenta eventualmente algún tipo de descompuesto en su sistema eléctrico, el concesionario sin mayor averiguación descarta la posibilidad de revisar el desperfecto a pesar de que técnicamente lo uno no tiene nada que ver con lo otro, argumentando que por el solo hecho de haber ido a otro taller, automáticamente perdió la garantía de fábrica. Y siendo el caso de que se produzca la misma falla en el sistema eléctrico y el vehículo ha sido fiel cliente del taller recomendado, al momento en que debe ejecutarse de manera inmediata la garantía otorgada, resulta muchas veces que el concesionario concluye que su garantía no reconoce fallas en el sistema eléctrico.

“La compraventa es conmutativa o sinalagmática, es decir que cada una de las partes se obliga en virtud de la obligación recíproca de la otra; la causa jurídica para el vendedor es

la obligación del comprador de pagarle el precio, y la causa jurídica para el comprador consiste en la obligación del vendedor de transferir el dominio de la cosa. La reciprocidad de obligaciones guía toda la regulación equitativa de responsabilidades y de indemnizaciones que se deben las partes en caso de incumplimiento.

Solo excepcionalmente este contrato que es conmutativo, puede convertirse en aleatorio: cuando se vende una cosa que puede o no existir o llegar a existir”<sup>71</sup>

Los contratos de compraventa que son onerosos y conmutativos por naturaleza, están respecto de la garantía de fábrica sujetos a una condición de postventa, que podrían desnaturalizar el consentimiento del cual supuestamente nació en primer momento la celebración del contrato principal y con ello el objeto que éste persigue. Mucho más si desde el punto de vista de la ejecución de la garantía de fábrica el equivalente del pago de esta garantía consiste en una contingencia incierta de que el concesionario acepte reconocerla dependiendo ya sea que los chequeos de rutina se hayan realizado o no, y además que el desperfecto que presente el vehículo este cubierto por la garantía.

---

<sup>71</sup> Juan Larrea Holguín. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, séptima edición actualizada, 2005. volumen 4, página 12.

## CAPITULO 3

**Derechos y obligaciones que nacen de una relación jurídica en la que esta inmersa una garantía de fábrica.-** Es importante antes de finalizar este trabajo analizar los derechos y obligaciones que se desprenden o pueden desprender de las relaciones contractuales en las cuales existe inmerso un tema de garantía de fábrica, por lo que estudiaremos por separado, primeramente lo referente a los derechos y luego las obligaciones.

**3.1 Derechos.-** Cuando decimos o escuchamos “derecho”, esta expresión hace referencia a un sistema de normas, o sea, a lo que se llama “derecho objetivo”; o sino a una situación particular en que se encuentra una persona o conjunto de personas en relación al derecho objetivo.

Cuando decimos que se da un **derecho subjetivo** a alguien también se suele entender como “permiso”, “licencia”, “atribución”, “privilegio”, “facultad”, “poder”, “posibilidad”, “garantía”, etcétera. Estos términos son sinónimos parciales de “derecho” (en el sentido subjetivo) y es conveniente tenerlos en cuenta para distinguir diferentes significados de tal expresión.

Para el iusnaturalismo<sup>72</sup> tradicional, los derechos subjetivos son independientes de los que disponen las normas de derecho objetivo. Son facultades y poderes innatos al hombre, que

---

<sup>72</sup> El Derecho natural o ius naturalismo hace relación a la existencia de un ordenamiento que se fundamenta en la naturaleza humana (en la razón) y en principios superiores de justicia.

los tiene por el solo hecho de serlo y que existirían aún cuando hipotéticamente se aboliera la técnica de regulación y motivación de la vida social que es característica del derecho objetivo.

El positivismo metodológico no se opone, en cuanto tal, a la idea de que puede haber derechos con las características que los iusnaturalistas les asignan (es decir, que son inherentes a la persona humana y que su existencia es independiente de su reconocimiento por el Estado). Pero sostendrá que tales derechos son morales y no jurídicos.

El significado descriptivo que los positivistas asignan a la expresión “derecho” implica que las proposiciones acerca de derechos subjetivos y deberes jurídicos deben ser verificables en términos de lo que determinadas normas positivas disponen. De este modo no puede decirse que los habitantes de un país tienen, por ejemplo, el derecho jurídico de practicar libremente su culto cuando las normas del sistema jurídico de ese país prohíben las prácticas religiosas o imponen un culto oficial.

Los positivistas sostendrían que en un caso como el recién mencionado el derecho moral de practicar libremente el culto no fue reconocido por el sistema jurídico y, en consecuencia, no se refleja en un derecho jurídico correlativo. Esto sin duda afecta negativamente a la justificabilidad y fuerza obligatoria moral del sistema en cuestión, pero no impide – a diferencia de lo que piensan los iusnaturalistas – que sea considerado un orden jurídico (recuérdese que para el positivismo metodológico el hecho de que un sistema sea jurídico no implica que tenga fuerza obligatoria moral).

Los llamados “derechos individuales” son primordialmente derechos morales, sin perjuicio que pueda haber derechos jurídicos correlativos en el derecho internacional y en los derechos nacionales democráticos. Como derechos morales que son la libertad de cultos, de expresión, de asociación, el derecho a la vida, a la integridad corporal, al debido proceso judicial, etc., son derechos que la gente tiene independientemente de lo disponga el ordenamiento jurídico de un país. Precisamente los derechos individuales están dirigidos a los órganos estatales e implican su deber de reconocerlos dictando normas que creen los derechos jurídicos correspondientes y no realizando actos que los restrinjan.

El hecho de que los derechos individuales sean derechos morales sin que, muchas veces, sean al mismo tiempo derechos jurídicos no implica que estén dirigidos sólo a los legisladores; también los jueces son moralmente responsables de sus decisiones y deben tener en cuenta los derechos morales de la gente.<sup>73</sup>

El derecho objetivo es el conjunto de normas que regulan la conducta humana desde el punto de vista jurídico. El derecho subjetivo es un poder o facultad reconocido jurídicamente, para hacer u omitir algo. El derecho subjetivo es la facultad derivada de una norma jurídica para interferir en la persona, en la conducta o en el patrimonio de otro sujeto, o para impedir una interferencia ilícita. En el derecho subjetivo existen pues dos elementos: un elemento de fondo, que es el interés que el ordenamiento desea proteger, y un elemento de forma que es el poder que se confiere a la voluntad de una persona sobre un bien determinado, para que lo destine a la realización de dicho interés.

---

<sup>73</sup> Carlos Santiago Nino, Introducción al Análisis del Derecho. Buenos Aires, Editorial Astral, 2da edición ampliada, 2001. Págs. 195, 196.

**3.1.2 Derechos Reales y Personales.-** La clasificación más importante de los derechos, y que origina varios problemas, es la de los derechos reales y personales. Muchas veces se presenta la clasificación de los derechos reales y personales como una distinción primaria. Esta concepción parece insuficiente, puesto que quedarían al margen, como inclasificables numerosas relaciones jurídicas, como los llamados derechos personalísimos, que evidentemente no son ni reales ni personales, que son inherentes al hombre por ser tal. Hay que aceptar que, aunque muy importante, esta clasificación no es más que una subdivisión de otras categorías que hay que distinguir previamente.

**3.1.2.1 El Derecho Real.-** El Art. 595 C.C. de la norma sustantiva civil prescribe que el derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona, y pone en relieve sus caracteres fundamentales: relación directa entre el sujeto y la cosa objeto de derecho y oponibilidad *erga omnes*.<sup>74</sup>

Pero esta concepción que muestra al titular del derecho real gozando de la cosa a solas, ha sido rudamente criticada. Los derechos son relaciones entre personas, y el derecho real como todo derecho, supone un sujeto activo, un sujeto pasivo y un objeto.

El sujeto pasivo es todo el mundo y el derecho real debe concebirse, más bien, como una relación obligatoria en que el sujeto activo es simple; constituida por una persona determinada, y el sujeto pasivo, innumerable e indeterminado, porque comprende a todas las personas que entren en relación con el sujeto activo.

---

<sup>74</sup> Loc. Lat. Contra todos. Expresa que la ley, el derecho, o la resolución abarcan a todos, hayan sido partes o no; y ya se encuentran mencionados u omitidos en la relación que se haga.

El rol del sujeto pasivo se traduce en una abstención. Crea el derecho real una obligación negativa universal, que consiste en abstenerse de turbar el pacífico ejercicio del derecho.

En el primer plano se destaca el sujeto activo, ejercitando los actos que configuran su derecho; el sujeto pasivo, a quien no se exige sino una abstención, queda colocado en un segundo plano, que impide percibirlo con nitidez, circunstancia que justifica la concepción simple del derecho real como una relación directa entre una persona y una cosa.

La obligación pasiva universal se hace presente cuando es violada y el contraventor puede ser condenado a la consiguiente reparación.

**3.1.2.2 El derecho personal.-** De acuerdo con lo expresado en la definición del Art.596 C.C. del Código Civil “son los que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que, por un hecho suyo o la sola disposición de la ley, han contraído las obligaciones correlativas”.

El derecho personal es, por consiguiente, una relación jurídica entre determinadas personas. Nítidamente se destaca un sujeto activo, un objeto debido y un sujeto pasivo del derecho por cuyo intermedio el primero obtiene la satisfacción de la ventaja que persigue.

El derecho personal no es oponible a toda persona, sino solamente a aquella que se obligó a realizar la prestación que constituye el objeto del derecho. El sujeto pasivo debe ejecutar en provecho del sujeto activo una prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer.

**3.2 Obligaciones que adquieren las partes en un contrato de compraventa de un vehículo nuevo.-** De acuerdo al Art. 1740 del Código Civil, la venta se reputa perfecta desde que las partes han convenido en la cosa y en el precio, por lo que a partir de este acto debemos analizar las obligaciones que nacen tanto para el comprador como para el vendedor, y así definir en qué momento del negocio se podría encuadrar a la “garantía de fábrica”. De igual manera, de acuerdo a lo que hemos analizado debemos entender que los derechos de una de las partes están directamente relacionados con las obligaciones de la otra.

### **3.2.1 Del comprador:**

Las obligaciones del comprador son aquellas relacionadas básicamente con el pago que este debe realizar por el bien a adquirir, de conformidad con el art. 1486 este tipo de obligaciones son civiles, ya que dan derecho al acreedor para exigir su cumplimiento.

El Art. 1811 C.C. señala que la principal obligación del comprador es la de pagar el precio convenido. El precio deberá pagarse en el tiempo y el lugar estipulados, o en el lugar y el tiempo de la entrega, no habiendo estipulación en contrario.

### **3.2.2 Del Vendedor:**

El Art. 1764 C.C. nos enseña que las obligaciones del vendedor se reducen en general a dos: la entrega o tradición<sup>75</sup>, y el saneamiento<sup>76</sup> de la cosa vendida.

---

<sup>75</sup> Art. 686 C.C.- La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo, por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo.

<sup>76</sup> Art. 1777 C.C.- La obligación de saneamiento comprende dos objetos: amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, y responder de los defectos ocultos de ésta, llamados vicios redhibitorios.



La tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio, y verificando esta transferencia, en el caso que nos compete permitiéndole la aprehensión material del vehículo; mostrándoselo; y, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro, en el lugar convenido<sup>77</sup>.

En cuanto a la entrega del bien el Art. 1568 C.C. aclara que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa; y si ésta es una especie o cuerpo cierto, contiene, además, la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor que no se ha constituido en mora de recibir. Así mismo el Art. 1768 C.C. manifiesta que el vendedor está obligado a entregar lo que expresa el contrato, pues todo contrato legalmente celebrado se constituye en ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento mutuo o por causas legales.

En este sentido los concesionarios entregan los vehículos en la mayoría de los casos, percatándose de probar en presencia de los clientes que ellos esten funcionando correctamente, especialmente las cosas y características que se encuentran a la vista y son fáciles de apreciar como luces, accesorios, estado de la carrocería, color, radio, llanta de emergencia, etc., claro está que solo al conducir un carro se puede detectar cualquier anomalía, y esto sucederá una vez que el comprador del coche haya pagado o asegurado el pago del bien para así llevarlo a las calles.

---

<sup>77</sup> Art. 189 C.Co.- Perfeccionado el contrato, el vendedor debe entregar las cosas vendidas en el plazo y lugar convenidos

El artículo 1764 del C.C. al hablar del saneamiento se refiere a que el bien que se esta entregando debe estar en óptimas condiciones para el uso y goce del mismo por parte del comprador, y no solo eso, debe además estar libre de cualquier vicio, así, el Art. 1798 C.C. señala que son vicios redhibitorios<sup>78</sup> los que reúnen las calidades siguientes:

1. Haber existido al tiempo de la venta;
2. Ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de manera que se a de presumir que, conociéndolos el comprador, no la hubiese comprado, o la hubiera comprado a mucho menos precio; y,
3. No haberlos manifestado el vendedor, y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio.

Teniendo en cuenta que se presume la buena fe de las personas no estaríamos hablando de un caso de vicios redhibitorios, sin embargo, el Art. 1801 C.C. manifiesta que si el vendedor conocía los vicios y no los declaró, o los vicios eran tales que el vendedor haya debido conocerlos por razón de su profesión u oficio, estará obligado no sólo a la restitución o rebaja del precio, sino a la indemnización de perjuicios. Pero si el vendedor no conocía los vicios, ni eran tales que por su profesión u oficio debiera conocerlos, sólo estará obligado a la restitución o rebaja del precio.

---

<sup>78</sup> Art. 1797 C.C.- se llama acción redhibitoria la que tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio, por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados redhibitorios.

En el caso de que los primeros supuestos descritos en el Art. 1801 sean afirmados en juicio, de acuerdo al código adjetivo civil, correspondería al demandante probarlos, siendo muy difícil por no decir imposible emprender esta acción, considerando lo complejo y técnico del tema y la poca regulación y control existente.

Lo que significa que la acción redhibitoria tiene un alcancé mucho mayor al momento de la venta<sup>79</sup>, contrario a lo que se podría entender de la simple lectura del artículo 1798 arriba mencionado, e incluso el Art. 1779 C.C. establece que el vendedor está obligado a sanear al comprador todas las evicciones que tengan una causa anterior a la venta, salvo en cuanto se haya estipulado lo contrario.<sup>80</sup>

### **3.3 Vicios redhibitorios generados por violaciones a la legislación de defensa a las personas consumidoras.-**

**i) Definición de los vicios redhibitorios.-** Los vicios redhibitorios son defectos o irregularidades ocultas que se encuentran en la cosa materia del contrato de compraventa signado por las partes, que de conocerlo el comprador no lo hubiese celebrado el o hubiese pagado un muy inferior precio al que canceló cuando se celebró el mismo.

---

<sup>79</sup> Art. 1802 C.C.- Si la cosa ha perecido después de perfeccionado el contrato de venta, no por eso perderá el comprador el derecho que hubiera tenido a la rebaja del precio, aunque la cosa haya perecido en su poder o por su culpa

<sup>80</sup> Art. 1792 C.C.- La estipulación que exime al vendedor de la obligación de sanear la evicción, no le exime de la obligación de restituir el precio recibido.

Art.1799 C.C.- si se ha estipulado que el vendedor no está obligado al saneamiento por los vicios ocultos de la cosa, estará, sin embargo, obligado a sanear aquellos de que tuvo conocimiento y que no dio noticia al comprador.

Art. 1803 C.C.- Las partes pueden, por el contrato, hacer redhibitorios los vicios que naturalmente no lo son.

Art. 1782 C.C.- es nulo todo pacto en que se exima al vendedor del saneamiento de evicción, siempre que en ese pacto haya habido mala fe de parte suya.

De acuerdo con el Art. 1798 del Código Civil Sustantivo, deben confluir estas tres características para que los vicios redhibitorios sean considerados de tal calidad y son los siguientes:

- a. Haber existido al tiempo de la venta*
- b. Ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para su uso natural, o sólo sirva imperfectamente, de manera que sea de presumir que, conociéndolos el comprador, no la hubiere comprado, o la hubiese comprado a mucho menos precio*
- c. No haberlos manifestado el vendedor, y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio.*<sup>81</sup>

De esto colegimos que es requisito sine qua non para la consideración de un vicio redhibitorio el hecho de que deben haberse originado antes o concomitantemente a la celebración del contrato de compraventa, deben ser vicios graves que impliquen un perjuicio para el comprador por el hecho de no poder dar a la cosa su uso natural o si puede hacerlo, lo sea de manera imperfecta, que en conclusión el comprador conociendo ese defecto no hubiese comprado la cosa o hubiese pagado menos por ella y finalmente estos hechos tienen que ser desconocidos por el comprador por motivo no imputable a su negligencia, como puede ser el hecho de ser un artículo ajeno a su profesión, oficio o arte.

De manera general, los vicios redhibitorios se refieren a defectos de la cosa objeto del contrato de compraventa, sin embargo el Art. 1803 se refiere a que “*Las partes pueden, por*

---

<sup>81</sup> Art. 1798 del Código Civil del Ecuador. Parágrafo VIII Título XXII Libro IV “ DE LA COMPRAVENTA”. EDICIÓN DE LA CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Pág. 289

*el contrato, hacer redhibitorios los vicios que no lo son*”<sup>82</sup>. Lo cual implica que estos vicios se refieren a la relación jurídica que se origina a partir de la celebración de este contrato consensual o además pueden afectar a la sustancia de la cosa de manera tal que se enerve el objeto del contrato o la cosa en cuanto a su disposición, uso y goce.

**ii) Los vicios redhibitorios y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.** En la ley Orgánica de Defensa del Consumidor vigente a este momento nos encontramos con el Artículo 20, que de manera concordante con lo señalado en el Código Civil contiene sobre vicios ocultos que: *“El consumidor podrá optar por la rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios, cuando **la cosa** objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiere dado un menor precio por ella*”<sup>83</sup>. En el caso que nos atañe los automóviles, considerados como bienes de naturaleza durable, en los que debe incluirse la garantía de fábrica de manera obligatoria, el Art. 11 de este cuerpo normativo, establece en su último inciso que esta garantía debe individualizar las *“Condiciones en que ésta (Garantía) operará*”<sup>84</sup>, pero, en estos contratos no se dice de manera expresa que esta garantía se pierde por el hecho de hacer el mantenimiento regular en un lugar diferente del de la casa concesionaria y únicamente se hace conocer de este particular al comprador cuando se ha cometido el supuesto incumplimiento atribuible al usuario y por ende la

---

<sup>82</sup> Art. 1803. Código Civil.

<sup>83</sup> Art. 70 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Corporación de Estudios y Publicaciones. Pág. 7

<sup>84</sup> Íbid. Art. 11 Pág. 6

pérdida de la garantía se hace efectiva. En sí, la oscuridad de especificar estos vicios redhibitorios en los automóviles comprados es fácilmente demostrable, en primer lugar por lo señalado anteriormente y porque en el caso que esta cláusula se hubiere estipulado de manera expresa en el contrato, en la mayoría de casos, los usuarios no son expertos o tienen conocimientos básicos sobre mecánica y automovilismo, por lo que no pueden advertir que la obligatoriedad de los mantenimientos tiene relación con los defectos de fabricación o elaboración que pueden tener los vehículos, y por ello, como este conocimiento es más bien específico de determinados artes u oficios no puede imputarse negligencia grave a los consumidores por ignorarlos. Ahora, respecto del hecho que el vicio redhibitorio reporte gravedad en el sentido en el que el bien no se hubiese adquirido de conocerlo o haber pagado un precio menor, son dos ópticas por las cuales se cumple este requisito para el caso atinente a la presente investigación. En primer lugar, recordemos que en este caso se está configurando de manera sesgada una venta condicionada, por la que se está condicionando la venta a la utilización de un servicio que no desea contratar ni que es directamente relacionado con el objeto a venderse, ya que la garantía de fábrica implica nada más el aseguramiento que tiene el comprador de que se repare el objeto comprado en el caso que este sea defectuoso o inservible. Si desnaturalizamos la esencia de esta garantía estamos vaciando el contenido de la misma y se está incumpliendo lo previsto en el Art. 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, que es uno de los requisitos obligatorios que debe contener este tipo de contratos, así finalmente se producen vicios redhibitorios que están siendo generados por evento del contrato, tal como prevé el Art. 1803 del Código Civil.

En cuanto al asunto de la temporalidad en que sobrevienen estos vicios redhibitorios vemos que claramente se generan de manera general al momento en que se celebra el contrato.

**iii) Acción Redhibitoria y Jurisprudencia.-** Finalmente, podemos ver que los vicios redhibitorios contenidos en los vehículos generan las llamadas Acciones redhibitorias, que en palabras del Art. 1797 del C.C. es aquella que *“Tiene el comprador para que se rescinda la venta o se rebaje proporcionalmente el precio, por los vicios ocultos de la cosa vendida, raíz o mueble, llamados Redhibitorios”*. La Acción Redhibitoria puede ser de dos clases: La una de carácter rescisoria, con el fin de que se declare la nulidad del contrato y la correspondiente indemnización de perjuicios o de no ser tan graves los vicios redhibitorios respecto de la cosa, se procede a la rebaja del precio pactado y la correspondiente indemnización de perjuicios provocados por la venta viciosa. En el caso que nos atañe, la acción civil buscaría sanear la parte defectuosa del vehículo sin contar con la garantía de fabricación que fue tácitamente acordada y perseguiría además la reparación de perjuicios generados a partir de este acto dañoso. La acción rescisoria tiene una prescripción de seis meses de duración en el caso de que se trate de bienes muebles y el período de un año en el caso de los bienes inmuebles. En todo caso, de acuerdo a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Art. 31 en su inciso final establece que el tiempo para presentar la respectiva acción civil se amplía al tiempo de duración de la garantía si esta es superior al período de un año, lo cual da más tiempo al consumidor para ejercer el derecho de acción ante estas circunstancias.

### 3.4 Conclusiones y recomendaciones:

Los vicios redhibitorios que puedan tener los vehículos están directamente relacionados con las llamadas garantías de fábrica, ya que tal como hemos insistido a lo largo de este trabajo estas “garantías” deben ser reconocidas por los talleres y concesionarios que vendieron el bien indistintamente al hecho de haberlos llevado de manera continua e ininterrumpida a realizar todos sus mantenimientos a sus talleres, pues la ley es clara en todo su articulado<sup>85</sup>, y como hemos analizado la responsabilidad que tiene el vendedor no se refiere únicamente al momento de la venta ni a los vicios redhibitorios de los cuales el vendedor podría tener conocimiento sino a la generalidad de casos en los que existieran defectos, daños, averías, y problemas del bien, incluso los causados por el mismo comprador posterior a la venta del bien, tal como lo manifiesta el artículo 1802 del código sustantivo civil.

En el caso de los vicios redhibitorios cualquiera fueren las circunstancias, o que incluso exista algún tipo de estipulación referente a la obligación o no de sanear el vicio que adolezca el bien, el vendedor estará obligado en último caso a la restitución del precio recibido o del porcentaje que debió haber tenido de rebaja<sup>86</sup>.

Ahora bien, si pensamos que la legislación civil existente precautela de manera clara y fácil los derechos de los compradores de bienes, pues estamos lejos de lo correcto puesto que si examinamos el Art. 192 del Código de Comercio encontraremos que: “Entregadas las mercaderías vendidas al comprador, éste no será oído en las reclamaciones sobre

---

<sup>85</sup> Art. 191 C.Co.- El vendedor está obligado a sanear las mercaderías vendidas y a responder de los vicios ocultos que contengan, conforme a las reglas establecidas por el Código Civil, en el Título “De la Compraventa”

<sup>86</sup> Art. 1800 C.C.- Los vicios redhibitorios dan derecho al comprador para exigir o a la rescisión de la venta o la rebaja del precio, según mejor le pareciere



defecto de calidad o falta de cantidad, siempre que las hubiera examinado al tiempo de la entrega y recibido sin reserva.”

Que, cuando las mercaderías fueren entregadas en fardos o bajo cubierta que impidan su reconocimiento, y el comprador hiciere formal y expresa reserva de reclamación , podrá reclamar en los ocho días inmediatos al de la entrega las faltas de cantidad o defectos de calidad, acreditando, en el primer caso, que los cabos de las piezas se encuentran intactos, y en el segundo que las averías o defectos son de tal especie que no han podido ocurrir en sus almacenes por caso fortuito, ni ser causados dolosamente sin que aparecieren vestigios de fraude.

Y, que; el vendedor puede exigir en el acto de la entrega que se haga el reconocimiento integro en calidad y cantidad, y en este caso no habrá lugar a reclamación después de entregadas las mercaderías.

Tenemos como resultado que en la práctica el momento en que el comprador está retirando su vehículo nuevo, de las instalaciones donde se encuentra, este tiene 8 días para hacer cualquier reclamo caso contrario no tendrá la mínima posibilidad de solicitar reparación alguna y mucho menos restitución de cualquier tipo, convirtiendo de esta manera a las “garantías de fábrica” de los vehículos, en un jugoso negocio en el cual quienes se encuentran en posición de desventaja serán los compradores y clientes que deben sujetarse a injustos contratos de adhesión, abusivas e ineficientes imposiciones e instancias y recursos nada oportunos con los cuales puedan hacer efectivos sus derechos.

Si a lo mencionado añadimos los incisos segundo y tercero y del Art. 191 C.Co. que manifiestan:

- que la acción redhibitoria prescribe en seis meses, contados desde el día de la entrega real, para las mercaderías despachadas al extranjero, prescribe en un año; y,
- que la existencia de los vicios ocultos se prueba por los medios admitidos en el lugar a que han sido destinadas las mercaderías vendidas.

Tenemos pues como resultado, que el tiempo que muy gentilmente ofrecen los concesionarios vendedores de vehículos nuevos sea de 4, 5 o 6 años, o los miles de kilómetros que limitan la vigencia de la “garantía de fábrica” en la práctica será reconocida en base a criterios desconocidos, los cuales están sujetos a consideraciones e intereses privados, y donde para colmo quien da el veredicto final es juez y parte, pues es la misma empresa concesionaria quien analiza la pertinencia de conceder o no una garantía de fábrica.

## CAPITULO 4

### La garantía del vehículo contra fallas de fábrica

#### 4.1 Naturaleza jurídica de la garantía

De manera cotidiana las personas nos referimos al término garantía para significativamente “algo” que asegura el cumplimiento una obligación, o como la existencia de “algo” que nos permite estar tranquilos en caso de que la cosa adquirida llegase a fallar, pues resulta común escuchar o leer expresiones como “garantizado!!!”; “con garantía!!!”; “garantía de 5 años o 100.000 Km.!!!”; “sin garante”; etc.

El diccionario define al vocablo *garantía* así: Cosa que asegura y protege contra algún riesgo, derecho que la constitución de un estado reconoce a los ciudadanos<sup>87</sup>; afianzamiento. Fianza. Prenda. Caución. Cosa dada en garantía. Seguridad o protección frente a un peligro o contra un riesgo. *Garantías constitucionales o individuales*: conjunto de declaraciones, medios y recursos con que los textos constitucionales aseguran a todos los individuos o ciudadanos el disfrute y ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que se les reconocen. *Garantizar*: dar una garantía material o moral; afianzar el cumplimiento de lo estipulado o la observancia de una obligación o promesa.<sup>88</sup>

Las garantías constitucionales o individuales en general, no han existido siempre y es debido a la vulnerabilidad y violencia a la que estamos expuestos día a día de manera directa todos los seres humanos del planeta o indirecta a través de nuestros bienes o

---

<sup>87</sup> Diccionario Enciclopédico OCEANO UNO, edición 2004

<sup>88</sup> Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental. Argentina. Editorial Heliasta. Decimosexta edición, Pág. 178

derechos, que se ha visto la imperiosa necesidad de precautelar de forma anticipada los posibles abusos que puedan existir, para que a sabiendas de que estos no van a dejar de suceder, las personas posean herramientas constitucionales encaminadas a defender el libre ejercicio y goce de sus derechos.

No se trata tan sólo de estructurar jurídicamente al Estado ni tampoco de legitimarle a través del Derecho; la concepción que se impone a partir del siglo XVII es la de implementar en el Estado un orden jurídico que, reconociendo los derechos inherentes a la persona, establezca un régimen de garantías para los gobernados; un orden jurídico que haga realidad los valores básicos de libertad, justicia y democracia.

La última Constitución de la República del Ecuador, en su Art.84 establece que la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para **garantizar** la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

Por lo mencionado podemos resumir que todo el ordenamiento jurídico debe estar encaminado a asegurar la efectiva vigencia de todos los derechos otorgados a las personas. Siendo por todas las razones expuestas el deber y objetivo primordial del estado y sus gobiernos el implementar y trabajar por institucionalizar en cada una de las entidades, sean públicas o privadas, herramientas y mecanismos destinados a hacer efectivos los reclamos,

quejas y denuncias de sus gobernados, y en el caso que nos compete los usuarios, consumidores, clientes y compradores de los distintos bienes y servicios que se ofertan en el Ecuador.

El análisis puntual de esta tesina nos llevará a determinar si la obligación impuesta por las casas comerciales automotrices de realizar todo tipo de mantenimiento únicamente en sus talleres sopena de perder la garantía de fábrica que tienen los vehículos cero kilómetros es una buena y legal práctica comercial, o si esta se desarrolla de manera que perjudica los derechos de los consumidores y en particular de los compradores de vehículos automotrices.

Finalmente podemos decir que las garantías son aquellos mecanismos jurídicos a través de los cuales se deben proteger los derechos, estas garantías o mecanismos de protección de los derechos y libertades implican el ejercicio de acciones o recursos procesales que se caracterizan por su celeridad, por estar provistos de formalismos no rigurosos y de resultados pronto. Pues si se han desarrollado, especialmente en cuanto a derechos fundamentales, instituciones como el Habeas Corpus o el Habeas Data; en lo referente a los derechos económicos y sociales se debe trabajar mucho con el objetivo de instituir mecanismos destinados a salvaguardar atropellos económicos y patrimoniales.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> En la actualidad como veremos en el último capítulo de este trabajo, los mecanismos de protección existentes para los casos patrimoniales son procesos contenciosos jurisdiccionales, largos y llenos de trámites, por lo que quienes se sienten afectados no emprenden ninguna acción al respecto, dando paso en muchos a casos de abusos e impunidad.

## 4.2 Análisis jurídico sobre las garantías de fábrica.-

Para enmarcar el estudio de las garantías de fábrica, especialmente de los vehículos, en un estudio que evidencie las realidades prácticas existentes, debemos considerarlas dentro del concepto de cosa futura y por lo tanto aleatoria.

Este análisis está encaminado a determinar cómo a raíz de la celebración de un contrato de compraventa puede una persona terminar ligado a una obligación posterior y accesoria la cual no nace de la voluntad del comprador y cuya causa no es clara. En este sentido el contrato de compraventa del vehículo, común y simple, no termina como un contrato oneroso conmutativo, ya que el comprador adquiere una obligación accesoria que provoca que la garantía de fábrica que da el vendedor sobre el producto que se incluyó en el precio dependa del cumplimiento de tal obligación.

Una garantía de fábrica consiste de manera general en el “seguro” o determinación que una persona tiene para reclamar, hacer respetar y valer sus derechos cuando el producto adquirido adoleciere de alguna falla. En el caso de los automotores, consiste o al menos debería ser así, en la asistencia técnica especializada encaminada a resolver un problema, componer el daño, o reemplazar un repuesto defectuoso<sup>90</sup>. Recordemos que tal como lo señala su nombre y naturaleza, una garantía de fábrica tiene su razón de existir para que

---

<sup>90</sup> **Defecto o fallas de fábrica:** son todos aquellos problemas, molestias, inconvenientes, descompuestos, daños, faltantes, desajustes, golpeteos, sonidos, e imperfectos, causados ya sea por el o los fabricantes del producto al momento de su construcción, diseño, o producción, o por quienes lo transportan, comercializan y/o manipulan, anterior a la entrega del bien al primer dueño, defectos que impiden, molestan o interfieren en el correcto manejo y funcionamiento de un determinado producto.

ante una eventualidad producida como resultado de una falla en cualquiera de las etapas o procesos de fabricación del bien, quien lo comercializa o vende al destinatario final, se haga responsable, enmiende y reconozca los daños o contratiempos causados, es decir indemnice de forma racional y proporcionada al afectado que no es el bien obviamente sino su propietario. Por lo tanto, la garantía de fábrica puede entenderse como una especie de seguro.

Así, el Art. 2163 C.C. enlista aunque no de manera taxativa los principales contratos aleatorios, entre estos el *contrato de seguro*, que conforme a lo que establece el Art. 722.1 del Código de Comercio, es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el contrato.

Con fines pedagógicos, aunque jurídicamente no son lo mismo, asemejaremos el caso de las garantías de fábrica al de los seguros. Así podríamos asumir que en lugar del pago de prima al que se refiere el Art.722.1 C.Co., el comprador del vehículo se obliga a llevar continua e ininterrumpidamente a realizar todos los mantenimientos al concesionario donde se compró el vehículo, para que a manera de contraprestación efectivizar la garantía de fábrica dentro de “los límites convenidos” límites que en la práctica no se establecen ya que en la mayoría de los casos el contrato de compraventa del vehículo se lo celebra de manera verbal, pues el único documento que respalda esta transacción es la factura respectiva, convirtiendo a este negocio en un acto puro y simple, tan común como comprar una pelota.

La cuestión se complica más porque para que exista algún tipo de relación jurídica parecida a la de los seguros se debe firmar un contrato en el cual se definan claramente los supuestos y condiciones que darían lugar al pago de la indemnización<sup>91</sup>, así mismo se debe fijar quien es el asegurador y quien el asegurado, y además los montos hasta los cuales los daños estarían cubiertos, de manera que sin lugar a dudas las partes saben exactamente a qué atenerse.

A lo anteriormente mencionado debemos agregar que incluso en el caso de que estos documentos fueran celebrados para tratar de asimilar a la garantía de fábrica a un contrato de seguro este no tendría ninguna validez debido a que únicamente solo las personas registradas, inscritas y constituidas con este propósito ante y en la Superintendencia de Bancos y Seguros<sup>92</sup> son las competentes en el Ecuador para llevar a cabo este tipo de negocio, esto porque las compañías aseguradoras y reaseguradoras componen también o más bien dicho son parte de las Instituciones del Sistema Financiero.

Una vez descartada la posibilidad de asimilar a la garantía de fábrica como un contrato de seguro, pasemos a analizar si este tipo de garantía se podría encajar en el Art. 1752 C.C. que se refiere a la venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, y que se entenderá hecha bajo la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato aparezca que se compró suerte. Si una garantía cuya ejecución no

---

<sup>91</sup> Art. 1572 C.C.- La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y el lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.

<sup>92</sup> Reg-LGISFin Art.1.- La Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento, y extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y funciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros, entidad encargada de la supervisión y control del sistema financiero en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del público.



es claramente definida ya que las condiciones para que ello se dé no son claras y porque la cobertura de la misma no está determinada, se puede entender como comprar algo que no existe, pero que se espera que exista, puesto que la expectativa de que exista algo que no tiene control ni regulación y que se encuentra sujeta a la potestad y criterio de quien ofrece la misma, no brinda ninguna seguridad, ya que quien reconoce o no las garantías son los mismos concesionarios y por lo tanto son juez y parte, pues si tomamos en cuenta solamente a la garantía de fábrica mal se podría estar comprando suerte, pero esta figura no podría ser aplicada porque el objeto del contrato de compraventa al que nos referimos es el vehículo y no la garantía.

El Art. 1753 C.C. y el Art.182<sup>93</sup> C.Co., Claramente expresan que la venta de una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no surte efecto alguno. Ejemplificando lo mencionado en el caso que nos compete, diremos que la venta de una “garantía” que se debe entregar permanentemente al comprador del vehículo nuevo, no debería estar sujeta a condición alguna, por lo que la “obligación” que adquiere el comprador de hacer los mantenimientos en los talleres fijados por el vendedor no debe surtir efecto alguno.

Ahora bien, el Art. 1477 C.C. establece que no sólo las cosas que existen pueden ser objeto de una declaración de voluntad sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciales, y que estén determinadas, a lo menos en cuanto a su género. Regresando pues al punto de partida, en ningún momento previa a la celebración

---

<sup>93</sup> Art. 182 C.Co. Inc. 2.- Pero si tal compra fuere hecha tomando en cuenta los riesgos que corre el objeto vendido, el contrato se reputara puro, si al celebrarlo ignoraba el vendedor la pérdida de este objeto.

del contrato de compraventa o como parte de este, se establecen los términos y cláusulas que trazarían la cancha en donde se desarrollaría la relación bilateral del uso y administración de las garantías, de esta manera el término garantía a pesar de que las partes tienen claro en qué consiste no debería significar nada adicional para el comprador dada la generalidad con la que se trata<sup>94</sup>.

Finalmente analicemos el caso de los errores que se manifiestan en los contratos de compraventa de vehículos que hemos venido revisando y la implícita “garantía” que los mismos llevan. De esta manera el Art. 1469 C.C. prescribe que el error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito, y la otra donación, o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si, en el contrato de venta, el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra. Insistiendo en que debe haber claridad del tipo de contrato que se está celebrando y sobretodo el objeto que este instrumento persigue, especialmente si cada una de las partes intervinientes buscan con el contrato celebrado un interés distinto al querido siendo afectado directamente el acuerdo de voluntades en referencia a lo que se está contratando.

Según nuestra Constitución,<sup>95</sup> absolutamente todas las personas podemos adquirir y ofrecer de manera libre y voluntaria todos los bienes y servicios que deseemos contratar, mientras

---

<sup>94</sup> Art.1524 C.C.- Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado.

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público.

<sup>95</sup> Constitución de la República del Ecuador, Capítulo Tercero, Sección Novena, Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los

estos se acojan al orden público, las buenas costumbres y la ley, de tal manera que quien deba dar la calidad de taller autorizado al que se quiere llevar al vehículo, no debe ser la empresa que comercializa los vehículos nuevos, sino las personas o clientes que confían en el servicio o profesionalidad con que trabaja el taller de su preferencia, pues quien debe elegir y autorizar en última instancia dónde, quién, qué o cómo se realice determinados trabajos a sus vehículos, tales como mantenimientos, arreglos y composturas, preventivos o de diagnóstico, del bien que es de propiedad y a quien finalmente interesa, son los mismos propietarios. Otra cosa muy distinta es que unos sean talleres reconocidos, afiliados, registrados o avalados incluso por el o los concesionarios respectivos y otra muy diferente que estos estén o no autorizados para prestar el servicio.

Así mismo, como una persona confía plenamente en el servicio y profesionalidad de un determinado taller este debe responder al trabajo que ofrece otorgando una garantía incondicional de los trabajos que se realizan, de manera tal que no se debe confundir una garantía de fábrica de un bien nuevo que se adquiere contra eventuales desperfectos que se puedan suscitar, con la garantía pura y directa sobre el trabajo que se está realizando al prestar cualquier servicio.

Por otro lado, debemos tener claro que la garantía de fábrica de cualquier producto no puede estar sujeta o condicionada a un tiempo de uso o a una distancia recorrida, puesto que tal como su nombre lo indica se trata de desperfectos producidos a consecuencia de un error en el proceso de fabricación, en los materiales que fueron utilizados como materia

---

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.

prima y que no responden a las prestaciones para las cuales el artículo fue construido, o finalmente a un error en el diseño técnico y/o aerodinámico del producto.

Cabe transcribir una parte de los considerandos que expone España, los cuales motivan la expedición de una ley que regula justamente el tema de las garantías a las que nos hemos referido a lo largo de este trabajo: “La ley, de acuerdo con la directiva de la que trae causa, contiene dos aspectos esenciales que se refieren, por una parte, al marco legal de la garantía en relación con los derechos reconocidos por la propia ley para garantizar la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa; y, por otra, articular la garantía comercial que, adicionalmente, pueda ofrecerse al consumidor. El marco legal de garantía tiene por objeto facilitar al consumidor distintas opciones para exigir el saneamiento cuando el bien adquirido no sea conforme con el contrato, dándole la opción de exigir la reparación por la sustitución del bien, salvo que ésta resulte imposible o desproporcionada. Cuando la reparación o la sustitución no fueran posibles o resulten infructuosas, el consumidor podrá exigir la rebaja del precio o la resolución del contrato. Se reconoce un plazo de dos años, a partir del momento de compra para que el consumidor pueda hacer efectivos estos derechos (en el caso de bienes de segunda mano se podrá pactar un plazo menor no inferior a un año) y un plazo de tres años, también contado a partir del momento de la compra, para que pueda ejercitar, en su caso, las acciones legales oportunas.

Por lo que se refiere a la garantía comercial ofrecida por el vendedor o por el productor del bien debe poner al consumidor en una posición más ventajosa en relación con los derechos ya concedidos a los consumidores por esta ley. Toda garantía comercial debe figurar en un documento escrito en el que se establezcan, de manera clara, los elementos esenciales

necesarios para su aplicación. La publicidad relativa a la garantía se considera que forma parte integrante de las condiciones de ésta.

En conclusión, las acciones de reparación y sustitución del bien vendido, de rebaja de su precio y de resolución de la compraventa previstas en esta ley sustituyen, en el ámbito de las compraventas de bienes de consumo, a las acciones redhibitoria y quanti minoris derivadas del saneamiento por vicios ocultos, y dejan a salvo las acciones indemnizatorias que asisten a los compradores.”<sup>96</sup>

#### **4.2.1 Partes Obligadas:**

Como ya lo hemos mencionado anteriormente en este trabajo, al celebrarse un negocio cualquiera, por ejemplo, un contrato de compraventa, el ordenamiento jurídico tiene en cuenta no solo su fenomenología sino que mira también como relevante la intención o propósito del actor o actores, en este sentido debemos considerar la intención última que motiva a cada una de las partes a realizar el negocio jurídico, así tomando en cuenta el antecedente de las garantías de fábrica, el comprador decide adquirir un vehículo como tal, es decir, escogiéndolo según sus necesidades, gustos y posibilidades, considerando a la garantía de fábrica que se ofrece, como un valor agregado que respalden su compra, mientras que el vendedor enajena el bien para que además de la ganancia respectiva producto de la venta del vehículo, el comprador del vehículo se ligue además de manera posterior a su taller, lo cual le genera más ganancia.

El último inciso del artículo 1483 del Código Civil indica textualmente que la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en

---

<sup>96</sup> Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo.

recompensa de un delito o de un hecho inmoral, tiene una causa ilícita. En este sentido el comprador que cree que a cambio de llevar siempre su vehículo a un determinado taller automotriz para que dado el caso pueda recibir una garantía que no está claramente definida, está tratando de cumplir con una deuda que no existe, y al carecer de causa real nunca existió obligación alguna. De forma tal que inicialmente ninguna de las dos partes se encontraría, en estricto uso del artículo mencionado, obligada a cumplir, ni el comprador con llevar su carro siempre al “taller autorizado” ni el vendedor con la reparación de alguna falla que el bien podría presentar. El problema es que el vendedor está obligado legal y constitucionalmente a hacerlo.

#### **4.3 Garantía de la garantía**

En la Constitución de la República del Ecuador en su sección novena, artículos del 52 al 55, sobre las personas usuarias y consumidoras, se desarrollan cuestiones de vital importancia para el análisis del tema que nos atañe, pues se establecen las directrices nacionales que deben contextualizar y enmarcar el manejo y control de las garantías de fábrica de los vehículos, y en general de todos los bienes y servicios que se ofrecen y demandan.

Primeramente se asegura la libertad a elegir bienes y servicios de óptima calidad, así como el derecho de todas las personas a acceder a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características, tema que lo hemos revisado anteriormente y contradice indudablemente la realidad que viven los propietarios de vehículos nuevos que se sienten obligados a llevar sus autos a los concesionarios para realizar cualquier chequeo o mantenimiento donde son objeto de muchos abusos.

Nuestra Constitución impone lastimosamente tan solo a las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos, la obligación de incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. Esta obligación debería ser dirigida también a las empresas del sector privado, al menos aquellas cuyas carteras de clientes son numerosas, pudiendo para este efecto utilizarse el registro de contribuyentes especiales.

También se establece el derecho de todas las personas usuarias y consumidoras de constituir asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales y administrativas. En este sentido el Estado tiene la responsabilidad de difundir y estimular a la ciudadanía a hacer efectivo este precepto constitucional, es decir, el gobierno debe organizar y planificar la asociación, la promoción de información y educar a las personas para que estas hagan respetar sus derechos en la mayor cantidad de ámbitos e industrias.

#### **4.4 Conclusiones y recomendaciones**

Lo que se propone esta tesis es iniciar el estudio del tema de las garantías de fábrica, que en este caso hemos dirigido a la de los vehículos automotores, donde es más notable, pero debe preocupar al derecho y a los gobiernos cómo se están desarrollando estos temas, quién los regula, quién los controla, quién lo evalúa, ya que tenemos el mismo caso en electrodomésticos, celulares, equipos tecnológicos, herramientas, y así mismo, preocuparse como se desarrolla la calidad en los servicios, entendiendo claro que en estos casos el

propio mercado los regulariza de alguna forma, pues cuando el servicio es malo resulta más fácil prescindir por ejemplo de un restaurante u hotel e ir a otros.

El estado debe proponerse plantear variables que permitan establecer indicadores sobre la realidad práctica que existe sobre el uso y servicio de las garantías de fábrica, de manera que permitan medir cómo se desarrollan y así se eviten y controlen los abusos tanto contra los propietarios de vehículos como para talleres que a pesar de no tener relación con los concesionarios prestan también estos servicios y forman parte de la industria automotriz.

Respecto a la eventual aleatoriedad de los contratos a la que nos referimos anteriormente, debemos insistir en aclarar que al tratarse de contratos de compraventa de vehículos, no cabe esta figura, pues el bien como tal se lo entrega al comprador. Es la garantía de fábrica propiamente, sobre la que discutimos y dudamos de su naturaleza, ya que respecto de esta no se celebra ningún contrato o documento que la defina e instituya expresamente pero de una u otra manera está presente en la relación contractual y negocio jurídico que se llega a celebrar.

Por otro lado, es de vital importancia se controle, norme y regularice este tema, puesto que la tendencia existente a que las personas lleguen a ser propietarias de vehículos es cada vez más alta, y de hecho en muchos de los casos, el llegar a tener un vehículo nuevo constituye un factor de autorrealización de las personas, por lo que debemos tener muy presente a la industria automotriz y a todos los aspectos que este sector involucra en el país. En este sentido, desde el 2003, España pone en vigencia la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, que establece un conjunto de medidas tendentes a garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores en el marco del mercado interior en todos y



cada uno de los Estados miembros. Para ello introduce el principio de conformidad de los bienes con el contrato, aplicable a los supuestos de contratos de compraventa de bienes de consumo celebrados entre el vendedor y el consumidor. Las disposiciones de esta Ley poseen carácter imperativo de modo que no cabe pactar cláusulas que excluyan o limiten los derechos conferidos al consumidor. En consecuencia, esta ley otorga este carácter imperativo a todos los derechos reconocidos en la misma.<sup>97</sup>

Finalmente se debe repensar la denominación “garantía de fábrica” pues esta en la práctica no es tal, ya que responde a una condición impuesta por los vendedores de vehículos nuevos mas no a un hecho basado en un acuerdo o norma legal, así también el Art.1746 C.C. prescribe que la venta puede ser pura y simple, o bajo condición suspensiva o resolutoria, puede hacerse a plazo para la entrega de la cosa o del precio; o, puede tener por objeto dos o más cosas alternativas. El tema de fondo es que se defina de manera clara que obligaciones y derechos determinados y concretos nacen de la celebración de este tipo de contratos. Pues en España existe la Ley de Garantías en la venta de bienes de consumo en la cual se establecen una serie de regulaciones mínimas indispensables sobre las cuales se debe desenvolver la relación “compra – venta”, en esta Ley se prevé incluso a las “garantías comerciales” que no son otra cosa más que cualquier garantía adicional que se publicite, ofrezca o brinde un valor agregado al consumidor o comprador y que vincula directamente al vendedor en calidad de garante con el comprador en calidad de asegurado.

---

<sup>97</sup> Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo. España.

## CAPITULO 5

En todas las áreas que integran la industria automotriz existe una de suma importancia para el desarrollo de esta tesis, y que es la posición que adoptan las empresas automotrices frente a la posible presencia, o denuncia de defectos en sus productos. Directamente relacionado a este punto, esta la posición que han tomado los Estados para asegurar y precautelar los derechos de sus ciudadanos; en este sentido es pertinente finalizar este trabajo, revisando las diferentes opciones, vías y recursos jurisdiccionales y legales a través de los cuales las personas pueden ejercer su derecho de acción encaminado a reclamar y resarcirse los daños causados.

**5.1 Problemas frecuentes que se presentan en el uso y ejecución de la garantía en la práctica según ejemplos obtenidos.-** Después de hacer una búsqueda de jurisprudencia local relacionada con el tema de la garantía de los vehículos en el Ecuador, y a pesar de no haber podido encontrar una que se enmarque en el caso, fue ubicado un artículo editorial subido en la página web del Diario EL UNIVERSO en el que un usuario se queja de varios problemas contenidos en la garantía de su vehículo, que son los siguientes:

### **5.1.1 Demora en la entrega del vehículo reparado en caso de que presente un daño:**

De acuerdo a lo que indica el usuario Mauricio Narváez Álvarez, por el arreglo que le tocó hacer de su el vehículo, la concesionaria demoró dos semanas en entregarlo reparado, lo cual es totalmente exagerado para ese desperfecto.

- 5.1.2 **Reparaciones inefectivas o defectuosas:** El usuario afirmó que después de que le entregaron el vehículo aparentemente reparado, realizó un viaje al sur del país con su familia, y que el automóvil se averió tremendamente en la ciudad de Machala, quedándose varado con su familia en esta ciudad.
- 5.1.3 **El usuario tuvo que pagar el transporte del vehículo para el concesionario:** La casa automotriz había ofrecido de palabra costear el transporte del vehículo defectuoso de Machala a la concesionaria de Guayaquil, cosa que no cumplió.
- 5.1.4 **No existe cobertura del concesionario donde se compró el vehículo con el de la misma compañía en otra ciudad:** En principio la casa automotriz de la sucursal de Guayaquil no quiso admitir la llegada del vehículo como parte de la garantía y le dijeron en primera instancia que tenía que viajar a Quito para hacerla efectiva.
- 5.1.5 **Demora en aplicación de la garantía:** La del concesionario. Arguyendo cuestiones de documentación presentaron trabas para poder ejecutar la garantía del vehículo.
- 5.1.6 **Mal trato al usuario:** El usuario de este caso fue tratado con descortesía por parte de la gente del taller de mantenimiento de la concesionaria<sup>98</sup>

Después de analizar este caso, es necesario hacer una comparación con lo que sucede en otras latitudes del planeta. Para ello vamos a tomar un artículo de prensa de España en el

---

<sup>98</sup> **Mauricio Narváez Álvarez,** Carros nuevos y garantías **Quito. Hallado en** <http://www.eluniverso.com/2011/02/21/1/1366/carros-nuevos-garantias.html> Último acceso: 22/03/2011

que se señala sobre el cumplimiento de las normas en las garantías de vehículos, del cual se pueden extraer las siguientes conclusiones:

- La Directora General de Consumo de la Comunidad Autónoma de Madrid realizó un informe sobre el cumplimiento de las garantías comerciales de los vehículos y encontró que en el 19% de los casos se encontraron irregularidades. Es importante señalar que en ese país, a diferencia del nuestro, sí se hacen controles respecto al cumplimiento de las normas jurídicas que rigen a ese tipo de contratos, lo que indica que hay mayor cultura en cuanto a derechos de consumo.
- *“Se inspeccionaron 86 establecimientos de venta de vehículos **nuevos**, cuyas **irregularidades más significativas** son las relativas a los **precios** (31,39%) y el **aplazamiento de pago con porcentajes** (23,52%), convirtiéndose la inclusión de **cláusulas abusivas** en el modelo de solicitud o contrato de compraventa, en la infracción más frecuente. Además el **19,11% de las garantías comerciales adicionales** ofrecidas por los establecimientos inspeccionados incumplen la normativa de Consumo<sup>99</sup>.*
- En España encontramos que se diferencia claramente el concepto de la garantía legal con la garantía comercial de los vehículos. La garantía legal viene a ser la que se debe dar de fábrica y que implica todo lo que tiene que ver con los defectos de fabricación del vehículo. En cambio, la garantía comercial se compone de todo lo que es adicional a esta garantía de fábrica que está guiada por la ley de consumo. La garantía comercial se rige por las normas que establezca la concesionaria y a las

---

<sup>99</sup> Redacción autoprofesional.com El 19% de las extensiones de garantía en vehículos nuevos incumple la normativa. Hallado en [http://www.autoprofesional.com/noticias/detalle\\_noticia/\\_/asset\\_publisher/1Oqw/content/el-19-de-las-extensiones-de-garantia-en-vehiculos-nuevos-incumple-la-normativa](http://www.autoprofesional.com/noticias/detalle_noticia/_/asset_publisher/1Oqw/content/el-19-de-las-extensiones-de-garantia-en-vehiculos-nuevos-incumple-la-normativa)

cuales el comprador del vehículo debe tener que adherirse. Esto es importante en el sentido que en el caso de la garantía comercial se puede verificar otros aspectos como el de publicidad engañosa o abusiva que no entra directamente en el objeto de nuestro estudio.

## **5.2 Alternativas del comprador - proceso y procedimientos a seguir:**

Habiendo ya analizado el problema jurídico que atañe al fenómeno que ha sido objeto de estudio de la presente disertación, es necesario señalar los medios a través de los cuales pueden hacerse efectivos los derechos de las personas usuarias de estos servicios y además, garantizar que se establezca una justa composición en cuanto a la relación jurídica entre los proveedores de vehículos y servicios afines con los compradores y usuarios de los mismos. Es menester, antes de empezar con la descripción detallada de los diferentes mecanismos de tutela que surgen de esta situación jurídica, el señalar que de un determinado tipo de acto surgen varios efectos que pueden generar responsabilidades de diversa naturaleza, y además se pueden generar conductas que se subsumen en distintos ámbitos del derecho. En el marco de protección de los derechos existe una amplia gama que permite otorgar una tutela suficiente sobre los derechos. De acuerdo con la doctrina internacional, existen los principios de “Concurrencia o Pro Consumidor” y el de protección absoluta, que en palabras del Doctor Víctor Cevallos *“Se aplica cuando existiendo varias normas de carácter general y otras especies en defensa del consumidor, se deberán tomar en cuenta las que más benefician al consumidor, sean éstas de carácter general o especial”*<sup>100</sup> Esto implica básicamente que se aplique la norma que de mejor manera beneficie al consumidor sin importar si esta sea general o especial. Además debemos considerar que algunas

---

<sup>100</sup> Cevallos. Op. Cit. Pág. 115

acciones pueden ser complementarias, por lo que se pueden seguir simultáneamente sin que una afecte a la otra.

Para este análisis, y percibiendo los distintos puntos de vista de esta problemática que nos ocupa, analizaremos las acciones de la siguiente manera.

**5.3 Acciones de garantías constitucionales.-** De acuerdo con nuestra Constitución, se han constitucionalizado los derechos de las personas usuarias y consumidoras como grupo de atención prioritaria desde el art. 52 a 55 de nuestra carta magna. Estos derechos son parte y forman un todo con el capítulo referente a las garantías jurisdiccionales en el que se hace referencia a que éstas tienen como finalidad el tutelar de manera efectiva los derechos previstos en la Constitución. La instrumentalización de estos procedimientos se encuentran previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de los cuales son dos los que podemos referir como pertinentes para el caso que nos atañe y estos son el procedimiento de medidas cautelares y el de la acción de protección.

**5.3.1 Medidas Cautelares:** Este es el procedimiento más sencillo que se encuentra previsto en la LOGJCC, de acuerdo al Art. 26 de este cuerpo normativo éstas tienen por objeto “*Evitar o cesar la violación de los derechos reconocidos en la Constitución y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos*”<sup>101</sup>. Del texto citado podemos colegir que este procedimiento podría aplicarse en el caso de que la casa automotriz estuviere a punto de cancelar la garantía o inmediatamente después de que se registre este hecho con el fin de suspender el mismo y asegurar

---

<sup>101</sup> Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Art. 26

de esa manera el procedimiento de acción de protección a seguirse para lograr una reparación definitiva e integral del daño producido. En cuanto a los requisitos de procedibilidad se encuentran previstos en el Art. 27 de la LOGJCC que establece que *“Las medidas procederán cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho por parte de cualquier persona que amenace de modo inminente y grave con violar un derecho o viole un derecho”*<sup>102</sup> De esto podemos colegir que el hecho tiene que atentar inminente y gravemente contra el derecho del comprador. Ahora, debemos analizar que la misma ley califica cuándo reviste el hecho de gravedad y esta gravedad se configura *“cuando puede ocasionar daños irreversibles o por la intensidad o frecuencia de la violación”*<sup>103</sup> Vale la pena afirmar que en el caso que nos atañe se podría interpretar que se trata de una violación de gran intensidad porque la cancelación de la garantía deja en completa indefensión al comprador y atenta contra su seguridad personal y familiar por lo que verificamos de nuevo la procedencia de la acción.

Es menester referir que esta acción no se puede seguir si se sigue la acción ordinaria o demás procedimientos que encontramos en el ordenamiento jurídico, por lo que se debe tomar esta vía sólo si se tomará después el trámite de Acción de Protección.

**5.3.2 Procedimiento:** El procedimiento previsto en la LOGJCC es de carácter sumarísimo e informal y se compone de las siguientes fases:

---

<sup>102</sup> Ibid. Art. 27

<sup>103</sup> Ídem.

**Petición:** Puede ser propuesta de manera individual o colectiva de manera verbal o escrita. De la experiencia procesal consideramos que debe ser escrita. La competencia se radica por sorteo y ésta puede recaer en cualquier juez, ya que de acuerdo a la Constitución todos los jueces pueden ejercer la jurisdicción constitucional.

Esta petición puede realizarse en conjunto con la Acción de Protección respectiva, cuando el fin sea detener la violación del derecho. Si es este el caso el juez debe tramitar las medidas antes de la acción principal, por lo que no tiene que calificar la acción, sino después de resolver las medidas. Si es que el juez acepta las medidas cautelares, éstas se pueden dictar con la admisibilidad de la acción principal. Además de ello, el accionante tiene que declarar si ha solicitado antes este procedimiento.

**Resolución:** El juez tiene que resolver en base a la mera descripción de los hechos, ya que no se requiere de pruebas para demostrar la violación o inminente violación del derecho. Es también importante mencionar que no se requiere notificar a la persona en contra de quien se incoó el procedimiento. La aceptación o no de las medidas se tiene que sentar en resolución que no es apelable.

La resolución debe contener las obligaciones positivas o negativas, tiempo, modo y lugar en que deben cumplirse las medidas y además debe preocuparse de hacer conocer al requerido por diversos medios como llamadas telefónicas, fax o visitas al lugar de los hechos. Para este punto consideramos que esto puede revestir de dificultad práctica para el cumplimiento efectivo porque debería actuarse con una notificación formal de la ejecución de la medida cautelar de manera que ésta tenga un respaldo instrumental más fuerte.



**Ejecución:** El juez debe encargarse de que se cumplan y ejecuten las medias cautelares ordenadas y para ello puede delegar al Defensor del Pueblo y otras entidades de protección de derechos para que supervisen el cumplimiento de lo ordenado.

**Revocatoria:** Se puede revocar la medida ordenada siempre y cuando haya cumplido su finalidad, si han cesado los requisitos de admisibilidad que ya hemos señalado o cuando se demuestre que carecían de fundamentación.

La revocatoria aplica cuando el requerido presenta los argumentos que puedan sustentar la revocatoria. El juez decide sobre la solicitud de revocatoria mediante auto que es apelable en el término de tres días contados a partir de la notificación del auto sobre el que se quiere recurrir.

**Audiencia excepcional:** Si el juez considera que es necesario, puede llamar a audiencia para modificar, supervisar o revocar las medidas cautelares.

De lo que podemos observar, este procedimiento puede ser muy efectivo para la protección de los derechos de los compradores de los vehículos, sin embargo, radica una dificultad en el caso de que el juez que conoce la acción considere que no es admisible arguyendo que se debe seguir en la vía ordinaria o si considerare que el daño no es grave, aunque como hemos visto, por los derechos que se vulneran en esta problemática, podemos ver que sí se trata de una fuerte violación.

**5.3.3 Acción de Protección de Derechos:** La Acción de Protección de los derechos fundamentales es la acción constitucional principal a seguirse para el caso que nos atañe,

ya que esta resuelve el fondo acerca de la violación al derecho fundamental contenido en esta problemática, que viene a ser el derecho de las personas usuarias de poder elegir con libertad los bienes y servicios de calidad que se le oferten. Este derecho se encuentra previsto en el Art. 52 de la Constitución de la República por lo que puede ser objeto de una Acción de protección, que de acuerdo al art. 39 de la LOGJCC tiene como fin “(...) *El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales sobre Derechos Humanos, que no estén amparados por las Acciones de Hábeas Corpus (Derecho a la libertad personal e integridad), Acceso a la Información Pública (Derechos de Participación e Información), Hábeas Data (Acceso a la información personal), Por Incumplimiento (Sentencias de los Organismos Internacionales de DD HH y Ordenamiento Jurídico), Extraordinaria de Protección ( Resoluciones Judiciales de última instancia) y Extraordinaria de Protección contra decisiones de la Justicia Indígena.*”<sup>104</sup> Analizando la norma jurídica que nos atañe, concluimos que no se enmarca en ninguna de las acciones especiales que se encuentran previstas como Garantías Jurisdiccionales, por lo que podríamos revisar la Acción de Protección de Derechos, de acuerdo a las reglas de los Arts. 40 y siguientes de la LOGJCC y que iremos señalando a continuación. Ahora bien, el Art. 40 de la LOGJCC establece los requisitos de procedibilidad de la Acción de Protección, siendo el primero la “*Violación de un derecho constitucional*”, que tiene que ver directamente con el contenido sustantivo en el que se basará la acción, y es la vulneración del derecho del consumidor a escoger con libertad los bienes y servicios de calidad que éste desee, en el caso que nos atañe, es el de elegir libremente dónde hacer los mantenimientos rutinarios del vehículo comprado. En segundo lugar está que se haya constituido una “*Acción u Omisión de una autoridad pública o de un*

---

<sup>104</sup> Op. Cit.Art.39

*particular de conformidad con el artículo siguiente” que tiene que ver a una conducta realizada por la autoridad pública no judicial, prestador de servicio público o particular que devenga en la violación de un derecho constitucional. Para el caso que nos atañe, debemos atenernos al art. 41 numeral cuatro que establece las condiciones en las que un particular debe vulnerar el derecho para configurarse la acción, nos permitimos citar el mencionado numeral:*

***Art. 41.- Procedencia y legitimación pasiva.- La acción de protección procede contra:***

*4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias:*

*a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;*

*b) Presten servicios públicos por delegación o concesión;*

*c) Provoque daño grave;*

*d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo.*<sup>105</sup>

En este contexto, son los literales c) y d) los que revisten de importancia, ya que hemos demostrado de manera concreta que el hecho de que se condicione la garantía de fábrica del vehículo al hecho de que se tenga que realizar de manera obligatoria las labores de mantenimiento rutinario en la concesionaria que vendió el vehículo produce un daño grave a los principios de interés económico de las personas usuarias, su libertad de elección de bienes y servicios de calidad y además, la indefensión de éste al carecer de medios probatorios para reclamar la garantía ya que implica una conducta que afecta tanto al individuo como al sistema económico en su totalidad. En cuanto al literal d), la

---

<sup>105</sup> Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Art. 41 Num. 4

característica de los contratos de adhesión se configura en cuanto una de las dos partes se encuentra en una situación de subordinación sobre la persona que establece las cláusulas contractuales ya que la parte adherente no tiene la posibilidad de acordar el contenido de las mismas, únicamente puede someterse a la decisión de aceptar o no lo estipulado en este contrato.

Además, el particular que adquiere un vehículo sí se encuentra en inferioridad de condiciones con un poder económico que lo sobrepasa que comprende a la gran empresa concesionaria de los vehículos que tiene un ingreso infinitamente superior al de un ciudadano común.

Ahora, en cuanto al tercer requisito del art. 40 de la LOGJCC, se establece como necesario el verificarse la *“inexistencia de otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho que ha sido violado”*. En cuanto a esta cuestión, si bien existen acciones y recursos que se encuentran previstos en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y quedan las acciones civiles, si se diera el caso de que el ofendido se decidiera a correr por la vía constitucional, éste debe demostrar lo inadecuados e ineficaces que pueden ser los procedimientos previstos en la legislación secundaria, lo cual puede verificarse en las siguientes consideraciones:

- Los procedimientos establecidos en la legislación secundaria suelen ser largos y farragosos, ante los cuales al comparecer las partes en igualdad de condiciones, permiten a la concesionaria la interposición de recursos e incidentes que dilaten el proceso de manera permanente, para que cuando se emita la respectiva resolución,

el bien comprado haya ya terminado de cumplir su vida útil o sencillamente ya no tenga ninguna consideración especial el hecho de que se haya ganado el litigio.

- En el caso de seguirse las acciones ante el juez de contravenciones, es necesario recordar que salvo en el Distrito Metropolitano de Quito, a partir del mes de Marzo del 2011, de acuerdo a la resolución No. 077-2010 en que se crearon los primeros Juzgados de Contravenciones, en el resto del país, los asuntos que deben ser conocidos por estos jueces son conocidos por Intendentes y Comisarios, funcionarios de la Función Ejecutiva, que carecen de la preparación jurídica adecuada y que por ende, en nada contribuirían para la defensa de los derechos de las personas consumidoras.

- Además, el asunto que implica la garantía del vehículo reviste de mucha urgencia ya que cualquier desperfecto de fabricación de la máquina puede generar cualquier tipo de accidente de tránsito que puede poner en riesgo la seguridad de la persona compradora del vehículo en cuanto a su propia vida e integridad personal.

Tomando en cuenta todos estos aspectos, es necesario que se logre demostrar la ineficacia de las otras vías respecto de la finalidad que tiene la persona para el resarcimiento de su derecho. Es así que si lo que se persigue es una reparación que implique un resarcimiento de tipo pecuniario, la opción constitucional es la menos apropiada para hacerlo, debido a las normas de procedimiento que mencionaremos más adelante y que establecen la iniciación de acción verbal sumaria que en este caso correspondería a las acciones de carácter civil. Por ende, la acción sería conveniente si lo que se busca es que de inmediato se reintegre la garantía cancelada y poder realizar los mantenimientos periódicos en el lugar que más

convenga al usuario o comprador. A partir de este momento, procederemos a detallar el procedimiento.

**5.3.3.1 Procedimiento:** El procedimiento por el cual se sigue la Acción de Protección es el que se encuentra previsto desde el Art. 8 de la LOGJCC hasta el Art. 21 del mismo cuerpo normativo y se compone de los siguientes aspectos:

**Escrito de demanda:** El proceso de garantías jurisdiccionales comienza con la presentación del escrito de demanda que debe contener lo siguiente, de acuerdo al Art. 10 de la LOGJCC:

- *Nombres y Apellidos de la persona o personas accionantes, y si no fuere la misma persona que la víctima, señalar el nombre de la misma.*
- *Datos necesarios para conocer la identidad de la persona, entidad u órgano accionado:* se debería entender que deben ir las generales de ley previstas en el Código de Procedimiento Civil que permitan la identificación clara de la demandada, en nuestro caso la concesionaria de vehículos.
- *Descripción del acto u omisión violatorio del derecho que produjo el daño. Si es posible una relación circunstanciada de los hechos. La persona accionante no está obligada a citar la norma jurídica o precedente jurisprudencial que fundamente la acción:* vendría a describirse de manera clara todos los fundamentos de hecho de la acción de protección entre los que debe denotarse el

nexo causal entre la violación del derecho, la responsabilidad de la concesionaria y el efecto nocivo en cuanto a los derechos e intereses de los usuarios.

- *Lugar donde se le puede hacer conocer de la acción a la persona o entidad accionada:* es imprescindible que el accionado pueda ejercer su derecho a defenderse como requisito fundamental de la justa composición del juicio constitucional, por ello debe individualizarse la dirección dónde se pueda citar al demandado.
- *Lugar de notificaciones de la persona accionante y de la afectada, si quien interpone la acción no es la misma:* dado el principio de legitimación universal, no es estrictamente a la víctima a quien corresponde la interposición, ya que cualquier persona puede accionar al tener noticia de una violación de derechos. Es por esto que se agrega esta disposición de notificación a la víctima para que ella pueda vincularse al proceso y obtener la reparación de su derecho.
- *Declaración de que no se ha planteado otra garantía constitucional por los mismos actos u omisiones, contra la misma persona y con la misma pretensión:* busca evitar el abuso del derecho y del ejercicio de las acciones constitucionales, además no tener fallos contradictorios que generen inseguridad jurídica en las partes. Este requisito no es de la esencia de la demanda ya que puede ser subsanado en la primera audiencia.

- *Solicitud de medidas cautelares:* Como ya mencionamos anteriormente, la solicitud de medidas cautelares puede hacerse antes o con la presentación de la demanda de Acción de Protección.
- *Elementos probatorios que demuestren la existencia del acto u omisión violatorio de los derechos:* constituye un verdadero anuncio de prueba, ya que la actuación y recepción de éstas se realizará en la audiencia correspondiente al proceso, sin embargo el juez debe calificar las pruebas para que sean ordenadas debidamente, de ser pertinentes. En nuestro caso es fundamental el contrato de compraventa del vehículo en el que se incluye la cláusula de la garantía, la notificación de la cancelación de la misma por no hacer el mantenimiento en la concesionaria y recibos correspondientes. Además, sería pertinente conseguir la prueba testimonial que pueda sustentar la demanda.

Si se da el caso de que la acción fue presentada por interpuesta persona, la persona afectada tiene la total libertad de comparecer en cualquier momento del proceso, y de esa manera modificar la demanda, pretensión, desistir o deducir recurso de ley.

Se admite también la comparecencia de terceros con la presentación de un escrito Amicus Curiae que puede ser aceptado en el expediente hasta antes de la sentencia por mejor proveer.

Se admite también la participación de terceros coadyuvantes del accionado que tengan interés en mantener el acto u omisión que supuestamente es atentatorio a derechos.



**Calificación de la demanda:** Una vez sorteada la demanda, y puesta en conocimiento del juez, éste debe calificarla de conformidad con el Art. 13 de la LOGJCC que fija los siguientes parámetros de calificación:

**Aceptación o Inadmisión del trámite:** Es la verificación de los requisitos que hemos estudiado anteriormente para que si éstos están en orden, se proceda a continuar el trámite. En cambio, de ser el caso, que se inadmita la demanda por falta de requisitos, se mandará a completarla por el término de tres días. Si es el caso de que no se la complete, el juez tiene que seguir sustanciándola si se desprende que pueda existir violación grave de derechos.

- ***Día y hora de la audiencia:*** La Audiencia no puede ser convocada en un término mayor de tres días desde la fecha de notificación del Auto de Calificación de la demanda
- ***Orden de correr traslado de la demanda a las partes involucradas:*** Con esto se concreta el derecho a la defensa, ya que éstas al enterarse pueden comparecer al proceso y de esa manera presentar sus pruebas de descargo.
- ***Disposición de que las partes presenten elementos probatorios:*** Tiene el fin de enriquecer la verdad procesal y de recordar que es en la única audiencia el momento en el que se puede reunir pruebas para que el juzgador tenga elementos de conocimiento para su resolución.
- ***Orden de las medidas cautelares de creerlo procedente:*** Viene de la mano con que la parte accionante haya solicitado la ejecución de medidas cautelares en la demanda.

**Audiencia Única:** Se lleva a cabo en el día y hora fijados en la calificación de la demanda. En esta comparecen la persona afectada por el acto dañoso, en nuestro caso la persona que adquirió el vehículo. Igualmente se puede llamar a otras personas o instituciones, para mejor proveer. El rito de la Audiencia comienza con la intervención del accionante o afectado, y en esta parte se señala y demuestra el daño, y los fundamentos de la acción de garantías. Después interviene el accionado, que en este caso sería el representante de la casa automotriz, quien debe remitir su respuesta a lo planteado por el actor. Cada parte tiene derecho a replicar lo señalado por la otra. El último argumento se establece para la parte que acciona el proceso. Los tiempos límite de las intervenciones están fijados en el Art. 14 de la LOGJCC. Tomando en cuenta el interés del estado en tutelar los derechos previstos en la constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, el juez de la causa debe hacer las preguntas que considere necesarias con el fin de formarse un criterio de verdad y resolver el caso. Debe también evitar dilaciones innecesarias al proceso. Por ello, la audiencia debe finalizar con la expedición verbal de la sentencia de parte del juez, pero en caso de que considere necesario realizar práctica de pruebas puede suspender la audiencia y señalar nueva fecha y hora para su reinstalación. La inasistencia de la parte demandada no impide la realización de la audiencia. La ausencia del accionante se considera desistimiento de la acción. Si no se considera necesaria la presencia del afectado, la audiencia se puede realizar en presencia del accionante si no son la misma persona.

**Terminación del procedimiento.-** El Art. 15 de la LOGJCC es el que determina las formas normales y anormales en que el procedimiento termina, esto es por auto definitivo

o por sentencia. El auto definitivo se da en caso de desistimiento de la acción o de allanamiento del accionado, la sentencia en caso de que el juez emita su decisión una vez agotado el procedimiento.

***Desistimiento:*** Cuando el actor desiste de continuar con la acción de protección por razones de carácter personal. Para este caso el juez debe valorar las mismas. Si el actor o afectado no comparecieren a la audiencia se considera desistimiento tácito y se ordena el archivo de la causa. El desistimiento cabe en cualquier momento del procedimiento.

***Allanamiento:*** Cabe también en cualquier momento del procedimiento, hasta antes de dictar sentencia. Este allanamiento es de carácter parcial o total. En el caso de que sea parcial, se continúa el proceso en lo que no se haya allanado. El acuerdo debe ser aprobado mediante auto definitivo que puede contener la forma y modos de la reparación.

***Sentencia:*** El juez se forma criterio, dicta sentencia en la misma audiencia y la notifica a las partes en las 48 horas siguientes.

***Pruebas:*** El accionante debe demostrar los hechos que se alega, en nuestro caso debe presentar los documentos necesarios como el contrato y la notificación de la terminación de la garantía, de haberlos. De no existir estos elementos debe hacerse mediante la intervención de testigos que puedan dar fe de los hechos y además, por tratarse de una cuestión de carácter mecánica, sería necesario que el adquiriente del vehículo solicite la práctica de prueba pericial para que se demuestre de manera técnica que el mantenimiento rutinario no tiene que ver con los defectos de fabricación que pueda tener el vehículo comprado. La recepción de las pruebas sólo puede darse en audiencia. El juez, como ya lo referimos, puede ordenar pruebas en la calificación de la demanda. Si el juez ordena practicar pruebas, éstas deben hacerse en el término máximo de ocho días y por una sola

vez. Excepcionalmente el juez puede ampliar este término. Se presumirán como ciertos los hechos de la demanda si el accionado no demuestre lo contrario a lo afirmado por el actor o no suministre la información solicitada y no se pueda inferir una conclusión contraria a esos hechos. El juez puede designar comisiones para recabar las pruebas, estas comisiones pueden ser unipersonales o pluripersonales, quienes realizarán visitas al lugar de los hechos, recoger versiones y elaborar los informes respectivos.

**Sentencia:** Con la sentencia se termina el procedimiento de acción de protección y debe contener los siguientes elementos: 1. Antecedentes, que son los datos de identificación de las partes. 2. La relación de los hechos acontecidos y relevantes para la resolución. 3. Argumentación jurídica que sustente la resolución. 4. La declaración de que se han violado o no los derechos, determinación de las normas constitucionales y el daño, reparación integral, inicio del juicio de reparación económica, si fuere el caso.

**Reparación Integral:** El art. 18 de la LOGJCC prevé el contenido de la reparación integral que viene a ser el objetivo de la acción de protección. La reparación integral debe procurar que la persona o titulares del derecho violado puedan ejercerlo de la mejor manera posible y que las cosas regresen al estado anterior a la violación. De acuerdo al artículo “*La reparación podrá incluir, entre otras formas, **la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, (...)***”<sup>106</sup> (El subrayado en negrita es nuestro). Es importante el contenido de esta norma en cuanto a la restitución del derecho no reconocido, que en nuestro caso viene a ser la garantía de fábrica del vehículo, sin el condicionamiento de realizar los mantenimientos rutinarios en la casa

---

<sup>106</sup> Art. 18 de la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional

automotriz. También es de considerar con mucha atención lo referente a la compensación económica o patrimonial ya que puede implicar el pago de indemnizaciones por el daño producido con la violación del derecho. Sin embargo, en el caso de solicitarse esta reparación económica se tiene un problema, ya que se tiene que sustanciar esta cuestión en juicio verbal sumario, lo que implicaría que el juez tenga que tramitar un procedimiento civil aunque no sea competente en razón de la materia, lo que conlleva el riesgo de que éste proceso no se lleve bien, causando además duda respecto del juez competente para ejecutar la sentencia. El segundo inciso del segundo inciso se refiere a la reparación económica que puede ser de carácter material e inmaterial que nos permitimos citar a continuación:

*“La reparación por el daño material comprenderá la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las personas afectadas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial comprenderá la compensación, mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, por los sufrimientos y las aflicciones causadas a la persona afectada directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia del afectado o su familia. La reparación se realizará en función del tipo de violación, las circunstancias del caso, las consecuencias de los hechos y la afectación al proyecto de vida.” (El subrayado es nuestro) <sup>107</sup>*

---

<sup>107</sup> Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Art. 18

Debemos señalar que este inciso sería aplicable en cuanto la eliminación de la garantía sí produce tanto daños materiales como inmateriales que deben ser tomados en cuenta por el juez constitucional. En primer lugar porque la obligación de utilizar el servicio mecánico de la casa automotriz genera pérdidas con respecto en primer lugar al costo elevado de los mantenimientos mecánicos en estos establecimientos, además de limitar la competitividad del negocio de la persona que es víctima de estas prácticas. En segundo lugar sí se produce un daño inmaterial, ya que la inseguridad que implica el no tener un vehículo garantizado genera graves sufrimientos y aflicciones en los usuarios del mismo, ya que no tienen la certeza y la seguridad del buen funcionamiento de este bien mueble y por ende están a merced de cualquier daño funcional que pueda poner en peligro sus vidas y estabilidad económica. Además, al encontrarse el comprador en posición de debilidad frente a la empresa concesionaria se genera un sentimiento de inferioridad y de subordinación que le lleva a la no conciencia sobre sus derechos y sus obligaciones. Por ende estos aspectos deben ser tomados en consideración. El Art. 19 establece la vía por la que se debe reclamar la reparación económica que es la verbal sumaria para estos casos y además establece de manera clara que la competencia radica, para estos procesos ante el mismo juez que dictó el fallo de Acción Constitucional. De este proceso de fijación del valor se puede interponer todos los recursos procesales existentes para este tipo de proceso.

**Recurso de Apelación:** De la sentencia dictada por el juez que conoció la Acción de Protección se puede interponer recurso de apelación en la misma audiencia en que se dio la resolución o en el término de tres días contados a partir de que la sentencia fue notificada por escrito a las partes. Es importante señalar que la competencia se radica en cualquier sala de la Corte Provincial cuya competencia será fijada mediante sorteo en caso de existir

más de una sala en la Corte. La interposición del recurso solo se otorga en efecto devolutivo si el recurso fue incoado por la parte accionada o denunciada. La Sala de la Corte Provincial resuelve en mérito de los autos en el término de ocho días de recibir el proceso. En caso de que el juez considere necesario, puede ordenar práctica probatoria.

#### **5.4 Acciones al amparo de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor:**

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, desde el punto de vista de los Principios del Derecho de Consumidores y con el fin de precautelar los derechos de las personas, ha establecido de manera inteligente varias normas de prohibición que contienen conductas que se enmarcan en la ilegalidad. Es así que busca proteger el bien jurídico que viene a ser de manera principal el derecho a elegir con libertad bienes y servicios de calidad y de recibir un trato justo y digno por parte de los proveedores de bienes y servicios. Cuando el proveedor cumple con el presupuesto previsto en alguna de las conductas prohibidas, se genera responsabilidad que es penalizada con la imposición de una sanción que se encuentra prevista en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y que consiste de manera general en una sanción de carácter pecuniaria (multa) o la clausura del establecimiento en el que se haya cometido la infracción respectiva. A más de esta cuestión de carácter punitiva, se añade en la sentencia que determina la existencia de la infracción, el nacimiento de la obligación del proveedor de pagar indemnizaciones de daños y perjuicios provocados al consumidor por esta conducta, de acuerdo al procedimiento establecido en ese cuerpo normativo. Para el caso de la utilización de esta acción es imprescindible que el cliente busque con su pretensión sentirse reparado en su derecho afectado. Como mencionamos antes al ubicar las acciones de carácter constitucional, la pretensión es la aplicación de la ley en cuanto a

las sanciones previstas en la misma, así como el resarcimiento económico por los daños y perjuicios provocados por la conducta.

La única autoridad con competencia para aplicar las sanciones previstas en la LODC son los jueces de contravenciones de la jurisdicción donde aconteció el hecho dañoso. Sin embargo, la ley establece otros mecanismos de protección que pueden servirle al consumidor para tener una mayor fuerza en cuanto a la comparecencia en la causa como es el caso de las Asociaciones de Consumidores, y también puede ser el caso de que se requiera medios de eficacia probatoria como es el realizar la denuncia para la investigación de parte del defensor del pueblo. Para poder analizar a plenitud el procedimiento ante el juez de contravenciones, primero procederemos a analizar las vías a través del Defensor del Pueblo y de las Asociaciones de Consumidores, para luego analizar el procedimiento definitivo.

**5.5 Procedimiento a través del Defensor del Pueblo.-** El Art. 81 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece la facultad de la Defensoría del Pueblo de “*Conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, (...) y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución de la República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas(...)*”<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Art. 81 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.



El mismo artículo refiere que el Defensor del Pueblo puede procurar el que las partes resuelvan el conflicto de manera amistosa, todo esto siempre y cuando no se trate de una infracción penal. Debemos comprender el término de “*Infracción Penal*” como un delito, ya que la mayoría del contenido de la ley se refiere a conductas que se encuentran enmarcadas en el ámbito contravencional, pues si la ley se referiría como infracciones penales de manera muy general se estaría vaciando el contenido de la norma prevista en la LODC. Ahora, procedemos a analizar el siguiente artículo de la ley que remite a la Ley de Defensoría del Pueblo y a un reglamento que el Defensor del Pueblo expediría para reglamentar el procedimiento a seguirse ante esta autoridad. De hecho en el año 1999, el Defensor del Pueblo de la época fue el que expidió el Reglamento que se encuentra actualmente en vigencia.

Después de que se agota este procedimiento al que nos referiremos a continuación, de acuerdo con el Art. 83 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el Defensor del Pueblo debe emitir un informe que servirá como instrumento de prueba a las autoridades pertinentes para el proceso investigativo, la posible emisión de sanciones y el resarcimiento o cumplimiento de la obligación por parte de la persona natural o jurídica infractora de la Ley. Este informe debe ser valorado por el juez como las demás pruebas, en base a los principios de la sana crítica. Finalmente, este informe puede servirle al Defensor del Pueblo para actuar como legitimario activo y solicitar el inicio del proceso. A continuación, relataremos el procedimiento que se sigue ante esta autoridad:

- 1. Forma de presentación:** EL Art. 5 del Reglamento para el Trámite de Quejas del Consumidor o Usuario establece que las quejas pueden presentarse de manera escrita u oral. De ser el caso que la presentación sea oral, el Director Nacional de Defensa del Consumidor, que es un funcionario de la Defensoría del Pueblo, debe

ordenar que a través de Secretaría, se reduzca la queja a escrito, observando que se respeten los requisitos generales de la ley que tienen que ver con la capacidad y la voluntad.

**2. Requisitos:** El Art. 6 del mencionado reglamento establece que las quejas de los usuarios deben tener los siguientes requisitos:

- a. *“Los nombres y apellidos del denunciante o reclamante y de la persona o la entidad contra quien se formula la denuncia o reclamo; en el caso de que aquel actúe en representación de una comunidad, colectividad o grupo de personas, acompañará la constancia escrita de su delegación para este efecto;*
- b. *Las circunstancias en las cuales se produjo la violación o inobservancia del derecho cuya tutela se reclama; el lugar, la fecha y la autoridad o persona o empresa particular responsable;*
- c. *El domicilio del denunciante o reclamante y el de la persona natural o jurídica presuntamente responsable de la violación de los derechos del consumidor o inobservancia de la ley;*
- d. *La medida reparatoria que se pretenda; y,*
- e. *Las pruebas documentales o testimoniales que fundamenten la queja.*

*En caso de registrarse cualquier omisión en el cumplimiento de estos requisitos, la Defensoría podrá de oficio, ordenar que se complete la queja.<sup>109</sup>*

Para el caso materia de esta disertación, es importante el ámbito de las pruebas documentales y testimoniales que se dispongan, porque deberá presentarse el contrato de

---

<sup>109</sup> Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor o Usuario. Art. 6

adhesión que es el de compraventa del vehículo y de existir, la notificación escrita de que se ha cancelado la garantía. Además, sería prudente verificar la existencia de algunos testigos que puedan corroborar la versión que se está planteando a la defensoría.

**3. Quejas inadmisibles:** Se da en el caso de que las quejas escritas no cumplan con los requisitos establecidos en el Reglamento que es objeto de nuestro análisis. De ser este el caso, la parte que presente la queja puede apelar esta decisión ante el Defensor del Pueblo, en el término de ocho días contados desde la fecha de notificación de la inadmisibilidad de la queja.

**4. Competencia de investigación:** La competencia para el conocimiento de las quejas es de carácter Nacional o Provincial, está radicada, en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor en el primer caso o el Comisionado Provincial en el segundo. Estas autoridades son las que tienen que proceder a la investigación de todo lo denunciado y emitir un informe y resolución que puede ser apelado ante el Defensor del Pueblo. En el caso de que la resolución que sea apelada corresponda a una emitida por el Comisionado Provincial, el Defensor del Pueblo contará con el informe del Director Nacional de Defensa del Consumidor. Igualmente, de la resolución de los Comisionados Provinciales, debe darse una copia de la misma a esta Dirección.

**5. Audiencia:** Es facultativa del Comisionado, Director Nacional de Defensa del Consumidor o el Defensor del Pueblo, la convocatoria para una Audiencia Pública. Esta iniciativa puede darse de oficio o a petición de parte. La audiencia tiene como fin que las partes presenten sus alegaciones. Estas deben quedar sentadas en un acta que debe contenerlas y que debe ser firmada por el funcionario que llevó a cabo la

audiencia y también por la persona que fungió de secretario en la misma y que no es más que otro servidor de la Defensoría.

- 6. Resolución y apelación:** Luego de terminada la investigación y de no encontrarse acuerdo entre las partes, el funcionario puede acoger o no la queja de manera total o parcial, a través de resolución debidamente motivada. En esta resolución, si se acoge la queja, debe señalar en el texto con precisión las infracciones que hayan sido cometidas, los nombres de los responsables y finalmente declarará censura pública en contra del requerido. La resolución sólo es apelable ante el Defensor del Pueblo, siempre y cuando quien haya expedido la resolución no sea el mismo Defensor.

De acuerdo con el Art. 11 del Reglamento, esta resolución puede ser publicada por los medios de comunicación social, esto puede ser ordenado de oficio o a petición de parte.

Debemos señalar que este procedimiento permite a la persona reclamante contar con un poderoso elemento probatorio que permitiría hacer valer su derecho en el posterior trámite ante el Juez de Contravenciones, sobre el que nos referiremos más adelante. Ahora, para el caso que nos atañe, podemos ver cierta dificultad en el caso de una comparecencia que se realice de manera individual, ya sea por la dificultad de la prueba o por el peso real que tiene cada parte en la sustanciación de este procedimiento. Es por esto que en el siguiente punto trataremos de las Asociaciones de Consumidores, como legitimarias activas y canalizadoras de éstas expectativas.

**5.6 Procedimiento a través de las asociaciones de consumidores.-** Una situación importante en el ejercicio del derecho de las personas usuarias y consumidoras es que las características del contrato de adhesión permiten el que el ejercicio del comercio se realice de manera masiva, reproduciendo de manera permanente la dinámica en la que funciona el sistema económico, facilitando los intercambios. Pensando en esta masificación de las relaciones comerciales podemos encontrar que varias personas se encontrarán en una situación jurídica similar ante los proveedores, que más bien comprenden grupos pequeños o hasta un solo sujeto pasivo. Es así que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece la existencia de Asociaciones de Consumidores, que permitan a los usuarios defender sus derechos y promover una cultura de conocimiento de sus derechos y obligaciones. El Art. 61 de la LODC, define a las Asociaciones de Consumidores como "*toda organización constituida por personas naturales o jurídicas, independientes de todo interés económico, comercial, religioso o político, cuyo objeto sea garantizar y procurar la protección y la defensa de los derechos e intereses de los consumidores; así como promover la información, educación, representación y el respeto de los mismos.*"<sup>110</sup> . Al tener el objeto de defender los derechos e intereses de los consumidores, las Asociaciones deben cumplir con diversas actividades encaminadas hacia este fin último, y éstas deben ir desde el plano educativo para generar conciencia en los usuarios sobre sus derechos y obligaciones contemplados en el ordenamiento jurídico nacional y además, de ser el caso, defender los intereses de los consumidores ante cualquier intento de menoscabar sus derechos. Las Asociaciones de consumidores deben cumplir los siguientes requisitos de acuerdo con el Art. 62 de la mencionada ley:

*"1. Obtener su personería jurídica en el Ministerio de Bienestar Social;*

---

<sup>110</sup> Art. 61 de La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

2. *Conformarse con un número no menor a cincuenta miembros;*
3. *No incluir como asociados a personas jurídicas que se dediquen a actividades comerciales;*
4. *Mantenerse al margen de actividades comerciales, religiosas o políticas;*
5. *No perseguir fines de lucro.*
6. *No aceptar anuncios de carácter comercial en sus publicaciones; y,*
7. *No realizar una explotación comercial selectiva en la información y consejos que ofrezcan al consumidor.”<sup>111</sup>*

Toda organización establecida de acuerdo a estos requisitos puede funcionar formalmente como Asociación de Consumidores y puede gozar de todas las prerrogativas que la ley establece para este tipo de organizaciones, siendo las principales actividades y objetivos, relevantes para nuestro caso y como mecanismos de defensa de los derechos de los propietarios de los vehículos los siguientes numerales del Art. 63 de la LODC:

- “2. *Promover y Proteger los derechos de los consumidores;*
3. *Representar los intereses individuales o colectivos de los consumidores ante las autoridades judiciales o administrativas; así como, ante los proveedores, mediante el ejercicio de las acciones, recursos, trámites o gestiones que a esta ley se refiere, cuando esto sea solicitado expresamente por los consumidores;(…)*
- 7.- *Denunciar la práctica o manejo que atente contra los derechos del consumidor consagrados en la presente Ley; (...)*
- 9.- *Prestar la debida colaboración a las autoridades que requieran de su contingente para la investigación de las infracciones previstas en la presente ley”<sup>112</sup>*

---

<sup>111</sup> Art. 62 de La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

De todo esto podemos colegir, que el peso y contingente de estas organizaciones podría servir a nuestro caso considerando lo siguiente:

- i) Si la Acción ante el Juez de Contravenciones es impulsada por la Asociación, el propietario del carro estará en mejores condiciones procesales por todo el andamiaje que representa toda una organización social y su influencia con respecto a la autoridad judicial. Además, al gestionarse la acción de manera colectiva, tiene más oportunidades de ganar el proceso.
- ii) El andamiaje de las Asociaciones de Consumidores permitiría profundizar y obtener mejores elementos probatorios para obtener evidencias que sustenten la acción.
- iii) En la vida real, las Asociaciones de Consumidores presentan fallas organizativas que no les permiten actuar como es debido, ya que en muchos casos son dirigidas por personas que tienen intereses particulares y no defienden los reales intereses de los consumidores.

**5.7 Procedimiento ante el juez de contravenciones:** Este comprende el principal procedimiento que se puede seguir para el juzgamiento de las conductas tipificadas como infracciones de acuerdo a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Las conductas catalogadas como infracciones se encuentran previstas en los artículos 70 a 80 de este cuerpo normativo, además, en el Art. 55 de las prácticas prohibidas, en el Art. 7 sobre publicidad abusiva y el Art. 23 que se refiere al deterioro inorgánico de los bienes adquiridos. Lo que atañe a nuestra investigación es el numeral 1 del Art. 55 de la Ley que

---

<sup>112</sup> Art. 63 de la Ley de Defensa del Consumidor Numerales 2,3,7 y 9

se refiere a la venta condicionada a la compra de otro o a la contratación de un servicio. Al configurarse una venta condicionada se está incurriendo en una de esas prácticas prohibidas. Debido a que en la ley no existe una sanción específica para este tipo de prácticas, es necesario aplicar supletoriamente el art. 70 de la Ley que se refiere a la sanción general y que reza lo siguiente:

*“Art. 70.- Sanción general.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, siempre que no tengan una sanción específica, serán sancionadas con multa de cien a mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, y si es del caso, el comiso de los bienes, o la suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la prestación del servicio o publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias no libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la ley.”<sup>113</sup>*

Como queda claro del tenor literal de este artículo, la sanción general aplica a toda conducta infraccional que no tiene una penalización específica en primer lugar, y en segundo queda claro que la sanción prevista implica la forma en que el proveedor incumplido restaura la armonía afectada con su conducta ilegal. Es importante señalar la parte final del artículo que afirma las obligaciones jurídicas que surgen a raíz del acto dañoso y de las cuales no se libera el infractor con la pena. Es menester indicar esto porque entre las fuentes de las obligaciones civiles se encuentran los delitos, que son los actos unilaterales ilícitos realizados con el ánimo de irrogar injuria o daño en contra de una persona. Más adelante señalaremos que la acción de juzgamiento de las contravenciones de la LODC conllevan al juicio de indemnización por daños y perjuicios a que diere lugar.

---

<sup>113</sup> Art. 70 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor



El juzgamiento de las contravenciones a esta ley, se encuentra previsto en los arts. 84, 85, 86 y 87 de la LODC y es menester analizar los siguientes puntos:

- **Competencia:** La competencia para conocer de estas acciones corresponde a los Jueces de Contravenciones del lugar en donde se produjo la infracción que es motivo de la causa. Respecto a este punto es necesario hacer una breve reflexión acerca del origen de estos jueces de contravenciones y éste se remite a la Constitución del año 1998 que estableció como uno de sus principios rectores el de Unidad Jurisdiccional que implica que todo ente que se tenga que encargar de la administración de justicia debe pertenecer a la Función Judicial, desestimándose los Tribunales de Excepción o Autoridades administrativas que ejerzan ese tipo de atribuciones. Los asuntos contravencionales, eran conocidos por parte de Comisarios, Intendentes de Policía y Tenientes Políticos de las parroquias rurales que son funcionarios de la Función Ejecutiva. A partir de la Constitución de 1998 se estableció que debían existir Jueces de Paz y Jueces de Contravenciones que sustituirían a estos funcionarios administrativos. Este principio fue recogido por la Constitución del 2008 y el Código Orgánico de la Función Judicial de marzo del 2009, el cual en el Art. 231 establece que *“En cada distrito habrá el número de juezas y jueces de contravenciones que determine el Consejo de la Judicatura, con la determinación de la localidad de su residencia y de la circunscripción territorial en la que tengan competencia; en caso de no establecer esta determinación se entenderá que es cantonal.”*<sup>114</sup> El mismo artículo establece los asuntos de competencia de estas judicaturas que son los siguientes; *“1. Conocer los hechos y actos de violencia y las contravenciones de policía cuando se trate de los casos*

---

<sup>114</sup> Código Orgánico de la Función Judicial. Art. 231

*previstos en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, siempre que en su jurisdicción no existieran juezas o jueces de violencia contra la mujer y la familia. Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previstas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o juez podrá fijar la pensión de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas perjudicadas por la agresión. Le corresponde también al juez o jueza ejecutar esta disposición en caso de incumplimiento; 2. Conocer las contravenciones tipificadas en la ley penal ordinaria; **3. Conocer las infracciones a las normas de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor;**(El subrayado es nuestro) 4. Conocer las contravenciones de policía, las diligencias pre procesales de prueba material en materia penal y civil, la notificación de los protestos de cheques y la realización de actuaciones procesales que le sean deprecadas o comisionadas; 5. El Consejo de la Judicatura determinará, de entre estas juezas y jueces, a los que serán competentes para juzgar las contravenciones militares, policiales, de tránsito, de violencia intrafamiliar de conformidad con lo que dispone la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, o contravenciones de cualquier otra naturaleza, y determinará su competencia territorial de conformidad con las necesidades del servicio; y, 6. Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.<sup>115</sup>*

Lastimosamente, desde ese entonces no se ha integrado ningún Juzgado de Contravenciones, y los asuntos contravencionales siguen siendo de competencia de los funcionarios de la Función Ejecutiva, vulnerando de manera abierta la Unidad

---

<sup>115</sup> Art. 231 del Código Orgánico de la Función Judicial

Jurisdiccional. Gracias a un trabajo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y el Consejo de Judicatura del Ecuador, se crearon siete juzgados de contravenciones cuyo ámbito territorial se definió en el Art. 1 de la Resolución 077-2010 del Consejo de la Judicatura, publicada en el R.O. 367 del 20 de enero del 2011 para los siguientes sectores: Quitumbe, Centro, La Delicia, Mariscal, Calderón-Carapungo, Tumbaco y Los Chillos. Esto implica una competencia de carácter parroquial, limitada al ámbito de la Resolución.

**PROCEDIMIENTO:** El procedimiento será el previsto en el Art. 94 y siguientes de la LODC, y es el siguiente:

- **Denuncia:** De acuerdo al Art. 84 de la LODC, el proceso de juzgamiento de las infracciones cometidas a la luz de este cuerpo normativo, comienza mediante denuncia, acusación particular o excitativa fiscal. Es importante señalar el texto de este artículo en el sentido de que se prevé tres tipos de sujetos que podrían iniciar la acción como legitimarios activos. En el primer caso podemos ver que se refiere a las Asociaciones de Consumidores ya que ellos tienen entre sus atribuciones la de denunciar a las autoridades judiciales y administrativas por el cometimiento de conductas catalogadas como infracciones por este cuerpo normativo, o también se refiere a que el Defensor del Pueblo puede acusar sobre el hecho dañoso ante las autoridades judiciales respectivas. Respecto a la excitativa fiscal esta tiene sentido en cuanto al entenderse los derechos del consumidor como un asunto de interés público, por lo que el fiscal también puede intervenir con el fin de restaurar el orden que debe imperar en estas situaciones. Para el caso que nos atañe, la

acusación particular debe ir de parte del propietario del vehículo agraviado por esta venta condicionada y además con el fin de ser indemnizado por daños y perjuicios.

- **Citación:** El acusado deberá ser citado de acuerdo al Código Adjetivo Civil, con lo que estará debidamente noticiado con respecto a la denuncia formulada en su contra y podrá ejercer su derecho a la defensa.
- **Audiencia:** Una vez citado el denunciado, el Juez de Contravenciones en el caso de Quito, o los Comisarios, Intendentes y Tenientes Políticos en el resto del Ecuador, deberán señalar fecha y hora para llevar a cabo la Audiencia Única de Juzgamiento, la misma que se debe realizar en el plazo de diez días contados desde la fecha de notificación. En la Audiencia se inicia con la contestación del Acusado, luego se procede a despachar todas las pruebas que dispongan las partes. Luego de ello el juez debe procurar dictar sentencia. Sin embargo, si el juez lo requiere, se puede dictarla en el plazo perentorio de tres días.
- **Peritos:** En el caso materia de esta investigación, hemos señalado como fundamental la prueba instrumental del contrato de compraventa del vehículo en el que conste la cláusula condicional de la garantía y también las declaraciones de testigos que corroboren este hecho, es necesario, que se cuente con informes periciales que establezcan el hecho de que los mantenimientos rutinarios no pueden vincularse con los defectos de fábrica que puedan tener los vehículos y de esa manera desvirtuar cualquier argumento de la concesionaria. Por ello es necesario solicitar se ordene prueba pericial. Si el juez concede la misma, éste debe suspender la audiencia y conceder el plazo máximo de quince días para la presentación del

informe pericial, previo señalamiento de fecha y hora, para reanudación de la audiencia.

- **Sentencia:** La Sentencia condenatoria emitida por el Juez de Contravenciones contiene la imposición de la sanción al proveedor infractor, y además contiene implícitamente la obligación jurídica del proveedor de pagar daños y perjuicios, costos y honorarios a la persona afectada.
- **Recurso de Apelación:** La ley prevé que de esta sentencia, cabe la interposición de recurso de apelación, el mismo que debe ser presentado en el término de tres días contados a partir de la notificación de la sentencia, ante el Juez de Contravenciones que conoció el Proceso. Después de admitir el recurso, el Juez de Contravenciones remite el Proceso al Juez de Garantías Penales de su jurisdicción, mismo que resolverá de manera definitiva. Cabe decir que no existe recurso alguno de la Resolución del Juez Penal.
- **Acción de Daños y Perjuicios:** Dado que la sentencia del juez contiene implícita la obligación de responder por daños y perjuicios a la persona afectada, la ley remite al Art. 390 del Código de Procedimiento Penal para que de esa manera se sustancie el proceso respectivo al monto de los mismos. El Art. 391 del CPP refiere lo siguiente:

*Art. 391.- Daños y perjuicios.- El juez que sentencie una contravención es también competente para conocer de la acción correlativa de daños y perjuicios, la que se sustanciará en juicio verbal sumario y en cuaderno*

*separado. De la sentencia que dicte en este juicio no habrá recurso alguno.*

*En las contravenciones de violencia intrafamiliar, la o el ofendido no requerirá presentar acusación particular para acceder a la indemnización de daños y perjuicios.*

De esta norma jurídica podemos ver que el Juez de Contravenciones actúa como un juez civil y procede a resolver en vía verbal sumaria el asunto respectivo a los daños y perjuicios. Existe un aspecto interesante respecto de esta acción, que es la no idoneidad de interponer recurso alguno de la sentencia del juicio de indemnización.

La ventaja de esta acción radica en que tiene un procedimiento sencillo y permite al usuario ofendido reclamar los valores que sean necesarios para reparar el daño producido por la infracción cometida por el proveedor. En todo caso, la acción presenta un problema de naturaleza práctica y es que aún no se han implementado los juzgados de contravenciones en el país, a excepción del Distrito Metropolitano de Quito, que son judicaturas de muy reciente data. En el caso del resto del país estos aspectos siguen siendo resueltos por funcionarios del Ejecutivo que en más de una ocasión no cuentan con ninguna formación académica y responden a cuotas políticas que ubican los gobiernos de turno. Así es imposible una adecuada administración de justicia enmarcada en el respeto a la ley. Para finalizar, veremos las Acciones Civiles, que en este caso, comprenden el atacar este fenómeno jurídico desde otro ámbito de la ciencia del Derecho.

**5.8 Acciones civiles.-** Dentro del marco contractual que rodea a la situación jurídica de las garantías otorgadas por la compraventa de vehículos, tenemos claramente identificada la identidad contractual que atañe a este tipo de negocios jurídicos, y que comprenden al contrato de Adhesión. Dentro del ámbito del derecho civil hemos analizado que el condicionamiento de la cancelación de la garantía en caso de que no se acuda al concesionario a realizar los mantenimientos y chequeos es un vicio que afecta a la naturaleza del contrato de compraventa del vehículo que se encuentra oculto debido a la naturaleza del contrato, ya que de acuerdo al Art. 11 de la LODC es fundamental que en estos bienes el contrato contenga además la garantía por defectos de fábrica. Sabiendo que el condicionamiento de la garantía a la realización de los mantenimientos está vaciando la finalidad de la misma, tenemos que este es un vicio en la génesis del contrato. Por ello, en este caso podemos aplicar el Art. 20 de la LODC:

*“Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor podrá optar por la rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiera dado un menor precio por ella.”<sup>116</sup>*

Con esto nos tenemos que remitir al Parágrafo Octavo del Título de la Compraventa contenido en el Libro IV De las Obligaciones, que se refiere al saneamiento por los vicios

---

<sup>116</sup> Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Art. 20

redhibitorios mediante la acción redhibitoria que tiene por finalidad la rescisión del contrato, que viene a ser una forma de extinción de las obligaciones por el advenimiento de la nulidad relativa del mismo que se produce debido a que la voluntad de la persona se encuentra viciada por el error. Este es un error en cuanto a la calidad de la cosa, porque de conocerse al momento de la venta que la garantía está condicionada a la compra obligatoria del servicio de los mantenimientos rutinarios periódicos, por lo que el usuario podría seguir la acción redhibitoria con el fin de que se declare nulo el contrato y que se dé lugar a la acción correspondiente de indemnización por daños y perjuicios producidos por la nulidad del mismo.

La otra pretensión que puede caber en uno de estos procesos es el del saneamiento del vicio redhibitorio producido y que se fundamenta en que el vicio del consentimiento que se produce al haber estado oculto al momento de la venta del bien genera una nulidad relativa, la misma que puede sanearse por evento del tiempo, o de la voluntad de las partes. El saneamiento pretende superar el vicio que provoca defecto en el contrato de compraventa del vehículo y de esa manera restaurar el equilibrio en la relación jurídica originada entre las partes, para que finalmente prime el principio de la autonomía de la voluntad que es el que rige fundamentalmente en la compraventa ya que éste es un contrato por su naturaleza de carácter consensual.

En el caso de que se pretenda el saneamiento del vicio redhibitorio, el afectado puede solicitar que se restituya la cosa (en este caso la garantía cancelada por la realización del mantenimiento) o que se proceda a rebajar el precio pactado por la compra del vehículo, esta última se denomina Acción Redhibitoria *Quanti Minoris*.



En ambos casos, es menester señalar que de acuerdo al art. 1801 del Código Civil, se refiere a que si el vendedor conocía de la existencia de este vicio redhibitorio al momento de la compraventa, tiene que además responder con la indemnización por daños y perjuicios producidos al comprador, por lo que se ratifica lo contenido en el Art. 20 de la Ley Orgánica de defensa del consumidor. Respecto del procedimiento a seguirse y las condiciones procesales es necesario señalar los siguientes aspectos:

- **Competencia:** La competencia para estos procesos se encuentra radicada en los jueces de lo civil y mercantil del domicilio del demandado o el lugar donde se celebró el contrato, o en el lugar en el que se haya pactado en el contrato de compraventa. Aquí es menester señalar que al ser un proceso civil, la competencia se radica de acuerdo a la norma general.
- **Procedimiento:** El procedimiento previsto para tratar estos casos, debe ser sustanciado mediante proceso ordinario previsto en el Código de Procedimiento Civil ya que la norma no establece ningún procedimiento especial para este caso. Es menester señalar que este se diferencia de otros procedimientos anteriores debido a que el juez realiza una interpretación de los hechos y derechos a la luz del derecho civil.
- **Prescripción:** De acuerdo a los artículos 1806 y 1809 del Código Civil, la Acción Redhibitoria prescribe en seis meses para los bienes muebles como es el caso que nos atañe. El Art. 1809 refiere que la Acción Redhibitoria Quanti Minoris prescribe en un año para este mismo caso, de lo que se colige que si se persigue la restitución del bien o la rescisión del contrato, aplicaría la prescripción del Art. 1806 que es de seis meses. Sin embargo, dado que existe normativa específica al respecto en la Ley

Orgánica de Defensa del Consumidor, este plazo se modifica de la siguiente manera:

*“Art. 31.- Prescripción de las Acciones.- Las acciones civiles que contempla esta Ley prescribirán en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha en que se ha recibido el bien o terminado de prestar el servicio.*

*Si se hubiese otorgado garantía por un plazo mayor, se estará a éste, para efectos de prescripción.”<sup>117</sup>*

Aquí es importante el segundo inciso del Artículo, porque el contrato de compraventa del vehículo establece por cuánto tiempo se extiende la cobertura de la garantía de fábrica, que de manera general son determinados años o kilómetros recorridos. Es menester señalar que si la garantía es superior a un año, el tiempo para interponer la acción será el establecido para la garantía.

En segundo lugar es menester señalar que el tiempo de la prescripción empieza a correr desde el momento de la entrega real del vehículo, de acuerdo a lo que establece el Art. 1806 del Código Civil. Esta entrega debe entenderse como el momento en que la concesionaria entrega el vehículo para que el comprador lo utilice, más no como la transferencia como tal, ya que como estos contratos se firman como compraventas con reserva de dominio, puede confundirse el concepto de entrega física de la cosa. Sin embargo, si se encuentra prescrita la demanda de vicios redhibitorios, le queda a salvo al usuario, la acción civil por daños y perjuicios que devendrían de la responsabilidad extracontractual generada por la práctica de conductas prohibidas.

---

<sup>117</sup> Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Art. 31

La otra forma civil mediante la cual se puede reclamar la indemnización de daños y perjuicios deviene por la responsabilidad extracontractual generada por la actuación ilícita e intencionada de la Concesionaria al incurrir en infracción de sus derechos fundamentales como consumidor. Se puede observar esta cuestión desde el enfoque de haberse producido daños y perjuicios en la persona del comprador ya que éste sufre un perjuicio de carácter económico al forzársele a adquirir un servicio que tiene un costo superior al que se encuentra en el resto del mercado y también genera un riesgo en cuanto a su seguridad debido a que si el vehículo presentare fallas imputables a su fabricación, corre el riesgo de no ser reconocido en su derecho de restitución que viene a ser el contenido en la garantía de fabricación, lo cual impediría, que pueda desempeñarse en sus actividades de forma normal. Así se generan daño emergente y lucro cesante en el afectado. Cabe considerar además que al ser una práctica prohibida por la norma y establecerse una sanción para la misma esta se configura como un delito civil. Un delito civil es un acto unilateral ilícito que se ha realizado con dolo que se define como la intención positiva de irrogar injuria. El caso que nos atañe se puede definir como tal, ya que hacer una venta condicionada claramente denota se quiere perjudicar al comprador en sus libertades a más de los perjuicios económicos que se hayan levantado. Además, queda también al comprador, demostrar que también en este caso se generan daños morales en perjuicio del mismo, ya que la limitación en la libertad de elección de la persona, genera sufrimientos al saber que el vehículo no tiene la garantía del caso y que en cualquier momento podría pasar cualquier cosa con el mismo y perder el dinero invertido con tanto esfuerzo, a más del profundo temor y sentimiento de inferioridad en que se incurre por el hecho de tener que prácticamente estar a la buena voluntad de la concesionaria para hacer efectivos sus derechos fundamentales. La acción que corresponde para este caso es la de daños y

perjuicios, que se encuentra establecida en el Título XXXIII del Libro IV del Código Sustantivo Civil vigente. Sobre la misma podemos dar las siguientes especificaciones:

- **Competencia:** La competencia para estos procesos se encuentra radicada en los Jueces de lo Civil y Mercantil del domicilio del demandado o el lugar donde se celebró el contrato.
- **Procedimiento:** El procedimiento previsto para tratar estos casos, debe ser sustanciado mediante proceso ordinario previsto en el Código Procesal Civil ya que la norma no establece ningún procedimiento especial para este caso.
- **Prescripción:** De acuerdo al Artículo 2235 del Código Civil, las acciones de daño extracontractual prescriben en cuatro años contados a partir de la perpetración del acto que provocó el mismo. Por ende, esta acción debe ser tomada en el caso de que haya prescrito el plazo de prescripción previsto para otro tipo de acciones que puedan seguirse para este mismo caso. Analizando el caso de manera profunda, podemos ver que ésta podría ser la última alternativa a seguir si por descuido o por falta de conocimiento no se recurre a otras acciones.
- **Práctica probatoria:** Dada la naturaleza de estos casos, es fundamental en el ejercicio de la prueba el que se demuestre de manera efectiva el daño sufrido por el evento del acto doloso, para los daños materiales como el lucro cesante y el daño emergente se debe demostrar que la falta de garantía del vehículo o el hecho de obligar a la persona a realizar los mantenimientos en la concesionaria, genera perjuicio directo en su condición económica o en el ejercicio normal de sus actividades. Para el caso del daño moral, la prueba reviste de mayor complejidad ya que esos daños son de carácter inmaterial. Es así que tenemos que dar una preponderante importancia a la prueba testimonial, la cual debe dar suficientes

elementos de juicio para determinar la existencia de un perjuicio sea patrimonial o moral. El juez dada la complejidad de los casos de daño moral, tiene que resolver de acuerdo a las normas de la prudencia y a una sana valoración de las pruebas obtenidas.

El daño emergente, lucro cesante y daño moral se pueden pedir en la misma acción de indemnización por daños y perjuicios.

Finalmente, ya que se trata de procesos ordinarios, las partes tienen la facultad de emplear todos los medios impugnatorios que la ley prescribe.

### **5.9 Conclusiones y recomendaciones:**

El Contrato de Compraventa de los vehículos constituyen contratos de adhesión, ya que las cláusulas del mismo vienen ya dadas por formatos que manejan las casas automotrices y por ende el contenido de las cláusulas no puede ser negociado por el comprador, quien limita su manifestación de voluntad a adherirse a lo expuesto por la concesionaria. Dado que es un contrato de adhesión, éste se encuentra protegido por el marco normativo del derecho del consumidor.

En el contrato de compraventa de automóviles, la concesionaria, suele incorporar cláusulas prohibidas por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para los proveedores de bienes y servicios, las cuales acarrearán nulidad de lo estipulado. De lo que hemos explicado, estas prácticas prohibidas son las siguientes:

- Eximan, atenúen o limiten la responsabilidad de los proveedores por vicios de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados;

- Impliquen renuncia a los derechos que esta ley reconoce a los consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio;
- Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;
- Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver unilateralmente el contrato, suspender su ejecución o revocar cualquier derecho del consumidor nacido del contrato, excepto cuando tal resolución o modificación esté condicionada al incumplimiento imputable al consumidor;
- Cualquier otra cláusula o estipulación que cause indefensión al consumidor o sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.<sup>118</sup>

En el contrato de compraventa de automóviles, los proveedores de automóviles incurren en prácticas prohibidas por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, las cuales pueden ser objeto de sanción general de acuerdo al art. 70 de este cuerpo normativo a más de dar lugar al pago de indemnizaciones de daños y perjuicios al comprador. Las prácticas prohibidas son las siguientes:

- Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la contratación de un servicio, salvo que por disposición legal el consumidor deba cumplir con algún requisito;
- Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad del consumidor para venderle determinado bien o servicio;

---

<sup>118</sup> Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Art. 43. Edición de la Corporación de Estudios y Publicaciones. Mayo del 2009. Pág. 13

- Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, o dejarlo a su único criterio; y,

Del contrato de compraventa de automóviles pueden surgir vicios redhibitorios que pueden generar la nulidad de lo estipulado en cuanto a la relación contractual existente entre las dos partes, ya que el comprador, por su escaso conocimiento del ámbito de la técnica específica respectiva a la mecánica, no conoce que se está produciendo una venta condicionada o que está limitando su capacidad de ejercicio de sus derechos. Además, este vicio puede encontrarse presente, si no consta estipulación expresa que indique que la garantía concluye si se realizan los mantenimientos respectivos en la casa automotriz.

De acuerdo a los artículos de prensa y ejemplos obtenidos podemos constatar que en primer lugar existen muchos problemas en cuanto a la ejecución de la garantía de fábrica que se otorga a los vehículos ya que en muchos casos se encuentran contratiempos por trámites farragosos y además en algunas circunstancias, el servicio de reparación que se presta es de mala calidad, lo que pone en riesgo la seguridad de los usuarios. Es importante también señalar que los usuarios son atendidos de manera descortés por parte de las concesionarias y reciben información insuficiente o defectuosa.

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, existe un gran marco de protección de los derechos de las personas usuarias y consumidoras para los casos en que éstos sean vulnerados. En el caso que nos atañe, nos encontramos algunas vías para la tutela de estos derechos, y que son las siguientes:

- a) **Mecanismos de garantías constitucionales:** Con la aprobación del marco constitucional del año 2008, pudimos encontrar constitucionalizado el derecho de las personas a adquirir bienes y servicios de calidad y poder elegirlos en completa libertad. Dada esta constitucionalización, se vuelven derechos tutelables a través de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. De estos mecanismos vimos como positivo el aspecto de que son procedimientos sencillos, céleres y además que deben ser tramitados por los jueces de manera que se hagan efectivos los derechos. Sin embargo, en el plano real, es probable que estas acciones sean desestimadas por los jueces ya que podrían argumentar la existencia del medio impugnatorio vía Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
- b) **Mecanismos en base a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor:** La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece un procedimiento de juzgamiento de las infracciones realizadas en el marco de este cuerpo normativo. Este procedimiento se lleva ante los jueces de contravenciones de la jurisdicción donde se producen los hechos. Este procedimiento es también bastante célere y además permite que se fijen indemnizaciones y reparaciones por los daños y perjuicios provocados al consumidor. Además, cabe también que se realicen investigaciones ante el Defensor del Pueblo, cuestión que genera el levantamiento de un informe de alto valor probatorio. Además, existe la posibilidad de que la legitimación activa la tengan las Asociaciones de Consumidores. Sin embargo, esta vía tiene los siguientes problemas:
- No existe adecuada cultura en derecho de consumo en el Ecuador y las Asociaciones no pueden trabajar a plenitud. Los consumidores se hallan demasiado atomizados por ello no es eficaz seguir a través de estos entes.



- No existen jueces de contravenciones más allá del Distrito Metropolitano de Quito, y que recién fueron implementados en marzo del año 2011, por ello la competencia sigue radicada en servidores de la Función Ejecutiva que desconocen el derecho y por ende, no pueden dar resoluciones de calidad y pueden afectar de peor manera a los derechos de los consumidores.
- c) **Acciones civiles:** En este caso vimos la acción redhibitoria que puede seguirse con ocasión de los vicios ocultos presentes en la relación contractual de la compraventa del vehículo, que persiguen o la rescisión del contrato o el saneamiento del mismo que vendría a ser la restauración de la garantía, a más de las acciones de responsabilidad extracontractual que vienen a ser los daños y perjuicios provocados por las prácticas abusivas que pueden enmarcarse como daños materiales o morales. El principal inconveniente de este caso es que se tramita por vía ordinaria y es un proceso largo y farragoso.

## BIBLIOGRAFIA:

- Parraguez Ruiz Luis, Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Volumen I, Primera Edición, Junio 1986, Gráficas Mediavilla. Quito Ecuador.
- Larrea Holguín Juan, Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Libro 3, volumen 4, Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito 2005.
- Alessandri R., Arturo. Tratado de las Obligaciones. Volumen de las obligaciones en general y sus diversas clases, segunda edición ampliada y actualizada por Antonio Vodanovic H.
- Álvarez Faggioni Alejandro. Estudio De Las Obligaciones En El Derecho Civil Ecuatoriano, Tomo I, Imprenta de la Universidad de Guayaquil. 1982. Pág. 10.
- García Amigo Manuel. Lecciones De Derecho Civil II, Teoría General De Las Obligaciones Y Contratos, edición en español McGraw Hill, 1995.
- Lindblom Charles Edward. Proceso De Elaboración De Políticas Públicas. Madrid, Ministerio para la Administración Pública.
- Parraguez Ruiz Luis. Manual de Derecho Civil Ecuatoriano. Quito, Gráficas Mediavilla, Volumen I, 1986.
- Larrea Holguín Juan. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, libro 3, volumen 4, 2005.
- Alessandri R., Arturo. Tratado de las Obligaciones. volumen de las obligaciones en general y sus diversas clases, segunda edición ampliada y actualizada por Antonio Vodanovic H.
- Álvarez Faggioni Alejandro. Estudio De Las Obligaciones En El Derecho Civil Ecuatoriano. Tomo I, Imprenta de la Universidad de Guayaquil, 1982, pág. 10.

- García Amigo Manuel. Lecciones De Derecho Civil Ii, Teoría General De Las Obligaciones Y Contratos. edición en español McGraw Hill, 1995.
- Carlos Santiago Nino, Introducción al Análisis del Derecho. Buenos Aires, Editorial Astral, 2da edición ampliada, 2001. Págs. 195, 196.
- Marco G. Monroy Cabra. Introducción al Derecho. Bogotá, Editorial Temis S.A., duodécima edición, 2001
- Jaime Santos Briz. La Contratación Privada. Madrid, Editorial Montercorvo, 1960
- Fernando Cancino. Estudios de Derecho Privado. Editorial Temis.
- Salgado Pesantez Hernán. LECCIONES DE DERECHO CONSTITUCIONAL. Quito – Ecuador, Ediciones Legales S.A., Pág. 17.
- Juan Larrea Holguín. Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador. Quito, Corporación de Estudios y Publicaciones, séptima edición actualizada, 2005. volumen 4, página 12.
- Rabinovich-Berkman Ricardo D. RECORRIENDO LA HISTORIA DEL DERECHO. Quito-Ecuador, 2003. Pág. 318
- Diccionario Enciclopédico OCEANO UNO, edición 2004
- Guillermo Cabanellas de Torres, Diccionario Jurídico Elemental. Argentina. Editorial Heliasta. Decimosexta edición, Pág. 178
- Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado.- Volumen V. Tomo X. Pág. 14.
- VIVANCO, Clemente. “LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN”. Artículo publicado para la revista virtual derechoecuador. Acceso web:

[http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2493&Itemid=426](http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2493&Itemid=426) Último Acceso: 19/02/2011

- CEVALLOS, Víctor. LIBRE COMPETENCIA, DERECHO DE CONSUMO Y CONTRATOS. Editorial Jurídica del Ecuador. Primera Edición. 2001. Quito.
- *Mauricio Narváez Álvarez*, Carros nuevos y garantías *Quito. Hallado en* <http://www.eluniverso.com/2011/02/21/1/1366/carros-nuevos-garantias.html>  
Último acceso: 22/03/2011
- Redacción autoprofesional.com El 19% de las extensiones de garantía en vehículos nuevos incumple la normativa. Hallado en [http://www.autoprofesional.com/noticias/detalle\\_noticia/\\_asset\\_publisher/1Oqw/content/el-19-de-las-extensiones-de-garantia-en-vehiculos-nuevos-incumple-la-normativa](http://www.autoprofesional.com/noticias/detalle_noticia/_asset_publisher/1Oqw/content/el-19-de-las-extensiones-de-garantia-en-vehiculos-nuevos-incumple-la-normativa)
- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional
- Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
- Reglamento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
- Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor o Usuario
- Código Orgánico de la Función Judicial
- Código de Procedimiento Penal
- [http://www.micip.gov.ec/index.php?option=com\\_content&view=article&id=446&Itemid=5](http://www.micip.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=446&Itemid=5)[http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news\\_user\\_view/ministro\\_xavier\\_abad\\_politica\\_industrial\\_cambiara\\_el\\_patron\\_productivo\\_del\\_ecuador\\_audio--97042](http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ministro_xavier_abad_politica_industrial_cambiara_el_patron_productivo_del_ecuador_audio--97042)
- <http://www.coinvertir.org.ec>

- [http://www.acuerdoscomerciales.cl/normas\\_arancelarias.htm](http://www.acuerdoscomerciales.cl/normas_arancelarias.htm)
- <http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ensambladora-42-carros-al-dia-4707-4707.html>. Publicado el 04/Agosto/1996 | 00:00;  
<http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/ensambladoras-a-punto-de-quebrar-10257-10257.html>. Publicado el 08/Noviembre/1999 | 00:00
- <http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/transporte.html#app=15bc&fc07-selectedIndex=1>
- [www.expreso.ec/autos/ventas.asp](http://www.expreso.ec/autos/ventas.asp)
- Constitución Política del Ecuador, 2008Código Civil Ecuatoriano
- Código de Procedimiento Civil
- Código de Comercio del Ecuador
- Ley Orgánica de Instituciones Financieras del Ecuador

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR

DECLARACIÓN y AUTORIZACIÓN

Yo, David Rafael Maya Almeida, C.C. 1715825665 autor del trabajo de graduación titulado: ¿Es legal la obligación impuesta por las casas comerciales automotrices de realizar todo tipo de mantenimiento únicamente en sus talleres so pena de perder la garantía de fábrica que tienen los vehículos cero kilómetros?, previa a la obtención del grado académico de LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS en la Facultad de JURISPRUDENCIA:

1.- Declaro tener pleno conocimiento de la obligación que tiene la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, de conformidad con el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de entregar a la SENESCYT en formato digital una copia del referido trabajo de graduación para que sea integrado al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor.

2.- Autorizo a la Pontificia Universidad Católica del Ecuador a difundir a través de sitio web de la Biblioteca de la PUCE el referido trabajo de graduación, respetando las políticas de propiedad intelectual de Universidad.

Quito, 15 de septiembre del 2011



1715825665

FIRMA Y CÉDULA